



# Orlando Araujo

VENEZUELA VIOLENTA

COLECCIÓN BICENTENARIO CARABOBO

200  
BATALLA DE  
CARABOBO

**Orlando Araujo** (1927-1987) Político, periodista, economista, crítico literario y profesor universitario. Araujo por sobre todas las cosas fue un escritor comprometido y estudioso de la realidad venezolana, utilizó el ensayo, entre otros géneros, como vía expresiva para describir y analizar procesos históricos, económicos y culturales que contribuyeron a explicar la Venezuela contemporánea. Es distinguido con el primer premio del Concurso Anual de Cuentos de *El Nacional* en 1968; Premio al Mejor Libro Infantil en 1972; Premio Nacional de Literatura en 1974 y Mención de Honor de la Unesco para el año 1979. Entre sus obras destacan: *Compañero de viaje* (1970), *Narrativa venezolana contemporánea* (1972), *Carta a Sebastián para que no me olvide* (1988) y *Compañero de viaje y otros relatos* (2005).

« *Reventón del pozo Barrosos*

1922

Archivo Audiovisual de la Biblioteca Nacional

Caracas



**22**

## **Venezuela violenta**

ORLANDO ARAUJO



## COLECCIÓN BICENTENARIO CARABOBO

---

### EN HOMENAJE AL PUEBLO VENEZOLANO

El 24 de junio de 1821 el pueblo venezolano, en unión cívico-militar y congregado alrededor del liderazgo del **LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR**, enarboló el proyecto republicano de igualdad e “independencia o nada”. Puso fin al dominio colonial español en estas tierras y marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de la Patria. Ese día se libró la **BATALLA DE CARABOBO**.

La conmemoración de los 200 años de ese acontecimiento es propicia para inventariar el recorrido intelectual de estos dos siglos de esfuerzos, luchas y realizaciones. Es por ello que la **COLECCIÓN BICENTENARIO CARABOBO** reúne obras primordiales del ser y el quehacer venezolanos, forjadas a lo largo de ese tiempo. La lectura de estos libros permite apreciar el valor y la dimensión de la contribución que han hecho artistas, creadores, pensadores y científicos en la faena de construir la república.

La **COMISIÓN PRESIDENCIAL BICENTENARIA DE LA BATALLA Y LA VICTORIA DE CARABOBO** ofrece ese acervo reunido en esta colección como tributo al esfuerzo libertario del pueblo venezolano, siempre insurgente. Revisitar nuestro patrimonio cultural, científico y social es una acción celebratoria de la venezolanidad, de nuestra identidad.

Hoy, como hace 200 años en Carabobo, el pueblo venezolano continúa librando batallas contra los nuevos imperios bajo la guía del pensamiento bolivariano. Y celebra con gran orgullo lo que fuimos, somos y, especialmente, lo que seremos en los siglos venideros: un pueblo libre, soberano e independiente.

**Nicolás Maduro Moros**

**PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**



**Nicolás Maduro Moros**  
**PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA**

COMISIÓN PRESIDENCIAL BICENTENARIA DE LA BATALLA Y LA VICTORIA DE CARABOBO

**Delcy Eloína Rodríguez Gómez**

**Vladimir Padrino López**

**Aristóbulo Iztúriz Almeida**

**Jorge Rodríguez Gómez**

**Freddy Nájuez Contreras**

**Ernesto Villegas Poljak**

**Jorge Márquez Monsalve**

**Rafael Lacava Evangelista**

**Jesús Rafael Suárez Chourio**

**Félix Osorio Guzmán**

**Pedro Enrique Calzadilla**





# Venezuela violenta

ORLANDO ARAUJO





## Índice

- 11 Este ensayo
- 13 Una impresión caótica
- 23 Lo primero es la tierra
- 50 A cien años de Ezequiel Zamora
- 62 Sucursal Venezuela
- 99 Un puente made in USA
- 117 Nuestro señor el petróleo
- 132 Situación de la burguesía
- 147 Contexto político de la violencia
- 168 Para qué la violencia



## Este ensayo

En este ensayo hay varios años de trabajo, de meditación y de experiencias intensamente vividas. Sin tener la verdad agarrada por las barbas, he venido cotejando mis observaciones con la realidad y he comprobado un grado de correspondencia y de ajuste que me anima a entregarlo al editor con la seguridad de cumplir, dentro de mis humanas limitaciones, la responsabilidad fundamental que se le exige al escritor: escribir cuando se tiene algo que decir, cuando se considera necesario decirlo y cuando es más fuerte esa necesidad que los miedos adyacentes.

Meditar sobre la violencia en un país tan violento como el nuestro, expresar el resultado del análisis y de la reflexión rompiendo el tabú que custodia interesadamente el tema, e invitar a los demás a pensar y a discutir abiertamente sobre el destino de una sociedad en la cual la violencia puede ser sostenida como solución, es tan importante y tan necesario como pensar y discutir sobre política petrolera en una sociedad tan aceitada como la nuestra.

Hemos castigado una y otra vez el lenguaje para evitar dos calamidades: la del lenguaje críptico que, en nombre más de la pedantería que de la ciencia verdadera, sólo se comunica con *iniciados*; y la del lenguaje de los epítetos hirientes, efectivo a veces en la polémica verbal, pero inútil

y hasta negativo allí donde el análisis y la demostración objetiva son armas más poderosas y de efecto más perdurable que el odio o la mala intención. En todo caso, cuando la pasión hace saltar un calificativo feroz, yo he procurado que sea como conclusión y no como premisa de un juicio.

La violencia en Venezuela, y es también el caso de América Latina, tiene raíces profundas que vienen fortaleciéndose desde la Colonia hasta nuestros días y, en su contexto histórico, esa violencia presenta dos fases —*la violencia feudal* y *la violencia imperialista*— que hoy coexisten y se manifiestan en un complicado cuadro de convulsiones y explosiones complementarias como reflejo de una crisis irreversible ya puesta en el camino de su estallido final.

Al estudio histórico, económico, social y político de este fenómeno he dedicado este ensayo que ahora sale de mi cuidado para correr su propio riesgo. Su deuda mayor la ha contraído con autores universitarios que han investigado aspectos parciales de la totalidad aquí abarcada y su fuente principal —todas están reconocidas en su correspondiente lugar— han sido los centros de investigación histórica, social y económica de la Universidad Central de Venezuela.

Muchos se sentirán defraudados de que aquí no aparezcan ni el dictador Pérez Jiménez, ni Rómulo Betancourt, ni Leoni como padres de la violencia: a lo sumo quedan como hijos legítimos o bastardos de una violencia que los tuvo a su servicio. Este no es, tampoco, un libro sobre las guerrillas, a pesar de que a ellas dedicamos buena parte del ensayo: dentro de nuestro análisis, y puesta en una perspectiva histórica, el auge o depresión de la lucha armada es un fenómeno coyuntural dentro de la realidad estructural de la liberación. Por todo ello, no le sorprenda a nadie que para buscar a fondo el sentido de la violencia nosotros hagamos con toda seriedad un estudio del problema agrario, industrial y petrolero, así como análisis de la situación de la burguesía venezolana.

## Una impresión caótica

Un viajero observador que se hubiese detenido un cierto tiempo en Venezuela y se informara sobre la situación del país a través de los diarios que circulan legalmente, iría llevando en su libreta de notas, no importa el orden de las materias ni la cronología de los sucesos, un conjunto de datos sueltos, aparentemente desligados entre sí, pero reveladores en sus contradicciones y paradojas, de un estado crítico agudo. Entre otras cosas, el testigo imparcial anotaría que Venezuela es el país de mayor ingreso por persona en América Latina y que, sin embargo, investigaciones realizadas por técnicos al servicio del Gobierno demuestran que grandes masas rurales y urbanas obtienen un ingreso real por debajo del límite de subsistencia. Tendría que anotar, asimismo, que gracias a los impuestos que pagan las compañías extranjeras explotadoras del petróleo, los presupuestos de gastos públicos vienen progresivamente rebasando los 1.500 millones de dólares por año y que, sin embargo, la curva de empréstitos públicos provenientes describen una trayectoria ascendente, a lo cual añadiría la existencia de incrementos anuales de la inversión extranjera en ciertos sectores preferidos por dicho capital. No obstante todo ello, habría que anotar que tanto la prensa oficial como la no oficial expresan una realidad cuya magnitud, variable según la posición de

quien opine, es por todos aceptada como anormal y como factor de serios desajustes sociales con explosiones intermitentes cada vez más graves.

El crecimiento demográfico, que oscila entre 3,5% y 4% anual, es uno de los más altos comparado con cualquier país del mundo. Más de 75% de la población está situada en edades por debajo de los 25 años. Existen, según se ha dicho, grandes masas ajenas al proceso de producción y consumo. Todo lo cual permite comprender que la industria manufacturera trabaje a un 50% de su capacidad instalada y que el mercado no permita el desarrollo de producciones en gran escala. Sin embargo, Venezuela se distingue por sus altos niveles de importación de bienes de consumo, tanto básicos como suntuarios, a tal punto que el comercio de estos bienes sigue siendo uno de los sectores de mayor acumulación de capital.

La industria petrolera instalada en Venezuela es una de las más avanzadas del mundo, tanto en el nivel tecnológico como en la magnitud del capital. Los lugares donde está ubicada —Zulia, Falcón y estados orientales— son zonas agrícolas en las cuales predomina el sistema latifundista de explotación y donde vegetan millares de campesinos conuqueros situados en la escala más ínfima de la productividad. En la industria petrolera hay unos 30 mil obreros que trabajan organizados en sindicatos y con arreglo a contratos colectivos. Constituye menos del 2% de la población activa. En aquella agricultura atrasada hay un millón de venezolanos (algo más del 30% de la población activa), los cuales están todavía esperando una reforma agraria que no llega.

Y si de las paradojas económicas pasamos a las contradicciones políticas, el viajero anotaría la existencia de un gobierno surgido de unas elecciones, el cual fundamenta su mandato y su razón histórica de la vigencia y en la defensa del sistema democrático pero, sin embargo, mantiene dos partidos políticos ilegalizados, varios periódicos de izquierda han sido clausurados por decreto, hay cientos de presos políticos en todas



las cárceles del país y entre ellos varios parlamentarios cuya inmunidad fue violada, se denuncia la existencia de campos de concentración, de torturas físicas y de una represión que ha llevado a sectores del ejército, por encima de la Constitución nacional, a ofrecer en avisos públicos premios metálicos por la captura, vivos o muertos, de ciudadanos perseguidos policialmente.

En Venezuela se ha vivido una situación ambivalente de violencia y un estado virtual de guerra civil. Nuestro observador iría anotando cómo la acción de las guerrillas, que abarca varios estados del país, está presente en la vida cotidiana de Venezuela y cómo es negada su existencia o anunciado su aniquilamiento, también cotidianamente, por el gobierno y el ejército. La prensa informa, sin mayores detalles, sobre fusilamientos en las zonas guerrilleras y sobre la suerte de “extremistas” que son tomados presos y que luego desaparecen misteriosamente.

Como un dato más, anotaría la existencia circunstancial de una coalición de partidos políticos que representan diversos intereses y cuyas contradicciones internas se vislumbran unas veces y estallan otras, bien sea en los actos de gobierno, bien en las declaraciones pugnaces de sus dirigentes y, característicamente, en la neutralización y vacilaciones de la política reformista adoptada como programa de gobierno. En el campo de la política internacional, el observador advertirá una mezcla de imprudencia y cobardía, una sustitución de principios por bravuconadas que concluyen siempre del mismo modo: aceptando la línea impuesta desde Washington.

Si de las páginas informativas, nuestro testigo pasa a las de opinión, observará que la mayoría de los articulistas, por no decir la totalidad, insisten en el tema de la pacificación, reflejando así una preocupación fundamental del país. Las organizaciones empresariales, la iglesia, los partidos políticos —aún los del gobierno— y las organizaciones clandestinas comprometidas en la lucha armada han expresado y expresan

continuamente la necesidad de hacer la paz y de evitar al país mayores sacrificios. Coinciden unos y otros en que esa pacificación no debe ser una operación de borrón y cuenta nueva, pero difieren profundamente acerca de qué es lo que no se debe borrar y cuál es la cuenta vieja a cobrar. Para las clases altas y para el gobierno, se trata de una entrega de las armas por parte de los grupos rebeldes y una distribución de misericordias oficiales entre los arrepentidos cuyos jefes, sin embargo, tendrían que ser juzgados para no sentar malos precedentes. Para los guerrilleros lo que no se puede borrar es el sacrificio y la muerte de sus compañeros y la cuenta vieja no es otra que la de un cambio del sistema económico y del régimen político. Entre estas dos maneras extremas de ver y sentir, se mueve toda una escala de matices, cada uno con su fórmula para resolver el problema que, sin embargo, se torna cada vez más complejo y se convierte en una situación explosiva observada muy de cerca por las grandes potencias mundiales y sentida por los demás países de América Latina como una experiencia decisiva que compromete su destino histórico.

En su libreta de notas, el viajero tiene ya suficientes elementos como para percibir que en Venezuela se desarrolla una crisis que va expresando diariamente sus síntomas económicos, políticos y sociales. Sus conocimientos del subdesarrollo económico le permitirán identificar, por debajo del conflicto de las fuerzas internas, la presencia y la operación de fuerzas e influencias internacionales empeñadas en prever, condicionar y orientar el proceso y los resultados de la lucha interna. Venezuela produce petróleo, es el segundo gran productor de este combustible situado en el mundo capitalista. Durante casi medio siglo, los capitalistas norteamericanos e ingleses que dominan el negocio han venido sacando, en menos de cincuenta años, mediante la reinversión parcial de sus grandes utilidades, calificadas de “fabulosas” por el *Wall Street Journal*, una cantidad que sobrepasa los 15.000 millones de dólares, que

es prácticamente el monto de la inversión prevista de “Alianza para el Progreso”. Tanto los consorcios que realizan este jugoso negocio —concretamente la Standard Oil y la Royal Dutch Shell— como los gobiernos extranjeros que protegen esos intereses, no sólo desean conservarlo, sino que están dispuestos a permitir pequeñas reformas si éstas son presionadas por el gobierno local, y están resueltas a utilizar la fuerza si consideran seriamente amenazados sus intereses. A fin de evitar esto último, las compañías petroleras y el Departamento de Estado ponen en juego la diversidad de sus poderes y recursos para sostener en el poder gobiernos que garanticen la intangibilidad de sus intereses materiales así como el acatamiento a los dictados provenientes de Washington. Es evidente que el gobierno actual, siguiendo el ejemplo sentado por Rómulo Betancourt, realiza verdaderos esfuerzos para ofrecer aquellas garantías pero es evidente, asimismo, que existen en su seno contradicciones que le impiden cumplir requisitos a cabalidad: de allí las vacilaciones de su política internacional y la ausencia de una política petrolera definida.

Como contrapartida, en sectores cada vez más numerosos de la población se ha venido incubando un sentimiento nacionalista, arraigado emocionalmente en las masas y definido en términos claros y precisos dentro de los sectores de vanguardia, fundamentalmente en el frente estudiantil, en el frente obrero y en un amplio círculo de intelectuales. El observador en tránsito anotará como dato importante que los partidos de gobierno están formados por los restos de organizaciones otrora populares, de tendencia marxista y con programas antiimperialistas los cuales han sido abandonados por el ejercicio del poder y que los desprendimientos de esos partidos, que continuaron guardando fidelidad a aquellos programas y principios, constituyeron un archipiélago de organizaciones de izquierda cuyo drama consiste en las dificultades para encontrar una vía práctica hacia la unidad. Complemento de esta anotación es la existencia en el seno de los partidos conservadores

—socialcristianismo, partidos de gobierno— de fuerzas y tendencias no desprendidas, pero ganadas por la causa nacionalista y partidarios de cambios profundos, que marchan en conflicto con las direcciones respectivas de sus comandos políticos.

Estas pinceladas perfilan un cuadro de relaciones inestables propio de las sociedades en crisis. La paradoja y la contradicción son los ingredientes que tornan caótica, a primera vista, la imagen de la Venezuela de hoy, y es explicable la confusión de quien se asome a las ventanas de esta realidad y mire sencillamente adentro. Existe un gobierno grato a Washington sin que ello signifique una total confianza, a pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano para no caer en desgracia. Se habla de la desaparición de las guerrillas o de su extrema debilidad, pero un día cualquiera se da noticia de una emboscada a una patrulla militar, de un encuentro entre soldados y guerrilleros, o de una acción urbana “terrorista”, todo ello en las narices de un ejército siempre vigilante y bien asesorado. Un alto funcionario declara que se trata de una lucha desasistida de apoyo campesino, y un sacerdote denuncia el fusilamiento de unos campesinos que colaboraron con los rebeldes, al tiempo que aviones de la fuerzas aéreas destruyen sembrados y siembran pánico en la población rural. Los señores del capital se alarman, han confiado al gobierno la misión de pacificar el país a sangre y fuego, le han pedido que sea implacable y el gobierno lo es con verdadero empeño, pero los “extremistas” no se acaban y cada vez que se anuncia su aniquilación, dan demostraciones de su combatividad en varias partes del país. Un intelectual de prestigio y gran influencia política, que hizo la oposición al gobierno de Rómulo Betancourt y aceptó integrar la coalición con Raúl Leoni —el doctor Arturo Uslar Pietri— se proponía alcanzar un punto eléctrico entre los extremos de la lucha y buscar la pacificación mediante una política de equilibrio pero, a un año de compartir el poder, este ilustre escritor sólo había logrado disminuir su prestigio y colocar en

varios ministerios a algunos de sus seguidores políticos. Mientras tanto, los sectores de oposición lo hicieron corresponsable de los errores del gobierno y del fracaso administrativo y político de la coalición, muchos electores que votaron por él como una fórmula contra la represión, el hambre y la incapacidad, reaccionaron considerando que había dado la espalda a tales promesas.

¿Cuáles son los factores determinantes de este acontecer de apariencia caótica que así eleva como destruye prestigios cimentados en largos años de labor intelectual y política? ¿Cuáles son las causas de esa profunda crisis cuyo fermento ha recogido nuestro viajero en su libreta de notas? ¿Quién o quiénes son los culpables de la violencia que ha abrasado con su fuego los cuatro costados del país? ¿Por qué surgieron guerrillas en Venezuela? ¿A qué se debe que un gobierno cuyo fundamento filosófico y cuya razón de ser se basa en el mantenimiento y función de la democracia representativa esté gobernando con los métodos característicos de la dictadura y hunda en las cárceles a parlamentarios, a periodistas, a estudiantes, a profesores y a cientos de ciudadanos a quienes no se les sigue juicio o se les inventa cargos burdamente, con violación de las libertades consagradas en la Constitución?

Intentar responder estas preguntas con la objetividad que exige el juicio histórico es muy difícil para quien se encuentra participando en el drama; pero es ahora, precisamente ahora, cuando tenemos más necesidad y urgencia de plantearlas y de ensayar respuestas que nos permitan descubrir la coherencia dinámica por debajo de la apariencia caótica y que nos permitan, asimismo, ofrecer al mundo una versión del drama, una interpretación de la violencia, una imagen de nuestro país más cercana a nuestra realidad histórica que las que están ofreciendo las agencias de prensa al servicio del imperialismo.

“Venezuela tiene la clase de gobierno que mejor conviene a América Latina”, “Rómulo Betancourt es un gobernante que debiera ser imitado

en el resto del continente”, “la democracia venezolana es ejemplar”, son expresiones corrientes de las declaraciones emanadas de la Casa Blanca y del Departamento de Estado y ellas encierran una dolorosa verdad: gobiernos como los de Rómulo Betancourt, Raúl Leoni y sus diversos asociados son los que mejor sirven a los intereses económicos y políticos del imperio del Norte porque tales gobiernos cubren, con velos de formalismo legal, los andrajos de una popularidad perdida y de un prestigio subastado en el más vergonzoso remate de la soberanía económica, política y cultural del país.

Venezuela no es hoy la víctima de un caudillo feudal al estilo de Juan Vicente Gómez, no padece tampoco la dictadura de un militar cerrado al estilo de Pérez Jiménez. Muy al contrario, quienes hoy gobiernan padecieron, resistieron y combatieron contra aquellos regímenes. Son universitarios. Muchos de ellos están sorprendidos y no pocos están asustados por el giro de los acontecimientos. Un hombre como Raúl Leoni carece de la energía necesaria para ser violento, su temperamento es “municipal y espeso” y personalmente habría deseado gobernar sin problemas, sin guerrillas, sin presos; pero en los años que lleva de gobierno ha superado el “récord” de Betancourt en cercos militares a zonas campesinas, en bombardeos indiscriminados con destrucción de pequeñas sementeras, en torturas y fusilamientos. La lista de periódicos cerrados por el gobierno anterior continuó el presente con la clausura del diario *La Extra*, y aún continúa la práctica rutinaria de apresar periodistas de la oposición.

Muchos de estos hombres ingresaron al gobierno con la ilusión de hacer cambios —pero sin correr riesgos—. Deseaban hacer una política nacionalista en petróleo, pero sin tener problemas con las petroleras; deseaban hacer una reforma agraria, pero sin chocar con los latifundistas ni con la gran burguesía agraria; proyectaban una reforma impositiva, pero sin entrar en conflicto con los sectores del capital; concibieron

una ley para rescatar la soberanía estatal de la educación, hoy penetrada por grupos religiosos y sectores privados, pero dispuestos a evitarse líos con la Iglesia y sus aliados. Puestos en la alternativa de avanzar por el camino de las reformas a fondo, entrando en el inevitable conflicto con los grupos de poder, pero fortaleciéndose en el apoyo popular, o de mantener el apoyo de estos grupos al precio de conservar las viejas estructuras y garantizar los privilegios, a aquellos hombres que escogieron este último camino, creyéndolo el más fácil y el que les daría mayor estabilidad en el poder; la realidad les está demostrando lo contrario: escogieron el camino más difícil y más tortuoso, se volvieron contra sí mismos, traicionaron al pueblo que los había hechos fuertes y ahora caminan contra la historia, luchan aquellos personajes de Dostoievski que un día dejaron de creer en Dios, van cayendo en todos los excesos y crímenes que su fe de antes les tenía prohibidos. Por su lucidez, por su conciencia, por su cultura, por su responsabilidad y por su compromiso, por todo ello, la culpa de estos hombres es mayor que la de Juan Vicente Gómez y que la de Marcos Pérez Jiménez. En ellos había puesto su confianza un pueblo que la había retirado de militares y caudillos y ellos defraudaron nuevamente esa esperanza. Por eso es que la Universidad los odia y los desprecia como no despreció ni odió a Pérez Jiménez y a Gómez. Estos venían de afuera, eran sus enemigos naturales, los explicaba la barbarie, pero aquellos surgieron del seno de la Universidad, bebieron su leche nutricia y ahora gobiernan contra la Universidad y contra el pueblo, apoyados en los mismos símbolos en que aquellos se apoyaron: el Tío Sam y la espalda envilecida que le sirve.

Nuestro propósito es enmarcar la curva de esta traición dentro de sus coordenadas económicas y políticas, buscar en nuestra historia y dentro de la estructura económica actual los hilos conductores que nos guíen a través del laberinto hasta las bases que sustentan, determinan y dinamizan la lucha por la liberación de Venezuela. Veremos, entonces, que

no es un capricho, ni una acción mimética la acción revolucionaria en Venezuela, que no son unos aventureros quienes dedican su vida para hacerla triunfar y que la violencia en Venezuela no es el fruto perverso de unos adolescentes temerarios dirigidos por adultos irresponsables, sino la llama alimentada por más de cien años de grandes frustraciones y cuya explosión es provocada por la agudización de una crisis estructural llevada al estallido por una conducción errónea.



## Lo primero es la tierra

*Este es un pueblo que da batalla sin tener armas, que triunfa con los reveses, que en los desastres se organiza, que el terror lo exalta, que la clemencia fingida o real lo indigna, con quien no hay medio ni esperanza que tuerza o adultere su propósito, porque no cree, porque no quiere, porque no se presta a nada que no sea el triunfo de la revolución tal como él la quiere: absoluta y radical.*

JUAN CRISÓSTOMO FALCÓN

Proclama fechada en Agua Clara, 1861

**A** pocos kilómetros de Valencia, en el campo de Carabobo, se levanta un monumento para conmemorar la batalla que decidió la emancipación venezolana del imperio español. Los camioneros, los conductores de autobuses y de automóviles, los pasajeros y los maestros y escolares que a diario pasan por allí o viajan expresamente hasta el lugar, contemplan los inexpresivos y hasta detestables bronce de los héroes con respeto, casi con veneración. Allí hay algo que es esencial a un pueblo: el testimonio de que un día fue grande y heroico, el recuerdo de que muchos miles de compatriotas dieron sus vidas por hacernos libres y la lección ejemplar de que ningún enemigo es demasiado poderoso cuando un pueblo decide asumir la autonomía de su destino histórico. Ningún lugar más adecuado que éste para evocar el pasado glorioso, para exaltar la condición heroica, para convocar a Venezuela a una gesta revolucionaria. Esto fue, precisamente, lo que quiso hacer Rómulo Betancourt como presidente de Venezuela cuando, el 5 de marzo de 1960, entró al Campo de Carabobo solemnemente acompañado por las más altas

personalidades de su régimen de coalición<sup>1</sup>. Rómulo Betancourt convocaba para anunciar la independencia económica de Venezuela, la cual quería simbolizar con el acto de la firma de la Ley de Reforma Agraria. Con este grandilocuente párrafo abrió la ceremonia:

Se escogió con acierto el sitio para promulgar, de acuerdo con pautas constitucionales, la Ley de Reforma Agraria.

Este Campo de Carabobo es más cal de huesos de libertadores que propia tierra. Aquí dieron su sangre y su vida mantuanos y negros primeros para que Venezuela alcanzara su estatura de nación libre y soberana. Hoy venimos, en esta hora saturada de inocultable emoción venezolanista, a estampar el “ejecútese” a una legislación elaborada por el soberano Congreso de la República que complementa y remata lo que con las armas en la mano conquistaron los abuelos próceres en la batalla del segundo Carabobo.

Y siguiendo su estilo de matizar con datos sus peroraciones, el Presidente señalaba:

Sin resolverse el problema de una vasta porción del país económicamente marginal y una minoría en disfrute y posesión de la tierra, adivino la era del petróleo.

Crecieron las ciudades a costa del campo, y un abismo cada vez más hondo se abrió entre una Venezuela urbana beneficiándose de las regalías e impuestos y una vastísima masa depauperada, vegetando más que viviendo del precario producto del conuco. Hoy, en esta Venezuela donde según los fríos cálculos de los economistas existe el mayor ingreso per cápita en América Latina, 350.000 familias, casi la tercera

parte de la población total del país, habita en ranchos, tiene un ingreso familiar bajísimo y produce apenas lo necesario para una precaria subsistencia.

Tres puntos fundamentales resaltan de los textos citados: la importancia histórica del problema agrario venezolano, la desigualdad de la riqueza que determina el contraste de minorías enriquecidas frente a grandes masas pauperizadas en el campo, y la conciencia que de ese problema acusan quienes detentan el poder político. A tal punto es esto último cierto que, luego de tan dramática presentación del problema, el Señor Betancourt anunció que, en los cuatro años siguientes, se invertirían 2.500 millones de bolívares para lo que el llamó “operación rescate del campesinado”, la cual permitiría

transformar definitivamente la hoy agraria faz de nuestro medio rural en un espectáculo al par promisor y conmovedor de un pueblo campesino alegre porque crea riqueza y porque se ha incorporado al disfrute de todo cuanto tiene de ventajoso la moderna sociedad.

Han transcurrido ya siete años después de aquel diagnóstico y de esta promesa ¿Qué ha pasado durante ese lapso? ¿Se ha incorporado el campesino venezolano a todo lo que tiene de ventajoso la moderna sociedad? ¿Tenemos, gracias a aquella Ley, y a los señores encargados de ejecutarla, un pueblo campesino alegre porque crea riqueza? ¿Están asentadas aquellas 350.000 familias? ¿Se invirtieron los 2.500 millones de bolívares para el rescate del campesino?

Veamos qué dicen los propios actores de aquella memorable escena del Campo de Carabobo. Cuando el señor Betancourt deja la Presidencia de Venezuela, habían sido asentadas —según datos de su propio

Gobierno<sup>2</sup>— 57.093 familias, lo cual da un promedio de 11.400 familias por año. Como quiera que el crecimiento de la población es aproximadamente 4% anual y debemos asignar entre 30% y 35% de este incremento al sector rural, nos hallamos con que, a razón de cuatro personas por familia, cada año se incorporarían al campo unas 24.000 familias. Si sólo la mitad de ellas pudieran ser, en promedio anual, objeto de reforma agraria, debemos concluir que el señor Betancourt y sus asociados en el Gobierno comenzaron con 350.000 familias bajo el límite de subsistencia y terminaron dejando en el mismo estado a más de 400.000 familias. Por su parte, el socialcristianismo, una vez fuera del poder manifestó en el Congreso —con muy buen conocimiento de causa— que la reforma agraria había sido un fracaso. Y el gobierno del doctor Leoni, en aceptación de este hecho, designó una comisión —integrada por la alta burguesía agraria— para analizar las razones del estancamiento y sugerir medidas para impulsar la reforma. De este modo, en el Campo de Carabobo, donde los libertadores aseguraron con su propia sangre la emancipación de un pueblo, el señor Betancourt y su comitiva protagonizaron el fraude de la Reforma Agraria y una traición a las masas campesinas.

Esta traición y aquel fraude no se cometen por primera vez en la historia de Venezuela. Muy al contrario, el problema de la tierra es una de las claves de los más grandes conflictos sociales de nuestra historia: Colonia, Independencia, Guerra Federal, Caudillismo, Dictadura y crisis actual constituyen etapas y sucesos en cuyo fondo hallamos, a poco de hurgar en ellos, el anhelo aún insatisfecho de las masas campesinas de poseer la tierra que trabajan para otros. Betancourt no estaba inventando un fraude ni su caso era el primero, en Venezuela, de un mandatario que habiendo hecho demagogia con la tierra terminaba adoptando el lenguaje agrario de las clases dominantes. Lo original de Betancourt fue el escenario, mas no la traición, cuyo histórico es necesario que sigamos

a fin de comprender por qué el problema de la tierra es el primero, por qué un gobierno reformista tímido y mediatizado por intereses poderosos de dentro y de fuera no puede realizar el “rescate del campesinado” y cuáles son las relaciones de la cuestión agraria con la violencia actual en Venezuela.

### **La violencia original del latifundio**

A pesar de la voluminosa legislación de Indias y de la preocupación formal que sus disposiciones agrarias denotan en favor del mantenimiento y respeto a la propiedad comunal indígena, lo cierto es que la concentración de las mejores tierras en pocas manos se debe más a la usurpación y ocupación de tierras comunales y “realengas” que a las “mercedes” concedidas por el poder real y que, estas “mercedes” o “donaciones” lo eran como compensación de un acto violento, el de conquistar la tierra y someter al indio mediante el uso de la fuerza. La ley viene después, como una cobertura formal e ineficaz.

La realidad social —dice Federico Brito Figueroa— se impuso sobre el espíritu de la legislación de Indias, especialmente en las provincias venezolanas; el 20 de noviembre de 1578 la Corona ordena que las *tierras baldías que se posean sin justo y verdaderos títulos* debían restituirse al patrimonio de las ciudades, pero la intensidad del problema y los intereses económicos en juego obligan al Estado metropolitano a rectificar y a recurrir al expediente de las *composiciones* como vía para legalizar la ocupación fraudulenta... la prioridad agraria individual se incrementó a expensas de las tierras baldías y de las comunidades indígenas, mediante la ocupación y despojo<sup>3</sup>.

Todas las reclamaciones son inútiles y los alegatos de los indios despojados se enredan en trámites interminables que duran muchas veces un siglo y que siempre concluyen en contra suya. De este modo, y como aconteció en las otras regiones de la América hispana, los conquistadores y sus descendientes se constituyen en grandes propietarios que, a lo largo de los siglos XVII y XVIII, van a consolidar su poder económico sobre el oligopolio de la tierra. Una clase de grandes señores de la tierra impone su voluntad y explota a su antojo a una vasta masa de desposeídos integrada por indios, mestizos y negros esclavos: las plantaciones coloniales de cacao, tabaco, caña de azúcar, algodón y más adelante café, componen el cuadro productivo de una explotación extensiva de la tierra e intensiva del hombre. El proceso es demasiado conocido y en nuestro país contamos ya con estudios generales que nos evitan entrar en detalles y episodios de aquella historia de despojo y de servidumbre. Ya no hay lugar para la contienda idealista entre leyendas negras y doradas: objetivamente, un imperio conquistó a un continente e impuso sobre él las formas de explotación vigentes para la época. Sobre el sistema primitivo de la economía se yuxtapuso el sistema feudal de los conquistadores y sobre los escombros de la sociedad indígena, enredándose y mezclándose con ella, se fue organizando una sociedad con dos clases antagónicas, la una formada por los usurpadores de la tierra, la otra formada por los excluidos de la tierra: la una explotadora, la otra servil. El período colonial, de aparente paz franciscana, es el tiempo necesario para que la clase dominante fortalezca y consolide su poder económico y para que las masas desposeídas y explotadas vayan incubando su necesidad y su capacidad de subversión. El poder lejano de la metrópoli va a intervenir y a subsistir hasta el momento en que aquellas fuerzas contrapuestas estén maduras para protagonizar una historia cuya dialéctica les pertenece.

Hasta tanto llegue ese momento, que será el de la emancipación, el conflicto de la tierra engendrado en la sociedad colonial se va a expresar

en explosiones cuya importancia, motivación aparente y violencia, varían desde simples episodios locales que el historiador suele dejar de lado, hasta acontecimientos de estirpe continental como fue la rebelión de los comuneros.

Tales insurrecciones periódicas —dice el ensayista colombiano Indalecio Liévano Aguirre— se develaban con la brutalidad característica de los tiempos y so pretexto de “pacificar la tierra” se multiplicaban los malos tratamientos a los indios y su implacable explotación. Contra todas las leyes se les condenaba a trabajar en las minas, se les conducía a climas intolerables para sus organismos y eran obligados a formar parte de las caravanas de cargueros que transitaban por los senderos de nuestras cordilleras. Una minoría de privilegios de la tierra, titulares de las Encomiendas... vivían como señores feudales, mientras en el subfondo de la sociedad millares de aborígenes rumiaban en silencio su terrible tragedia y muchos soldados de las huestes conquistadoras, que no habían sido favorecidos por el reparto del botín, engrosaban las filas de la gleba irredenta y en bandas de salteadores y bandoleros asolaban la tierra<sup>4</sup>.

En Venezuela, las rebeliones del Negro Miguel, la de los negros de Coro capitaneada por José Leonardo Chirinos, con consignas semejantes a las de los comuneros (“abajo los impuestos y muera el mal gobierno”); y la conspiración de Gual y España, con su inquietante canción “Viva nuestro pueblo, viva la igualdad...” constituyeron episodios de aquel conflicto engendrado por la concentración de la riqueza y profundizado por los antagonismos clasistas y raciales.

## Una revolución frustrada

Si pasamos revista a los apellidos de quienes monopolizaron la tierra en el siglo XVI y seleccionamos los más importantes nos encontramos con nombres tales como Fernández de León, Diego de Losada, Lope de Mendoza, Simón de Bolívar, Luis de Ceballos, Andrés Machado, Sancho y Lorenzo de Mendoza, Francisco de Toro, Martín de Tovar, Ignacio Landaeta, Francisco Mier y Terán, Manuel Blanco Villegas, Pedro de Ponte, entre otros más<sup>5</sup>. Si hacemos igual revisión para el siglo XVII, ya la lista nos resulta familiar: Pablo León, Bolívar Villegas, Pedro Ponte, Isabel Freites, Blanco Villegas Ibarra, etc.; y cuando lo repetimos para el siglo XVIII, los apellidos Ponte, Tovar, Blanco, Toro, Herrera, Landaeta, Sojo, Bolívar, Mendoza, León, Rivas, Ceballos, La Madriz y Arcaya figuran entre los más ricos herederos de una tierra con tres siglos de usurpación y explotación esclavista y servil. Estos mismos apellidos son los que se rebelan contra la autoridad de España en nombre de sus intereses económicos: demandan la libertad de comerciar con otros países distintos de España, quieren liberarse de un tutelaje que ya no necesitan y que, por el contrario, está frenando la expansión de las fuerzas productivas de este lado del Atlántico y disminuyendo el ingreso anual con cargas impositivas que ya resultan intolerables.

Por su parte, las masas rurales paupérrimas y los desheredados que medran contemplando desde lejos la abundancia de los poderosos han dado ya pruebas de su combatividad, de su situación explosiva, de su oscura e imprecisa búsqueda de un cambio.

La independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las ideas de los filósofos prerrevolucionarios<sup>6</sup> suministran a la élite política e intelectual de los criollos el combustible ideológico para dar a su lucha un sentido trascendental; la invasión napoleónica de España ofrece la ocasión propicia mientras que, subyacente en el fondo de la proclamas



y alimentando el heroísmo imprescindible al gesto épico, está la necesidad económica creando los estímulos permanentes de una guerra larga, la guerra de emancipación de unas colonias ya maduras para hacer su propia historia.

¿Y quiénes son los hombres que van a dirigir el movimiento emancipador? En la lista de los insurgentes descuellan los mismos apellidos que hemos venido siguiendo durante trescientos años y que constituyen la clase de los dueños de la tierra; son los Toro, los Tovar, los Mendoza, los Ribas, los Bolívar. Ante los ojos de los sin tierra, estos son los señores, los amos, los explotadores; sienten que la guerra que estos señores puedan hacer no es ni puede ser la guerra de los esclavos y de los siervos. Por ello, el movimiento emancipador comienza siendo un movimiento sin base ni apoyo popular. Nuestro propósito no es detenernos a analizar y escudriñar lo que ya está escudriñado y analizado por investigadores que gozan de merecida autoridad y que, en el caso venezolano, forman hoy la vanguardia de una crítica dedicada a la espinosa tarea de barrer fetiches de una historia escrita por idólatras. Nos interesa sí destacar que el problema de la tierra constituyó el barómetro de la participación del pueblo en aquella lucha, así como el factor determinante de la localización de su trinchera entre los terratenientes en armas y el poder colonial.

No creemos en esa imagen de Boves como reformador agrario que cierto afán “modernista” trata de ofrecernos, pero es, sin duda minar el país<sup>7</sup>. Páez intuye, como buen caudillo, cuál es el señuelo de su preocupación y en cierto modo su sistema de compensación a base de “ganado” (la posesión del ganado supone la de la tierra) lo que le permite reunir el poderoso ejército con que llega a dominar al país. Páez intuye, como buen caudillo, cuál es el señuelo tras el que sus hombres lo seguirán hasta la muerte: ese señuelo es la tierra y los bienes materiales que su posesión significa. Un pueblo desposeído de bienes materiales está dispuesto a lanzarse a la más desigual de las luchas para obtenerlos.

Quien no es propietario quiere serlo, quien carece de tierra quiere poseerla, arrebatándosela a quienes la han disfrutado para sustituirlos en ese disfrute. La violencia de los desposeídos y explotados tiene un fin concreto: liberarse de su condición de explotados y desposeídos y asegurar con su violencia el derecho a vivir mejor.

Así lo entiende José Antonio Páez, quien viene de los de abajo y los acaudilla. Así lo entiende Simón Bolívar, un miembro de la clase explotadora y un heredero de las antiguas usurpaciones, que ha renunciado a sus intereses de clase para entregarse con toda autenticidad a la revolución. De esta conciencia acerca del problema de la riqueza social como factor determinante de la adhesión de las masas surge el compromiso y la promesa de distribuir entre los soldados libertadores los bienes materiales confiscados a los enemigos y a sus colaboradores.

Cuando el 24 de junio de 1821 el ejército español y el venezolano se enfrentan en la llanura de Carabobo para decidir en una sola acción la suerte definitiva de la contienda, los soldados patriotas estaban vislumbrando, a distancia de una victoria más, el cambio definitivo de sus vidas. Si triunfaban, su libertad tendría la dimensión concreta de la riqueza social distribuida entre quienes la habían creado sin haberla poseído. Había que triunfar a toda costa y fue lo que se hizo. Pero la tierra no se distribuyó, la riqueza siguió en manos de quienes tradicionalmente la venían concentrando y los desposeídos fueron constreñidos a volver a su servidumbre.

Los hombres que hicieron la Constitución de 1830 eran los mismos dueños de la tierra que habían convocado al pueblo para la conquista del poder político, eran los descendientes directos o indirectos de aquellos conquistadores y colonos que desde el siglo XVI venían pasándose la tierra de siglo en siglo cada vez con mayor número de fanegadas y menor número de dueños. En vano Bolívar mantiene fidelidad a la promesa hecha al ejército patriota y se esfuerza en conservar el

espíritu del Decreto de Confiscaciones emitido en Guayana La Vieja en 1817. En vano ratifica su sentido para animar a los héroes anónimos de Carabobo: los señores Mijares, Machado, de la Madriz, Ibarra y demás representantes de la oligarquía terrateniente van a hacer las leyes de la nueva república y las van hacer, como es lógico, para el mejor servicio de sus intereses económicos. Circunstancias muy conocidas favorecen generosamente el predominio de esa oligarquía: Bolívar muere eliminándoles así un obstáculo y Páez, el gran caudillo de los desposeídos a cuyas lanzas él debe su grandeza, y Venezuela su emancipación, el indomable Páez, *se hace propietario* y su sable vencedor en cien batallas impondrá ahora la paz productiva de los terratenientes. Bajo su protección, la Constitución de 1830 concede el derecho de propiedad y concede el ejercicio de los derechos políticos conquistados sólo al círculo de quienes posean la tierra o perciban una renta. El derecho de propiedad es incompatible con las confiscaciones, y por ello se derogan las disposiciones del Derecho de Bolívar en 1817 y se dejan sin efecto las medidas posteriores de 1821 y 1824. “Los señores del año 30 —dice Luis Troconis Guerrero— vincularon la República a sus patrimonios. Esta fue su victoria sobre los ideales del Libertador”<sup>8</sup>.

De este modo la clase dominante en la Venezuela emancipada, que era la misma de la Venezuela colonial pero liberada del monopolio comercial y de las cargas fiscales del imperio, ha sacado el máximo provecho del sacrificio popular que culmina en Carabobo. En adelante se dedicará al aumento de la productividad, a la formulación de leyes que estabilicen su dominio y a la deificación romántica de la historia. Cuando Carujo, encabezando una reacción militarista frente al poder aparentemente civil de aquella oligarquía, dice al doctor Vargas que “el mundo es el de los valientes”, se equivoca. Pero, a su vez, también se equivoca el doctor Vargas cuando responde que “el mundo es del

hombre justo”. Para la Venezuela de entonces, el mundo no era del valiente ni del justo, era simplemente de los terratenientes y de los comerciantes unidos en una simbiosis de feudalismo y burguesía comercial cuya dominación económica y política durante todo el siglo XIX constituye la mejor prueba de que la violencia de los desposeídos y explotados no había alcanzado su objetivo esencial y de que una revolución se había frustrado.

### **Entre la esclavitud y la servidumbre**

Los señores de la tierra y del comercio reciben un país en estado de prostración económica. Cualquier manual de historia de Venezuela trae el recuento de una población diezmada por la guerra, una ganadería en ruinas, una agricultura abandonada. Estimulados por la libertad de comercio y favorecidos por los precios del mercado internacional, los gobernantes de la República Conservadora van a aplicar sus innegables dotes de organización, austeridad y espíritu de trabajo y van a lograr, en quince años, elevar los indicadores de aquella economía agrícola y comercialista. Pero esos indicadores favorecían a una sola clase, la clase dominante:

Sus modos de enriquecimiento eran otros (distintos de los del peculado) concebidos dentro de los cánones de la moral absolutamente burguesa. Ellos no se apropiaban de los caudales del Estado, pero consideraban natural y, por consiguiente, necesario, que el Estado se mantuviese al margen de la actividad económica privada<sup>9</sup>.

La ley es el gran instrumento: leyes draconianas para asegurar al comerciante y al usurero, que generalmente era una misma persona, el

pago de créditos, hipotecas e intereses; leyes para restablecer a los antiguos partidarios del rey en el goce de sus propiedades confiscadas; leyes en fin, para asegurar una mayor concentración de la tierra y para conservar el sistema esclavista: “...el régimen de la República en esos años fue —dice Carlos Irazábal— no una democracia, sino una aristocracia esclavista al estilo de las de la antigüedad. Y ese régimen, naturalmente, era la expresión política de concretas relaciones de producción”<sup>10</sup>.

El decreto de la libertad para los esclavos, bajo el tiempo de los Monagas, es aparentemente un cambio en las relaciones de producción, pero es provecho de los dueños de la tierra para quienes resulta más ventajoso desprenderse de la familia esclava y utilizar sólo los servicios de la mano de obra activa sujetándola a las relaciones típicas de la servidumbre feudal.

La letra del decreto hace libres a los esclavos, pero la realidad social los hace siervos. Los señores reciben del Estado una compensación en metálico en proporción al número de esclavos que tengan, aptos o no para el trabajo; y como los nuevos “hombres libres” carecen de tierra, los mismos hacendados los van a emplear, previa selección y de acuerdo a las necesidades de producción, como medianeros, aparceros, peones de ocasión a quienes se les fija sin regateos ni garantías una salario mísero o se les suministra un pedazo de improductiva tierra y se les cobra en trabajo o en especie el derecho a subsistir.

Las masas rurales paupérrimas, defraudadas por la revolución de Independencia, vegetan ahora entre la esclavitud y la servidumbre.

Sobre ellas remacha su dominación el oligopolio de la tierra, que se hace cada día más poderoso, más concentrado, más explotador.

A los nombres de los antiguos latifundistas se van sumando los de los militares y políticos afortunados. A los Mendoza, a los Mijares, a los Freites, a los Tovar, ahora los Monagas, los Oriach, los Isava, etc. Todos estos hombres comen tierra y hacen del siglo XIX venezolano un siglo terrófono.

El bandolerismo que recorre los caminos del llano, del oriente y del

centro es la expresión de un pueblo hambriento y despojado, sin guía, sin organización, sin esperanza. El robo de los ganados y el asalto en despoblado son formas ciegas de una violencia popular en busca de cauce. Ese cauce sería la Guerra Federal.

### **Otra revolución frustrada**

No existe en el ideario del “liberalismo” venezolano surgido en 1840, ni en las proclamas de los caudillos de la Guerra Federal una conciencia lúcida acerca del problema de la tierra, ni menos el propósito políticamente expresado de realizar una reforma agraria. En este sentido, ni la Guerra de Independencia ni la Guerra Federal se hacen repartir la tierra y, sin embargo, se frustran como revoluciones fundamentalmente por el hecho de que no traen consigo cambios revolucionarios en relación con la tierra. La Guerra de Independencia no trajo consigo la formación de una burguesía industrial (ni siquiera se impuso el capitalismo como sistema fundamental), sino que trasladó a la vida republicana el feudalismo colonial como sistema básico generador de bienes físicos, con sus adherencias comerciales y financieras. Por su parte la Guerra Federal no varió este esquema porque si bien es cierto que permitió e impulsó el ascenso de la burguesía comercial, el sistema principal va a continuar siendo el determinado por las relaciones de producción feudales y semi-feudales en un medio rural que todavía al finalizar el siglo, contenía las dos terceras partes de la población económicamente activa.

Es cierto que no podemos medir un hecho histórico con la vara de nuestros deseos y tiene razón Germán Carrera Damas cuando señala como un lugar común que se presta a equívocos y ambigüedades eso de la “frustración” de la Guerra Federal: bien claro demuestra este autor que la tesis de la *frustración* sirve a las “derechas” como argumento acerca de la

inutilidad de la violación y sirve a las “izquierdas” como argumento acerca de la necesidad de completar la obra dejada trunca por aquel sacrificio<sup>11</sup>.

Nosotros consideramos históricamente válida la idea de una *frustración* porque, en rigor, hubo frustración de las más caras aspiraciones del pueblo que hizo la guerra: los jefes militares, la burguesía comercial, los agricultores medios que lucharon al lado de la causa federal no vieron frustradas sus esperanzas de cambiar un orden negativo y cerrado por uno abierto y positivo para ellos. Pero el campesinado que lanzó los más fuertes contingentes a esa guerra y que va a continuar, después de la victoria, en iguales o peores condiciones de servidumbre que antes, ese sí sufrió una segunda frustración histórica.

No existía un programa que expresara una política agraria campesina tal como la concebimos hoy, pero existía la miseria, el hambre y la concentración de la tierra en manos de unos cuantos privilegiados. Contra esto peleaba el pueblo. No se decía en las proclamas, pero Ezequiel Zamora en Venezuela, como más tarde Zapata en México, surgía de aquel fondo de miseria y frustraciones impulsado por una fuerza telúrica poderosa: la fuerza de los desposeídos y humillados que se habían decidido a humillar y a poseer.

En aquella paz de disfrute económico turbada solamente por la pugna de grupos por el poder político, irrumpió la Guerra Federal, que fue, sobre todo, una lucha por la liberación de las fuerzas del trabajo en el campo y por la conquista de la tierra por los campesinos. La Guerra Federal es sin duda el fenómeno histórico más importante, después de la Guerra de Independencia. Sin embargo, ese acontecimiento que costó tanta sangre, tantas víctimas, tantos sacrificios, tampoco trajo consigo la ansiada Reforma Agraria a que aspiraban los hombres del campo. Muerto el general Ezequiel

Zamora, los principales jefes liberales hicieron causa común con el enemigo, y en un acuerdo de conciliación capitularon ante los hombres del bando contrario, sacrificando una vez más, los anhelos de los campesinos. Llegados al gobierno, los liberales sustituyeron la oligarquía conservadora por la suya propia. Muy afrancesada, muy modesta para la época, y en ciertos aspectos progresista, la oligarquía liberal dejó intacto el latifundio y los campesinos regresaron decepcionados a sus míseros conucos, a continuar su misma vida de opresión y atraso. Las luchas de “caciques” se sucedieron durante toda la segunda mitad del siglo XIX, y los campesinos siguieron aportando su generosa corriente de sangre, pero a la hora de los arreglos entre los contendientes, era el campesino el único perdedor, pues éste nada recibía como retribución de sus sacrificios.

El carácter agrario de la Guerra Federal, presente más en la marcha misma de la guerra en los principios liberales que enarbola a guisa de bandera, quedó relegado a los deseos de los caudillos de esta guerra. La guerra arrojó el saldo que de ella esperaba la clase dominante. El poder estatal fue empleado para crear determinadas condiciones básicas para su desarrollo, condensado en la llamada obra civilizadora del guzmanato. Pero su alianza con los latifundistas marcaba necesariamente un límite a esa acción renovadora, y abrió nuevamente el cauce a la reacción latifundista que perdurará en el país hasta que la aparición de nuevos factores económicos, representados por la explotación imperialista del petróleo y la consiguiente formación de una clase obrera nacida bajo el signo de la combatividad organizada, significara el cambio de la transformación del esquema político tradicional”<sup>12</sup>.



Es posible que en un medio donde la mojigatería y la caza de brujas constituyen las modalidades oficiales de la cultura y donde muy circunspectos académicos suelen denominar “científico” sólo al criterio incontaminado de cierto género de eunucos intelectuales, se vea en la interpretación citada una opinión simplemente dictada por el interés público. Veamos, entonces, cómo interpreta aquel fenómeno un autor insospechable de “extremismo”, un técnico mexicano más partidario de reformas agrícolas que de reformas agrarias, con lo cual dejamos bien afirmada su posición ideológica y su moderación reformadora:

Como consecuencia de las guerras de independencia —dice este autor—, y posteriormente en el curso de las guerras civiles, la propiedad de la tierra cambió de manos con frecuencia, pero sin que se modificara la estructura social fundamental. En todos los casos, lo que ocurrió fue una modificación interior en la composición de la clase propietaria, dentro de un sistema que no sufrió cambio alguno. No se debió ello a la ausencia de aspiraciones populares. En las guerras de independencia, y más durante la Guerra Federal, la aspiración a la distribución de las tierras entre los campesinos fue consciente en mayor o menor grado... Pero en todos los casos los caudillos en el poder se constituyeron en forma rápida en propietarios y en sostenedores del régimen social anterior, aunque la bandera política tuviera nombre y color distintos<sup>13</sup>.

Así concluyen cien años de vida republicana: de vida “independiente” dicen los manuales al uso y los historiadores de la oligarquía, cien años de explotación y de servidumbre dice la realidad social de las masas campesinas; dos veces conducidas al matadero en provecho de las clases dominantes.

A los cien años de la Declaración de Independencia asumía el poder político del país, mediante una maniobra palaciega, un oscuro hacendado de Los Andes quien llegaría a ser, en 27 años de dictadura, y precisamente a los cien años de haber triunfado militarmente aquella guerra, uno de los más grandes e insaciables latifundistas de Venezuela<sup>14</sup>. Bolívar tenía razón: Había arado en el mar.

### **Del suelo al subsuelo**

Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, el carácter extensivo de la agricultura latifundista, el absentismo y la técnica atrasada con que se explotaba la tierra se mostraban insuficientes para atender las necesidades de una población cuyo estancamiento era ya un signo crítico y se mostraba también inadecuado para suministrar los recursos necesarios al desarrollo económico. A raíz de la Guerra Federal y concretamente en la época de Guzmán Blanco se desarrolla en el país un proceso urbano caracterizado por el fortalecimiento de una burguesía comercial que prosperaba a expensas de una agricultura cuyos excedentes absorbía. Capitales ingleses y alemanes establecen casas de importación que monopolizan el financiamiento y la compra de productos agrícolas de exportación y traen, completando el ciclo intermediario, los artículos manufacturados de Europa. Toda la literatura venezolana del “modernismo” refleja el conflicto entre burguesía y feudalismo o entre *civilización y barbarie* como suelen decir los textos literarios. No se manifiesta como un conflicto explosivo sino como un forcejeo de dos sistemas que han venido conviviendo dentro de una situación en la cual uno de ellos se va fortaleciendo a expensas del otro hasta la supremacía. Los señores de la tierra se van haciendo comerciantes, se asocian con el capital foráneo o simplemente se van a Europa a disfrutar de una renta decreciente.

El sistema fundamental de la economía venezolana que sobrevivió a las guerras de Emancipación y Federal ha entrado en una crisis cuyos síntomas se van acentuando en los primeros años de la nueva centuria. Esa crisis tiene una expresión institucional en la desorganización política y en el caos que caracteriza a esa época. Cipriano Castro es el símbolo: al frente de sus hordas andinas, Castro es el último de los caudillos típicos del feudalismo venezolano. Castro no representa a ninguna burguesía, sus hombres son campesinos y siempre el hombre del campo va a enrolarse en la aventura caudillista.

En él se resumen los vicios y virtudes de un tipo humano cuyo último representante es él.

Juan Vicente Gómez, su lugarteniente, va a subir y a dominar no por lo que tiene de caudillo feudal sino, precisamente, por lo que no tiene, por lo que lo diferencia de aquel tipo. Gómez, que era agricultor y comerciante antes de ser soldado, es el gran intuitivo de aquella transición planteada entre latifundismo y burguesía. Va a administrar la cosa pública con mentalidad de contador y si durante su período concluye el caudillismo no es, como suele aseverarlo un organicismo ingenuo, porque la nación estuviera cansada y deseara la paz, sino porque dentro de la estructura económica del país un sistema ya en crisis forzaba soluciones diferentes. Para las clases dominantes esas soluciones no eran otras que las del desarrollo capitalista, puesto que para ellas se trataba de aumentar la producción sin violar sus posiciones de clase. El latifundio tendría que evolucionar hacia la explotación agrícola capitalista y la artesanía tendría que avanzar hacia una dimensión manufacturera. El progresismo consistía en el predicamento de la educación técnica, el uso de maquinaria, la modernización de la agricultura. Para ello se requería estabilidad social y política que garantizara, con la misma férula, tanto la paz de los caudillos como el sometimiento de las masas que ya arrastraban cien años de búsqueda infructuosa.

Ese gobierno era el de Gómez, cuya concepción del Estado policial se expresaba en el lema *orden, paz y trabajo*, condiciones ideales para la prosperidad de quienes monopolizaron las riquezas.

¿Por qué, sin embargo, no se realizó aquel progresismo de las élites económicas que con tanta euforia apoyaron el golpe de Gómez contra Castro? ¿Por qué a los veinte años de haber asumido Gómez el poder constituye en Venezuela una audacia hablar del ferrocarril de los llanos y de la necesidad de cercar al llano y modernizar la explotación agrícola? ¿Por qué estos aspectos que corresponden a las fases más moderadas del capitalismo y que, en rigor, se ofrecían como una alternativa evolucionista para resolver la crisis de productividad del sistema, eran considerados como revolucionarios y tan peligrosos que hicieron de *Doña Bárbara*, en 1929, una novela heroica? Y finalmente ¿Por qué si el gobierno de Gómez tenía forzosamente que confrontar la crisis de un sistema caduco, pudo evadir esa confrontación y, sin embargo, conservar el poder político?

La respuesta a estas preguntas nos la da el acontecimiento clave del siglo XX venezolano: la agricultura que constituía la base material del sistema en crisis pasó a un lugar secundario en la escala de la riqueza social entre el descubrimiento y la explotación comercial del petróleo. La tierra seguía siendo lo primero, sólo que el valor económico se había deslizado, así de pronto, sorpresivamente, del suelo al subsuelo. Nadie, ni Gómez, contaba con el petróleo el cual vino, como los guisantes mágicos del cuento, a resolver de la noche a la mañana los problemas de productividad y de ingreso que en términos críticos había planteado una agricultura precapitalista.

La clave para comprender el proceso económico posterior así como sus complejidades sociales y políticas está en ver con claridad y no olvidar que aquellos problemas no se resolvieron mediante la sustitución de una estructura económica atrasada por otra avanzada, es decir que el modo de pro-

ducción latifundista (entiéndase feudal) no fue sustituido por el capitalista, que le seguía en el orden histórico de la evolución social. No hubo, pues, un cambio de la estructura sino una adherencia capitalista que se superponía sobre las aristas de una economía latifundista, artesanal, y pequeño-mercantil, y convivía con ella. Esa adherencia venía de afuera, procedía de un mundo más avanzado y poderoso, los ingenieros petroleros traían consigo la fascinación de los buscadores de oro y muy pronto darían al país una fisonomía y hasta una psicología de campamento minero.

Para Gómez, el petróleo era un fruto de la tierra y su mentalidad de hacendado lo llevó a concebir la administración de esta riqueza con un criterio latifundista: otorgaba a sus amigos, familiares y partidarios, vastísimas concesiones de tierras y éstos las traspasaban luego a las compañías extranjeras que explotaban las zonas petroleras. Véase este proceso durante la década 1910-1920<sup>15</sup>:

1909: El gobierno celebra un contrato para exploración y explotación en 12 Estados y en el Delta, con *The Venezuelan Development Company Limited*, representada por John Allen Treguelles. Se hizo reserva de algunos territorios.

1910: Contrato con el Dr. Rafael Max Valladares —gestor de *The Bermúdez Company*— para exploración y explotación de las zonas reservadas dentro del contrato con Treguelles.

1912: Segundo contrato con Max Valladares— en representación— de *The Caribbean Petroleum Company* (filial del grupo *Schell*) por derecho exclusivo sobre 27 millones de hectáreas. La *British Controlled Co.* (gobierno inglés) obtiene 3.000 millas cuadradas en Falcón y Delta del Orinoco.

1913: La *Colon Development Company* (grupo *Shell*) adquiere la concesión Vigas en el Distrito Colón (2.100.000 acres). La *Venezuelan Oil Concessions* (grupo *Shell*) obtiene 3.000 millas cuadradas.

1915: Rafael Rincones, representante por Venezuela ante el Primer Congreso Financiero Panamericano en Washington, dice allí: “Este es el tiempo en que el capital americano debe aprovechar la gratitud que se le presentará para el desarrollo industrial de los países latinoamericanos”.

1916: Primera Conferencia de la Alta Interamericana en Buenos Aires. Allí se expresa el sentido de la ofensiva yanqui: “Fomentar la explotación del petróleo y otros minerales combustibles en América”. Se fundamenta en la “diplomacia del dólar”. Los agentes del capital americano se vinculan con la oligarquía social y altos funcionarios públicos del país.

1919 (enero 2 a marzo 25): Se sacan a licitación 3.748.874 hectáreas en Zulia, Falcón, Trujillo y Mérida. Obtiene concesiones Eduardo Navarro, Rafael Antonio Font Carrera, Domingo Navarro, Manuel A. Álvarez, López Méndez y Adison Mac Kay. Traspasan sus contratos el 11 de noviembre a diversas compañías extranjeras.

Como se ve, el petróleo era no sólo un asunto de Estado sino una cuestión de amistad, de familia y de prebenda. Julio F. Méndez, López Rodríguez y Adolfo Bueno se cuentan entre aquellos favorecidos que reciben concesiones para que las traspasen y saquen buen partido de su gestión de intermediarios. Es una combinación latifundista y mercantil.

Los ingresos fiscales, a pesar de la baja carga impositiva con que se desenvuelve la explotación petrolera, van a permitir duplicar y triplicar en menos de diez años el presupuesto de gastos públicos. Estos, unidos a los sueldos y salarios y a otras inversiones internas de las compañías petroleras van originando e incrementando una demanda de bienes de consumo que el país artesanal y agrícola no está en condiciones de

producir: ha llegado la edad de oro de aquella burguesía comercial que, después de la Guerra Federal, viene tratando de imponerse sobre los demás sectores económicos y que ante la coyuntura de esta demanda adicional, se va a constituir en la gran compradora de todo género de bienes en el mercado internacional. De este modo, la incrustación del petróleo dentro del esquema de una economía atrasada provoca el surgimiento de nuevas relaciones económicas y altera el desenvolvimiento crítico de aquel atraso. Mas lo importante, y lo que necesitamos ver con claridad, es que no resuelve la crisis sino que la margina y la pospone. En efecto, si de algo nos sirve el brevísimo recuento histórico que hicimos es para tomar conciencia de que la economía agrícola tradicional (latifundismo, artesanía, pequeño comercio) había entrado en decadencia y resultaba inadecuada para atender a las necesidades del desarrollo económico y social del país. En el orden histórico de la sociedad se acentuaba el vacío de un proceso evolutivo o revolucionario que sustituyera las relaciones feudales por otras más avanzadas en el campo y que sustituyera el esquema de una economía pequeño-mercantil y artesanal por una economía de desarrollo manufacturero y de moderna organización comercial y financiera. Es precisamente cuando la necesidad del cambio se hace más notoria y en cierto modo va creando las condiciones para que ese cambio se realice teniendo como eje a la burguesía comercial, cuando el esquema se complica con el aterrizaje de un sector capitalista de alta productividad, que viene de afuera como proyección de economías extranjeras más avanzadas y el cual se posa, sin integrarse, sobre una estructura atrasada, precapitalista, cuyas relaciones no desaparecen ni son sustituidas, sino marginadas a una periferia desde la cual seguirán enviando al centro los frutos sociales y políticos de su estancamiento y regresión.

El petróleo inyecta un ingreso por doble vía: a través de impuestos y mediante inversiones directas. En el primer caso se originan gastos

públicos crecientes y en el segundo, sueldos y salarios para un determinado número de personas. Aumentan los servicios públicos y se va formando un núcleo obrero moderno. Los receptores de estos ingresos demandan mejores alimentos, mejores vestidos y artículos de lujo. La industria en estado artesanal no los provee. Un comercio de importación cada vez más fuerte va transfiriendo al exterior los excedentes del ingreso petrolero. La burguesía comercial prospera, alcanza la supremacía y se convierte, por ello mismo, en celosa guardiana de esta economía de campamento. Para el capital extranjero, esta situación de atraso regida por una dictadura resulta el clima ideal para la seguridad y la ausencia de controles de su explotación. Por ello pone en juego sus recursos económicos y políticos a fin de estabilizar el régimen de Gómez. Los terratenientes ausentistas gastan sus rentas en consumos de lujo, abrigan la secreta esperanza de que haya petróleo bajo su tierra, muchos de ellos transfieren sus rentas hacia el comercio importador y el gobierno les funda un banco, el Banco Agrícola y Pecuario, gracias al cual consiguen créditos que invierten en operaciones comerciales y obtienen hipotecas que superan el valor real de sus improductivas tierras.

Juan Vicente Gómez no siente presión ninguna por parte de estos sectores y se convierte en el gran policía, en el gran cuidador, en el tranquilo “guachimán” del orden petrolero.

Ahora es el subsuelo en centro material de la riqueza, que sigue concentrándose en pocas manos, mientras que sobre el suelo improductivo de un latifundismo que se conserva intacto, una vasta población rural (60%) permanece ajena al festín de la abundancia, y para demostrar que existe, envía contingentes de campesinos a los campos petroleros y a las ciudades centrales. Allí van formando un cerco de miseria donde aquella violencia dos veces frustrada acumula el combustible de nuevas erupciones, al tiempo que busca y exige organización y cauce.



## La colonización agrícola fracasa

A raíz de la muerte de Gómez y ante la presión confusa y precariamente organizada de la vanguardia política del frente estudiantil y obrero, el gobierno un tanto flexible de López Contreras, trató de capear una situación social difícil mediante el expediente de la colonización agrícola.

Las jornadas de 1936 amenazaron los fundamentos del orden garantizado por la dictadura, los campesinos sintieron nuevamente el llamado de su gran revancha histórica y la violencia popular abrió una vez más la posibilidad del cambio radical, pero una vez más el esfuerzo concluiría en reformismo y componenda: las organizaciones políticas y sindicales exigieron que se reintegraran a la nación los bienes del dictador fallecido y los acumulados por familiares y favoritos mediante el peculado. Pero las masas no fueron conducidas hasta la conquista del poder político: sus dirigentes más connotados en aquel momento —Jóvito Villalba y Rómulo Betancourt— negociaron la paz a un costo muy bajo para el gobierno (algunos cambios institucionales) y muy alto para el pueblo (la continuidad del poder político en manos de las clases dominantes. Su símbolo fue la conservación del Congreso de Gómez). La constitución de 1936, garantizando los privilegios tradicionales de la oligarquía terrateniente y de la burguesía comercial y remachando sobre el país el dominio capitalista extranjero, fue el fruto de una dirección débil y bisona cuya juventud es apenas una excusa para no calificarla de traidora.

Frente al problema del desempleo y el subempleo rurales, que se ponen de manifiesto apenas se concedan algunas libertades públicas, el gobierno de López Contreras acude a un plan de emergencia que engancha 40.000 trabajadores en un programa de obras públicas bastante improductivo. Con el objeto de reintegrar los campesinos al trabajo agrícola, se encomienda al Ministerio de Obras Públicas la fundación

de varias colonias agrícolas. Estas colonias pasarían después al Ministerio de Agricultura y Cría y darían lugar a un proceso de colonización a través de un organismo que comienza llamándose Instituto Técnico de Inmigración y Colonización, cuya función es fundar y organizar colonias y seleccionar una inmigración adecuada que venga a instruir con su ejemplo al agricultor venezolano. También las compañías petroleras prestarán su colaboración en estos proyectos y, como una fórmula para compensar el desempleo generado durante la Segunda Guerra Mundial, se fundan algunas “colonias petroleras”.

La experiencia “colonizadora” es una de las más negativas con que cuenta el tratamiento del problema agrario en el país. En primer lugar, cada colonia suponía una inversión cuantiosa en relación con el número de “colonos” que se asentarían; en segundo lugar suponía la movilización de esas familias hacia climas y ambientes diferentes lo cual llevaba a errores tan pintorescos y costosos como el del traslado de familias danesas a una colonia en Chirgua, para cuyo alojamiento hubo que expulsar varias familias campesinas venezolanas con el resultado de que, al año, el gobierno debió atender los gastos de regreso de los daneses a su país de origen, acumulándose dichos gastos a los ya considerables egresos de asentamiento y mantenimiento.

La colonización es la fórmula propiciada por los latifundistas para resolver el problema social en el campo porque esa fórmula no afecta al régimen de propiedad de la tierra, porque se realiza en tierras marginales a las cuales es necesario dotar de toda clase de servicios y, en fin, porque se trata de programas adelantados y controlados por gobiernos dentro de los cuales los intereses latifundistas tienen muy efectivos o influyentes defensores.

El surgimiento y organización de las fuerzas políticas de izquierda a partir de 1936 permite llevar hasta el centro de la atención pública el debate sobre el problema agrario y permite que, simultáneamente con la estructu-

ración de una primera tesis sobre la necesidad de distribuir la tierra entre quienes la trabajan, se ejerza presión sobre gobiernos que, a diferencia del de Gómez, requieren para su estabilidad una mayor sensibilidad social. Es así como durante el gobierno de Isaías Medina Angarita cobra cuerpo la idea de reforma agraria y el Poder Legislativo llega a sancionar una ley en tal sentido, ley que desapareció con la caída del régimen en 1945, y cuyo contenido, que era progresista en relación con la legislación tradicional, no constituía propiamente un instrumento adecuado para eliminar el latifundio y lograr el cambio en la estructura de la economía agrícola.

Igualmente los estatutos y medidas agrarias posteriores, hasta llegar a 1958, no entrañan ningún cambio del sistema latifundista, antes bien, al lado de generalizaciones sobre mejoramiento de los niveles de vida en el campo, se filtran disposiciones de neto corte colonizador y otras que se prestan a especulación de terrenos y a negocios ilícitos, elementos característicos de la cuestión agraria durante la década dictatorial de 1948 a 1958. La colonización, que arranca con las colonias “Mendoza”, “Güigüe”, “El Totumo”, “Chirgua” y otras del tiempo de López Contreras, sigue durante el gobierno de Medina Angarita (colonias petroleras<sup>16</sup> “Aparicio”, “Tocorón” y otras) y trata de alcanzar una fisonomía capitalista en las llamadas “comunidades agrarias” de Acción Democrática (1945-1948) cuyo modelo fue “El Cenizo”, reemplazado, durante Pérez Jiménez, por “Turén”, “Guárico” y otras. El denominador común de esta experiencia es el derroche de recursos, su ineffectividad para resolver el problema agrario y la demagogia con que se trata de ocultar su carácter de medida complaciente con la clase latifundista.

## A cien años de Ezequiel Zamora

El 10 de enero de 1960, se cumplieron cien años de la muerte de Ezequiel Zamora, caudillo de una guerra campesina cuya victoria no presenció y cuyo sentido de revolución agraria fue escamoteado por sus propios dirigentes al aceptar una negociación que dejaba sin modificar el sistema latifundista y pactaba, en provecho de las clases dominantes derrotadas por la violencia popular, el retorno de los campesinos a la servidumbre de la cual se habían querido liberar. Ezequiel Zamora es el símbolo de una liberación que espera su realización histórica. La invocación de su nombre no es un canto pasado sino la renovación de un compromiso presente. Conviene preguntarnos ¿Qué ha sucedido en esos cien años transcurridos después de su muerte? El ligero recorrido que hemos hecho en las páginas anteriores nos suministra ya una respuesta. No ha sido necesario inventar argumentos ni registrar fuentes escondidas para descubrir que en esos cien años, la población campesina (todavía sigue siendo más de la tercera parte de la población total) vive en condiciones miserables, por debajo del límite de subsistencia y víctima de las mismas relaciones de servidumbre que una vez la impulsaron a la violencia y las cuales siguen alimentando el fermento de una revolución hasta hoy frustrada.

¿Cuál es el cuadro de la economía agrícola al término de esos cien años? ¿Qué ha hecho el capitalismo para transformar las estructuras

feudales en el campo? ¿No existen, en 1960, empresas agrícolas de alta técnica, instituciones oficiales de créditos y de asistencia técnica dedicadas a lograr productividad y un mejor nivel de vida en el medio rural? ¿No existe, gracias al sistema capitalista extranjero incrustado en la vieja estructura, un ingreso mayor que, a través del gasto público, garantiza una evolución del viejo esquema agrario hacia un sistema moderno de explotación capitalista? Pidámosle al gobierno sus propios datos, tomemos las cifras de los últimos censos agropecuarios y situémonos entre el sector agrícola venezolano a los cien años del balazo que ultimó a Zamora.

Comencemos con un cuadro bastante sencillo y conocido entre los especialistas que manejan con frecuencia el tema<sup>17</sup>:

**DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS CULTIVABLES**  
(según propiedad y formas de tenencia)

Formas de tenencia	Censo 1950		Censo 1961	
	Und. Explot. %	Spf. Cult Has. %	Und. Explot. %	Spf. Cult Has. %
Propietarios	41,6	83,2	44,4	84,2
Arrendatarios	15,2	3,3	10,5	3,2
Aparceros	6,4	2,2	8,6	0,6
Ocupantes (y formas mixtas)	36,5	13,0	36,8	11,3

Fuente: *Censo Agropecuario de 1950 y de 1961.*

Dejemos al profesor universitario Celio S. Orta, un especialista autorizado en la materia, el comentario escueto y, sin embargo, revelador de este pequeño cuadro, acompañándolo con la ilustración de sus correspondientes cifras absolutas:

Los datos relativos al censo de 1950 indican que en ese año había en el país 97.598 unidades de explotación que disponían de 18,4 millones de hectáreas en forma de propiedad: dicho en términos relativos, 41,6% de los propietarios controlaban un 83,2% de la superficie total cultivable. El monopolio de la tierra queda demostrado cuando se distribuyen las unidades según su tamaño. En efecto, los datos del mismo censo indican que de los propietarios había un 97,1% con unidades menores de mil hectáreas, que disponían solamente de un 17,4% de superficie, en tanto que el resto, 2,9% de las unidades superiores a mil hectáreas, controlaban nada menos que el 82,6% de la hectáreas en propiedad privada. La situación del monopolio de la tierra muy pocos cambios experimentó en el transcurso del período 1950-1961. Las cifras del censo realizado en el último año revelan que los propietarios (unidades) se elevaron a 142.229 (incluían 15.894 unidades otorgadas a título provisorio), pero también la superficie en propiedad pasa de 18,4 millones en 1950 a 22,1 millones en 1961.

La superficie total del país es de poco más de 91 millones de hectáreas de las cuales son tierras agrícolas (incluyendo bosques y pastos naturales) sólo unos 30 millones de hectáreas. Una quinta parte de esta tierra agrícola es objeto de cultivo propiamente dicho, todo lo cual da una idea del margen de ociosidad absoluta propia del sistema latifundista. En los linderos de estas tierras habidas, como hemos visto, mediante

usurpación, hipotecas y peculados (es decir, mediante la violencia) una población campesina paupérrima sin vivienda, sin vestido y sin educación, se mantiene alejada de la circulación de bienes y servicios, presente sólo en la contabilidad electoral de los partidos social demócratas que han obtenido cuotas de poder político con sus votos sólo para servir desde allí los intereses de los terratenientes. La frase más altisonante y el calificativo más violento se justifican al descubrir tan cruda realidad. Pero en función de esa realidad nos limitamos a decir que adjetivos y frases no conmueven el escepticismo estoico sembrado por cuatrocientos años de servidumbre y ciento cincuenta de frustración republicana.

Consultemos la *Memoria del Banco Central* (informe económico) correspondiente a 1959: nos encontramos con un producto territorial bruto de 26.066 millones de bolívares dentro del cual el sector agrícola es apenas 6,4%, (Bs. 1.640 millones) sin embargo, con tan precaria relación, en este sector se acumula 38% de la población activa total<sup>19</sup>. Hay algo más: a esa población corresponderá solo 8,6% de la remuneración total del trabajo y ese 8,6% es sustancialmente formado por remuneración del trabajo en el sector agrícola capitalista que, como una segregación de la industria manufacturera, se ha venido formando en las zonas centrales.

Cuando el 23 de enero de 1958 cae, con sacrificio de vidas humildes, una dictadura militar, las viejas esperanzas se renuevan y como en los tiempos del catire Páez, y como en los tiempos del malogrado Zamora, y como en los tiempos de los líderes estudiantiles Villalba y Betancourt, las masas campesinas se movilizan y la violencia popular de nuevo asedia la paz de los oligarcas. Esas masas vuelven a confiar en sus conductores del año 36, refrenan la espontaneidad de sus ímpetus y aceptan el camino de las urnas electorales para conquistar pacíficamente su irrenunciable objetivo histórico. Rómulo Betancourt y Jóvito Villalba, representando una burguesía nacional de pronunciamientos

antioligárquicos, reciben una vez más la confianza de los campesinos. El poder político llega a sus manos, que ya no tiene la excusa de la inmadurez como en 1936, y ¿qué sucede? Ambos pactan con la democracia cristiana y entregan a un ministro de la clase terrateniente la dirección de la cuestión agraria.

Cuando Rómulo Betancourt, presidente electo de Venezuela, entra en el Campo de Carabobo el 5 de marzo de 1960, se han cumplido 130 años del entendimiento de Páez con los oligarcas a espaldas de los campesinos y se han cumplido 103 años de la componenda de Coche entre los jefes federales y la oligarquía latifundista también a espaldas de los campesinos. Betancourt y Villalba van por el centro de la avenida entre los bronce de los héroes, a su lado Rafael Caldera representante nato de la oligarquía y adalid del sagrado derecho de los propietarios terratenientes marcha también sonriendo. Hemos visto como Betancourt ofrece la independencia económica bajo el sol de Carabobo, Villalba invocará la figura del Negro Primero quien lo contempla con sorna desde su bronce oscuro, mientras Caldera y su Ministro se limitan a invocar las encíclicas papales sobre el respeto a la propiedad privada.

En esa Ley de Reforma Agraria que allí se firma y con la cual estos señores consideran saldada su cuenta con las masas campesinas, no se proscribe el latifundio y en su artículo 2º se “garantiza y regula el derecho de propiedad privada de la tierra, conforme al principio de la “función social” que la misma debe cumplir”. Y ¿Cuál es esta “función social”? Dejemos que responda el ministro socialcristiano que la impuso. Así dice la exposición de motivos:

Parte esta teoría de que todos los hombres tienen derecho a la propiedad de la tierra, pero que ese derecho genérico de todos a la propiedad de la misma, al hacerse efectivo por cada uno de los hombres que la trabajan, no es antinatural ni se contradice,



sino todo lo contrario, se afirma con evidencia plena. En consecuencia, puede y debe reconocerse el derecho de propiedad privada de la tierra por cuanto él no destruye el principio general de que la tierra es para todos los hombres.

En buen cristiano esto quiere decir que la gran propiedad puede y debe convivir con la pequeña propiedad con que se dote al campesino. En el caso venezolano, hemos visto cómo las mejores tierras tienen propietarios que las vienen concentrando en un círculo privilegiado desde el siglo XVI. La nueva Ley reconoce y defiende ese derecho (que viene de la violencia por usurpación, peculado y extorsión), pero como al mismo tiempo establece que quienes trabajen la tierra tienen derecho a ser propietarios, se vale de este recurso de la “función social” para engañar a los campesinos: se repartirán con título provisional, aquellas tierras que no cumplan con su “función social”. En primer lugar, las tierras que no sean de propiedad privada, es decir, las tierras del Estado<sup>20</sup>. Como las mejores tienen ya su dueño particular, se comprende que las tierras públicas, bien por su esterilidad, por su lejanía y ausencia de servicios o por su condición de tierras vírgenes, constituyen un recurso oneroso e incapaz de resolver el problema económico y social del campesinado.

En otras palabras, constituyen una salida por la tangente al sustituir la reforma agraria con la colonización cuya experiencia nefasta revisamos. En segundo lugar, pueden repartirse aquellas tierras de propiedad privada que no cumplan su función social, previa adquisición del o de los fundos de que se trate. Y aquí entra el capricho de quienes apliquen la Ley: una tierra cumple función social cuando en su explotación se combinen racionalmente los factores de producción. Esto señala, por exclusión y en primer término, a las tierras menos productivas e inaccesibles, a las cuales se daría prioridad para asentamientos campesinos. En decir, el Estado adquiere de los latifundistas las tierras que no les

producen rentas y las reparte entre los campesinos que deben trabajarlas y en ciertos casos pagar por ellas ¿Es ésta una reforma agraria para los campesinos o para los latifundistas?

A esta “reforma agraria” se le ha denominado “reforma agraria integral” porque, en el texto de la Ley, se establecen normas: asistencia técnica, créditos agrícolas, organización comercial (distribución, conservación, mercado, etc.) y otros servicios. Como quiera que la “función social” se refiere a la combinación óptima de los factores de producción y constituyen el eje de la Ley, es fácil comprender que los servicios enumerados complementan el sentido capitalista de la reforma. Y este es el aspecto renovador de la Ley: es una ley que sin afectar los intereses latifundistas propicia una evolución capitalista. La renta petrolera alcanza para pagar a buen precio tierras ociosas y para financiar la inversión capitalista en el campo. De esta manera, se tendría una solución tipo “junker”, que vendría a resolver aquel viejo problema planteado a fines del siglo XIX y comienzos del XX como objetivo de una burguesía comercial ambiciosa ante la crisis de productividad del sistema feudal agrario y el cual fue marginado gracias a la yuxtaposición de un sistema capitalista extranjero que hizo olvidarse del suelo por interés del subsuelo.

La Ley Agraria de 1960 es, en primer término, una ley para la burguesía agraria; en segundo término, una ley para revalorizar las tierras ociosas de propietarios absentistas y, en último término, una ley con algunas disposiciones reformistas en favor de los campesinos, disposiciones que no predominan sobre los otros dos aspectos y que no alcanzan a dar a dicha ley un carácter revolucionario.

A cien años de la Guerra Federal, el nombre de Ezequiel Zamora y la liberación de los campesinos fueron objeto de una burla rodeada de solemnidad con la cual se frustró, una vez más, el viejo anhelo de las masas campesinas de Venezuela. Allí, los representantes de una generación, dos dirigentes llevados al poder por esas masas —los señores

Betancourt y Villalba— refrendaron una nueva componenda con las clases dominantes. Demostraban, de paso, que al traicionar en 1960 no fueron tan inocentes de 1936 y que en el entreguismo de la madurez culmina la falsedad de la juventud. Las masas, por su parte, aprenderían una provechosa lección: que la democracia representativa en un país neocolonial es una farsa.

## **Conclusión**

No podemos hablar, en rigor, de reforma agraria en Venezuela, sino de pura y simple reforma agrícola, es decir, de un proceso cuya significación predominante no es la conversación de una vasta masa de campesinos desposeídos o en posesión de parcelas deficitarias, en propietarios organizados ya individualmente o bajo forma cooperativa que les permita lograr una explotación técnica y económicamente adecuada. La Ley, como hemos señalado y como se desprende del más sucinto análisis, no es una ley de reforma agraria sino una ley de reforma agrícola y de colonización que admite, marginalmente, ciertos aspectos de reforma agraria. Es, en esencia, una ley que paga a precio de oro la liquidación del latifundio en función, principalmente, de la burguesía agraria: de allí que, paradójicamente, latifundistas y terratenientes sean los más entusiasmados con ella<sup>21</sup>.

En América Latina ha causado sensación el caudal de fondos y la alta tasa de pagos en efectivo destinados a la compra de tierras ociosas de baja calidad y, en ocasiones, de título dudoso, que luego pasan a engrosar la reserva de tierras no repartidas del Instituto Agrario Nacional.

El resultado, al término del gobierno de Rómulo Betancourt, es el de que no varió, en esencia ni prácticamente en detalle, la concentración (oligopolio) de la propiedad agraria. Los índices de producción agrícola

aumentaron, pero no como efecto de la reforma agraria sino como una reacción de la agricultura capitalista ante la demanda del sector manufacturero y ello, sin embargo, en forma por demás moderada, pues aún se importa del exterior un alto porcentaje de las materias primas que requiere la industria interna. A tales incrementos es a lo que se refieren los discursos y memorias oficiales que confunden el fruto forzado del crédito empresarial con una reforma que no está ni siquiera en la letra de la ley. Aumentos irregulares en la producción de arroz, ajonjolí, tabaco, maíz, azúcar y, en general, materias primas requeridas por la industria, sólo indican que existe un proceso capitalista lento que sigue los pasos de una industrialización cuyas debilidades y mediatizaciones estudiaremos luego.

Reforma agrícola, tal vez. Reforma agraria, no. Durante los cinco años del período Betancourt, y según los datos del propio gobierno, fue objeto de reforma agraria una superficie aproximada de un millón y medio de hectáreas distribuidas entre 56.000 familias. Esto significa, como lo vimos al comienzo, un promedio de 12 mil familias por año (no contando el fenómeno corriente de abandono del asentamiento por ausencia de condiciones y recursos que permitan el trabajo). Con este ritmo, y habida cuenta de la alta tasa de crecimiento vegetativo de la población, debemos concluir en que tal promedio sólo alcanza a asentar 50% del incremento anual de la población campesina. Este panorama se torna desolador si recordamos la cifra acumulada de 350 mil familias al comienzo del período, y le restamos las 56 mil que fueron objeto de reforma agraria para comprobar que las 294.000 restantes deberán esperar 25 años para su total ubicación, sólo que entonces el margen acumulativo conservaría intacto aquel ejército de reserva de la miseria.

Las vicisitudes de impresión de este libro en busca de editor han causado una demora que nos permita confirmar nuestras aseveraciones con la experiencia posterior a 1964. Aunque las cifras suelen variar según la

fuentes que las da (IAN, MAC, Banco Central, Cordiplán y declaraciones oficiales), utilizando las más exageradas encontramos que, al final del período de Leoni (1968) se habrá asentado, desde 1960, un total de aproximadamente 150.000 grupos familiares. Ya vimos que había 350.000 grupos sin tierra en 1960 y conocemos la tasa anual de incremento de la población (4%), asimismo conocemos la proporción entre población rural y urbana (34% y 66% respectivamente). Nos encontramos con que, en 1968, quedan todavía 200.000 de aquellos 350.000 grupos familiares sin tierra que encontró Betancourt en 1960. A esa acumulación de los desposeídos hay que añadir otras 200.000 familias que, en cifras muy prudentes, han incrementado la población rural durante ocho años para hacer un total de 400.000 familias acumuladas sin tierra, después de una inversión que sobrepasa los 3.000 millones de bolívares. Todo esto en el mejor de los casos, pues tomamos como ciertas las cifras oficiales infladas por la propaganda política y no restamos, por carecer del dato, los grupos familiares que al poco tiempo de la ceremonia oficial, abandonan los asentamientos por carencia de crédito, asistencia y demás elementos que, según la Ley, deben complementar la reforma agraria integral. Baste saber que el ritmo entre asentamientos y títulos de propiedad es de aproximadamente 13% de éstos en relación con aquéllas, lo cual da una idea acerca de la inestabilidad del sector minoritario favorecido por la reforma.

La condición jurídica del campesino pobre es hoy más precaria que antes de promulgarse la Ley pues en ésta se establece que, a los dos años de su vigencia (1962) quedan prohibidos los contratos de arrendamiento sobre parcelas de subsistencia. Tal disposición entró en vigor según Aviso Oficial publicado al término del lapso. El problema es, sin embargo, que la gran mayoría de los campesinos a quienes dirige la disposición, no han sido todavía dotados con parcelas propias. De modo que la Ley, al eliminar la relación feudal que los ataba al latifundio y

no sustituir esta relación con la nueva de propiedad, los libera de la coyunda feudal y les otorga la más precaria de las libertades: la libertad de quien nada posee, ni siquiera el derecho de esclavizarse. Todos sabemos la conclusión de esta clase de medidas cuando no las acompaña un cambio revolucionario de estructuras: sigue el feudalismo como antes, sigue el siervo de la gleba atado a ella, sigue el medianero andino atado de por vida y descendencia al dueño absentista y sigue el campesino ajeno a los derechos más elementales del hombre civilizado.

La Ley para el relleno de los discursos oficiales, para el solaz de los latifundistas que se autoinvaden a fin de vender a buen precio malas tierras y para que, en las efemérides de la Alianza para el Progreso, en las reuniones de la OEA y en las declaraciones políticas de la Casa Blanca, la “reforma agraria venezolana” sirva a las demás colonias económicas de Estados Unidos como ejemplo y modelo de una “revolución sin sangre” a gusto del imperialismo. Queda, también, el problema básico de cientos de miles de campesinos sin tierra que cada día tienen mayor conciencia de su derecho a poseerla y quienes, entre la alternativa de la paz latifundista y de la violencia revolucionaria, están constatando la experiencia deprimente de un reformismo que fracasó al pretender hacer una reforma agraria que sea alegremente aceptada por los latifundistas y por la gran burguesía agraria. El resultado es un paño tibio que no resuelve la crisis latifundista, no resuelve el problema económico y social del campesino, ni satisface tampoco las exigencias de una burguesía agraria que pide asistencia técnica, créditos, servicios de distribución (conservación y mercado) y garantías de precios mínimos<sup>22</sup>. De este modo, el reformismo provoca la oposición de la oligarquía que presiona porque sea mayor el ya delicioso disfrute de sus privilegios, de los empresarios medios del campo, que presionan para que no se distraigan hacia el crédito campesino partidas que ellos necesitan para la ganadería y los cultivos tecnificados y, finalmente, el malestar de los campesinos

impacientes por hacer valer su derecho a la tierra y a participar en una riqueza hasta hoy concentrada por la minorías dominantes.

Sobre este potro de torturas, los partidos y los hombres que encarnan la llamada “democracia representativa” se debaten neutralizados por las fuerzas en tensión y, en su obsesión por conservar el poder político, sólo atinan a plegarse, cada día con menor dignidad, a los intereses de las clases más poderosas vinculadas al interés político-económico del sistema capitalista extranjero incrustado en el país.

Esta es la situación presente en Venezuela, esta es la crisis estructural enfocada desde el ángulo de la cuestión agraria y en la cual encontramos factores determinantes de la inestabilidad política actual, de las alianzas mudables y de las contradicciones tangibles en el seno de quienes ejercen el poder. Una mayor comprensión de esta superficie caótica y de sus caminos previsibles la irá dando el enfoque de la misma crisis desde el ángulo de otros problemas y sectores. Digamos, por ahora, que sobre este telón de fondo se desarrolla la dinámica de una violencia engendrada por el fracaso de la democracia representativa para encarar las reformas fundamentales: Así que la estabilidad y equilibrio que no se ha logrado mediante el reformismo, se pretende lograr mediante la policía, y acudiendo al ejército, cuando ya la policía resulta insuficiente para acallar las explosiones sociales del malestar.

## Sucursal Venezuela

*La mayor parte de la población industrial es de bienes de consumo perecederos o de ensamblajes y acabado de bienes durables de consumo importados. Esta producción significa sólo una octava parte del producto territorial bruto. Esta es una industrialización aparente, precaria, periférica*

D.F. MAZA ZAVALA

*Problemas del desarrollo económico de Venezuela*

Venezuela tiene una población de 8.627.982 habitantes. Si tomamos en cuenta la extensión de su territorio —unos 90 millones de hectáreas— y los recursos naturales que posee, esa población resulta muy por debajo de la que este país puede albergar con holgura. En Venezuela, sin embargo, hay un desempleo acumulado que se aproxima al medio millón de personas. Lo que ha sido una conquista de la lucha contra las enfermedades tropicales y contra la mortalidad infantil, como es la alta tasa de crecimiento demográfico, se ha convertido, para quienes gobiernan, en un indicador que va marcando el *crescendo* de una crisis social que se les echa encima. Se han cerrado las puertas a la inmigración, pero eso no ha bastado. Se aumenta la burocracia, se invierte una alta proporción del presupuesto en obras públicas, se conceden créditos industriales y agropecuarios, se pide dinero prestado al exterior, se forman comités, seminarios, mesas redondas, pero la ola de desocupación sigue creciendo y amenazando la inestable paz del reformismo. ¿Qué es lo que sucede en realidad? ¿Cuál es la raíz del mal y por qué los gobiernos del tipo



y condición del que actualmente tiene Venezuela no aciertan en su devaneo por liberarse de tan mortal amenaza?

Tenemos nuevamente el hilo de nuestro ensayo para tratar de ordenar una respuesta adecuada a estas preguntas, respuestas que, con variadas motivaciones, han sido muchas veces expresadas y otras tantas marginadas por quienes, gobernando para el provecho de las clases dominantes, no pueden retroceder en el destino de marionetas políticas que eligieron a conciencia.

Hemos repasado, en vuelo panorámico, las vicisitudes históricas del problema agrario venezolano y lo hemos situado en la perspectiva económico-política actual. Veamos, ahora, algunos datos complementarios indispensables para comprender la paradoja de un país extenso y con grandes recursos cuya subpoblación ofrece sin embargo, fenómenos típicos de sobrepoblación.

Las estadísticas nos hablan de 900.423 personas ocupadas en labores agrícolas<sup>23</sup>, lo cual constituye 34,4% de la población total ocupada cuya cifra absoluta es de 2.622.458 personas. Si el lector nos ha seguido con atención, conoce del primer capítulo, que aquel millón aproximado de venezolanos que trabajan en el campo lo hacen, en su mayoría, dentro de condiciones económicas pre-capitalistas, es decir, dentro de relaciones de producción que corresponden a etapas ya vencidas del desarrollo de la sociedad. Es un trabajo, por tanto, de muy baja productividad y cuyos excedentes, debido a la organización latifundista (pago de renta, absentismo, etc.) se concentran en la clase que monopoliza la tierra y la cual no está interesada en el mejoramiento del sector, ni en la sustitución de aquellas relaciones de naturaleza feudal o semifeudal. La renta de la tierra no vuelve a la tierra: va a fortalecer aquel comercio importador del que hablamos o, lo que es frecuente en estos casos, va a robustecer una demanda de bienes de consumo lujoso o superfluo. En otras palabras, los frutos del trabajo precariamente productivo de un millón

de venezolanos van a cubrir los gastos en viajes de placer, en mansiones lujosas, en joyas y en automóviles de una minoría ociosa cuya blanda existencia actúa como un freno para el desarrollo general del país.

Debido, asimismo, al atraso del sistema de producción, aquel millón de trabajadores no laboran los 300 días del año sino que, al dividir el número de días entre el total de personas que estadísticamente figuran como ocupadas, obtenemos un promedio de 167 días trabajados por año y por persona. Un trabajador que opere sólo durante este tiempo, prácticamente medio año, no es un “desempleado”, pero tampoco es un “empleado”: es, en rigor, un medio empleado, un sub-empleado. Evidentemente, aquellos 900.423 trabajadores que aparecen ocupados en la agricultura hacen el trabajo que correspondería a 501.760 ocupados durante todo el año. Es decir, la agricultura estancada dentro de la estructura económica nacional, sólo alcanza a cubrir 57,7% de la población activa ubicada en el sector. El otro 44,3% restante sobra.

Para medir bien el alcance de estas consideraciones es necesario advertir que ese 44,5% no figura en el medio millón de venezolanos abiertamente desempleados, sino que pasa disimuladamente en las estadísticas de empleo como gente ocupada cuando la verdad es que se trata de una vasta energía humana vegetando en los conucos y latifundios, subempleada y subestimada por las minorías que concentran la riqueza y defienden el mantenimiento de semejante sistema. La población rural crece encontrando ya saturado el medio y negada aún hasta la posibilidad del subempleo. Entonces emigra a los centros urbanos, viene en demanda de trabajo y de una vida mejor. Alrededor de esos centros se va formando el conocido cinturón de la miseria. Allí se va a encontrar con una industria que no emplea y con unos servicios sobrecargados de ocupación, y como se trata de una población joven naturalmente ansiosa de una vida menos infeliz, la frustración se va convirtiendo en el caldo de cultivo de un estallido que ni Caracas, ni Maracaibo, ni Valencia han

sentido en su violenta plenitud todavía, pero cuyos anuncios tienen ya sobresaltadas a aquellas minorías ociosas acostumbradas a disfrutar en paz sus privilegios.

### **La miseria es nuestra, la riqueza es ajena**

Aquella agricultura feudal apenas mezclada con un precario capitalismo sólo forma 7% del producto territorial, que ya ha sobrepasado los 30.000 millones de bolívares. Coexistiendo con ella, la explotación petrolera, altamente tecnificada, alcanza a producir, anualmente, 28% de este producto. Hemos visto que la agricultura, en 1964, mantiene aparentemente ocupadas a 900.423 personas mientras que, por contraste, el sector petrolero ocupa sólo a 32.280<sup>24</sup>. En síntesis: el sector más atrasado carga con el 35% de la población activa y el más adelantado, sólo con 1,2% de esa población. Sin mencionar todavía la pertenencia u origen de los capitales invertidos en uno y otro sector, veamos las consecuencias más salientes del contraste así señalado.

En primer lugar nos damos cuenta de que un millón de personas obtienen un producto cuatro veces menor que 32.000 personas, es decir, que en términos de producto territorial, una persona empleada en el sector petrolero vale por treinta del sector agrícola. Esta violenta diferencia de productividades fija los polos de la deformación estructural en Venezuela y marca la tremenda disparidad de los ingresos.

Realmente no se trata de un país, sino de dos países: uno medieval atado por relaciones pre-capitalistas, el otro ultramoderno aprovechando al máximo las conquistas de la tecnología.

Tanto el millón de personas refugiadas en la agricultura como las 32.000 empleadas en la actividad petrolera son venezolanas en su gran mayoría, lo cual lleva a pensar que frente a una vasta masa de trabajadores venezolanos paupérrimos existe una minoría de trabajadores

venezolanos privilegiados. Si esta consideración se complementa con la observación de que, por disposición constitucional, el Gobierno es también venezolano, concluiríamos sencillamente diciendo que Venezuela tiene planteado un problema interno de tremenda injusticia económica y social cuya solución es la tarea de un gobierno equitativo que tenga una buena capacidad administrativa.

Es aquí donde interviene el otro factor, el de origen de los capitales: el sector agrícola es fundamentalmente nacional en cuanto a los dueños de los factores de producción<sup>25</sup>, mientras que el sector petrolero, por contraste, es exclusivamente extranjero, lo cual quiere decir que la miseria es propia y la riqueza es ajena, siendo lo más doloroso de este asunto el hecho objetivo de que no es una simple frase lo que estamos haciendo sino la síntesis de un drama nacional.

Los frutos de la productividad se van afuera; y como el capital viene de lejos y es poderoso, la condición venezolana de los gobiernos es sometida a presiones económicas, políticas y militares poderosas que sólo ofrecen la alternativa de gobernar en función de aquel capital o correr el riesgo de las más oscuras conspiraciones, los más agotadores asedios y las más iracundas represalias. En el caso venezolano, la historia hasta hoy indica objetivamente que los gobiernos han preferido no correr estos riesgos y han optado por el primer término de aquellas alternativas. Venezuela ha sido, pues, colonizada.

El problema, sin embargo, consiste en que no hay estabilidad ni aún dentro de la mediatización neocolonial porque la deformación estructural cuyos extremos hemos señalado, es una realidad dinámica que cada día se profundiza más y su deformación hace más tenso el contraste entre sus polos. Para demostrar esto nos valdremos, muy escuetamente, de alguno datos de la misma fuente oficial que venimos utilizando<sup>26</sup>. La agricultura envía excedentes de mano de obra a los centros urbanos en un proceso continuo de migración rural-urbana

que va nutriendo el ejército de desempleados que hoy tiene un cerco sobre las más importantes ciudades del país. La población rural encuentra de este modo un desaguadero que alivia hasta cierto grado de presión demográfica sobre el estancamiento latifundista. En cifras relativas, la población rural ha disminuido y a la urbana ha aumentado originando un movimiento engañoso que pudiera ser tomado como testimonio de progreso e industrialización pero que, ya lo sabemos por su origen, sólo indica agudización de una crisis de estructura. Ahora bien, a pesar de la disminución en cifras relativas, las cifras absolutas de la población rural siguen ascendiendo y en lo que atañe a la población activa hallamos, año tras año, una incorporación de nuevos contingentes al núcleo del subempleo.

Si al examinar estas cifras las cotejamos con las correspondientes al empleo en el otro extremo de la productividad, hallaremos frente a los incrementos absolutos en la agricultura disminuciones absolutas en el sector petrolero. Tomemos, por ejemplo, los últimos cuatro años:

#### INCREMENTO DE OCUPACIÓN EN AGRICULTURA Y PETRÓLEO

Sector	1961	1962	1963	1964
Agricultura	+14.180	+14.388	+14.638	+14.964
Petróleo	- 3.570	- 2.722	- 894	- 1.002

Como quiera que en este ensayo nos proponemos rehuir las series estadísticas hasta donde la objetividad nos los permita en beneficio del lector, sólo diremos que el signo positivo es para la agricultura y el negativo para el petróleo cuando hablamos de empleo; se torna, al revés, negativo para la agricultura y positivo para el petróleo, cuando hablamos de producto; de tal manera, que, en los últimos quince años, la industria petrolera ha venido generando un desempleo continuo<sup>27</sup>

a medida que aumenta sus niveles de producción, como fruto de los avances tecnológicos en dicha industria. Esto ha determinado que el volumen de producción entre 1948 y 1950 obtenido con un empleo aproximado de 45 a 50.000 trabajadores, hoy se ha triplicado con un empleo de sólo 32.000 trabajadores. En otras palabras, un incremento bruto de dos millones de barriles diarios se está explotando con las dos terceras partes del personal de hace quince años. En cambio, ya hemos visto cómo en el sector agrícola el trabajo que deberían hacer 501.760 personas, lo están haciendo 900.423.

La dinámica del proceso es evidente ahora: el sector más productivo no sólo no absorbe mano de obra, sino que en virtud de su avance tecnológico, va desempleando la que todavía utiliza; y, en el sector más atrasado, la población crece y se acumula sobresaturándolo. Si este último sector es nacional y el otro extranjero, es claro que en el país quedan los frutos de la improductividad mientras que al exterior se van los de la productividad. Como a Estados Unidos corresponden las dos terceras partes del capital petrolero estamos autorizados para decir que la miseria es nuestra y la riqueza es yanqui.

Entre agricultura y el petróleo, como una panacea, se ha situado la industria. La industrialización es la gran esperanza de los sectores nacionalistas del país que ven en ella la posibilidad de romper el cordón de la miseria y de alcanzar la meta más alta, la independencia económica. Vamos, entonces, a analizar sintéticamente el proceso de industrialización de Venezuela aplicando el mismo método que utilizamos para el problema agrario: primero en su perspectiva histórica, que en este caso es muy corta, y luego en su caracterización actual. Veremos reflejarse en este sector la deformación básica de la estructura económica del país, estudiaremos cómo se proyecta en su interior el dominio del capital extranjero y comprobaremos objetivamente que una industrialización penetrada por dicho capital, lejos de conducir a la independencia

económica conduce a la formación de una variada sucursal interna del centro de gravitación capitalista que la mediatiza y la domina.

### **De artesano a manufacturero**

Podemos afirmar que antes de la Primera Guerra Mundial la industria manufacturera, como tal, no existía en Venezuela. Por vía de erudición histórica y por afán anecdótico, podemos hablar de la existencia de un sector artesanal adscrito a la economía rural latifundista, semejante a aquellos “burgos” medievales que se adherían como plantas parásitas al muro de los castillos feudales. Una entretenida revisión del inefable y laborioso trabajo de recolección estadística de Landaeta Rosales, nos introduce en un ambiente de talleres artesanales de trabajo familiar — jabonerías, pequeños telares, alfarerías, pequeñas industrias familiares de puros, de sombreros, de velas, panadería y confitería— que van enhebrando, en los paréntesis de una paz continuamente alterada por las guerras civiles, la economía aldeana de nuestro siglo XIX.

De 1917 —fecha un tanto convencional del ingreso del petróleo a nuestra economía— hasta 1936, en que un cambio político divide dos etapas, nada significativo sucede en el campo manufacturero.

Se registra sólo una lenta evolución de aquella artesanía hacia formas de pequeña y mediana industria, tan escasas sin embargo, que no nos permiten señalar como un cambio estructural. Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo se van perfilando como los centros donde esta actividad muestra mayor dinamismo. La industria textil cuenta ya con diez telares, distribuidos en dichos centros, lo cual representa una inversión de dos millones de dólares y un 50% por ciento de la tela de algodón consumida en el país. Tres fábricas de puros, tres cervecerías y unas pequeñas plantas para la fabricación de cemento, mantequilla, chocolate, mecates y papel

completan uno de los cuadros industriales más pobres de América Latina para aquel momento.

La manufactura es, entonces una actividad excepcional, a la cual se dedican unos pocos pioneros con cierto aire de personajes extravagantes. La actividad fundamental es el comercio: un comercio de campamento minero, de tienda árabe, donde no se diferencia el alimento envasado, del collar barato, de la joya cara, del licor fino y de la seda japonesa. De todos los países llega a los puertos de Venezuela esta indiferenciada gama de productos, obedeciendo al imperativo de una demanda cada día en aumento. Los antiguos vendedores de café y de cacao intuyen que es la hora de los establecimientos comerciales de importación. A la sombra del petróleo y bajo un Gobierno rentista, que gasta su renta en obras públicas, la agricultura pasa a ser la cenicienta de una economía que es ahora minera y comercialista.

Las estadísticas suelen engañar a los incautos. Así encontramos, en 1936, unos ocho mil establecimientos llamados industriales que no son otra cosa, en el fondo, que aquellos pequeños talleres de artesanía y pequeña industria en los cuales entretienen su tiempo improductivo unos cincuenta mil venezolanos dedicados en su mayor parte a producir papelón, melaza, queso y aguardiente, además de los renglones mencionados con anterioridad. Es, como puede verse, una industria pegada a las ubres de una agricultura ya sin vida: ambas van perfilando una Venezuela marginal en forzada coexistencia con una Venezuela alegre y ricachona que se viste y se abastece de los mejores bazares y despensas de Estados Unidos y de Europa.

En la pobreza de la primera se quedan esperando el tren de una abundancia que no llega, el 65% de los venezolanos aptos para trabajar; en la riqueza explosiva de la segunda se inscribe un núcleo creciente de burócratas y se va consolidando una clase poderosa de comerciantes que va a apoyar, con toda la fuerza de sus intereses, la conservación de tal estructura.



Las ideas de industrialización, reducidas como ya se dijo a un pequeño grupo bien disperso de pequeños empresarios, guiados más por la vocación y la curiosidad que por el sentido del lucro propiamente, van a recibir apoyo de los grupos políticos de izquierda que comienzan a organizarse a partir de 1936. Todo aquello queda, sin embargo, en el terreno especulativo de las ideas y de los programas.

A tal punto es esto cierto que el Banco Industrial, una entidad que obedece a las nuevas ideas, fundado en 1937, no va a operar como banco de promoción industrial sino comercial, presionado por los intereses dominantes en esa época, y porque el desarrollo industrial de aquel momento no alcanzaba una significación financiera relevante.

A tal efecto, un informe de la Junta Directiva de dicho Banco, en 1959, rememorando los comienzos de la institución, asentaba: “En 1938, jabonerías, fábricas de bolsas de papel, productos farmacéuticos, pesquerías, camisas, alpargatas, calcetines, tejidos de punto, caramelos y bocadillos, dan enternecedoras muestra del cuadro industrial de la época”.

En un folleto, sin fecha de publicación (¿1937?), el ingeniero G. R. Pérez, partiendo del análisis de la Estadística Mercantil y Marítima, se propone ofrecer una guía del inversionista industrial señalando aquellos renglones donde existen posibilidades de desarrollo interno de producción. Es acaso este el primer trabajo sobre un orden de prioridades industriales en nuestro país y sin duda responde a una inquietud nacionalista —no muy frecuente entonces— de quien sentía la angustia de ver los puertos abarrotados de mercancías extranjeras susceptibles de ser producidas en Venezuela. Así señala a los posibles industriales, los siguientes campos de inversión: artículos de algodón (se importaban quince millones de bolívares para 1935), los artículos de cuero, productos químicos, pinturas, juguetes, leche condensada, aceites vegetales, cementos y otros. Veinticinco años después, se va a organizar en el país una institución, la Asociación Pro-Venezuela, para realizar la misma

labor y despertar la misma conciencia industrialista que está contenida en aquel folletico del ingeniero G.R. Pérez.

Lo grave del asunto es que, al hacer idéntico recuento, en 1958, y aun en 1964, muchos de los renglones de importación a sustituirse, son los mismos que, en su humilde folleto, enumeraba allá por 1937 este ignorado doctor Pérez.

La primera causa de tal retraso es una causa estructural: los desajustes provocados por el sistema capitalista extranjero en los sectores indígenas de la economía, así como la orientación del gasto público; la segunda es una causa institucional que resalta sobre otras: el Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos. Antes, sin embargo, de entrar en el análisis de estas causas que, en rigor, constituyen capítulo aparte, continuemos nuestro método de la caracterización histórica del problema.

Las vagas ideas sobre el desarrollo industrial y la incipiente preocupación política por este problema, puesta de manifiesto en el período 1936-1939, van a recibir estímulo e impulso de un hecho imprevisto, ajeno a nuestra dinámica interna: la Segunda Guerra Mundial. Podemos, en este sentido, afirmar que el desarrollo de nuestra industria manufacturera como cambio de un sistema artesanal con base en el trabajo familiar, fundamentalmente, a un sistema capitalista urbano, es un fenómeno de postguerra. En efecto, las limitaciones del abastecimiento de productos importados, ocasionadas por las dificultades del comercio en tiempo de guerra, provocaron el surgimiento y el desarrollo de algunas factorías industriales y, lo que es más importante, la iniciación de una conciencia industrialista que irá cobrando fuerza hasta llegar a la formación de un grupo de empresarios industriales, cuya gestión va a influir con poder creciente en la actividad económica y política nacional durante los últimos diez años.

La década 1940-1950 es de transición entre el taller artesanal y la pequeña industria, entre el taller manufacturero y la instalación fabril

capitalista. Rodeado y hasta forzado por una circunstancia bélica va a ser un desarrollo de integración hacia adentro, debido a la utilización, al máximo, del escaso equipo con que cuenta el país y a la necesidad de proveerse de materias primas de origen nacional.

El impulso financiero parte del Estado: en 1944, se crea la Junta para el Fomento de la Producción Nacional, con sesenta millones de bolívares para el otorgamiento de créditos a las tres ramas de producción interna no petrolera: agricultura, ganadería e industria. Tanto en las normas como en las prioridades para la concesión de los créditos se atiende a los factores señalados con anterioridad: en el caso de la agricultura, se da preferencia a la producción de materias primas con destino a la industria nacional. Así se dice textualmente en las disposiciones:

Se determina con carácter preferencial aunque no taxativo los cultivos de maíz, caraota, soya, algodón, ajonjolí, coco maní, tubérculos, cebolla, ajo, tomate, plátano, frutas en general, y los cultivos que aporten materias prima para la fabricación de alimentos concentrados para animales<sup>28</sup>.

Al igual que la artesanía, la manufactura surgía como una derivación y desarrollo de la agricultura y la ganadería. Se trataba de un programa integrado, con base en nuestros propios recursos y en función de su aprovechamiento, todo lo cual reflejaba, insistimos, una obligada circunstancia de autoabastecimiento.

En cuanto al capital, este provenía del crédito público y de inversionistas privados nacionales, muchos de ellos comerciantes a quienes la guerra forzaba hacia la industria.

La Corporación Venezolana de Fomento, creada en 1946, va a continuar con mayores ambiciones y recursos el programa de 1944. Muy significativamente, la Corporación se inicia como instituto financiero

de aquellas tres mismas actividades (agricultura, ganadería, e industria) englobadas bajo la expresión de “producción interna” para diferenciarlas no sólo del comercio, sino de ese fabuloso ajeno mundo del petróleo.

Resumiendo, podemos decir que nuestro desarrollo industrial en la década 1940-1950 se caracteriza por arrancar como un proceso derivado de la economía agropecuaria, dirigido a su mejor aprovechamiento y basado en un financiamiento fundamentalmente nacional<sup>29</sup>.

Las dificultades en el aprovisionamiento de maquinaria y la naturaleza misma de las nuevas industrias añaden una característica más, como es la utilización relativamente alta de mano de obra. La dependencia de la agricultura para el abastecimiento de materias primas tornó a la industria vulnerable y sujeta a los desajustes agropecuarios.

¿Cómo se va a desenvolver este proceso una vez concluida la guerra y una vez que las industrias de los países avanzados reconviertan su producción de guerra en producción normal de paz y vuelvan a la recuperación de sus mercados? ¿Cómo va a resistir nuestra industria naciente el regreso a la normalidad comercial de anteguerra y qué desajustes van a ser provocados? ¿Qué elementos estructurales e institucionales van a ser determinantes en el desarrollo de la década 1950-1960? Tal es, precisamente, el objeto del capítulo que sigue.

### **Una industrialización neo-colonial**

Dos factores fundamentales van a estimular y a modificar el crecimiento del sector manufacturero en la década que comienza en 1950. Ellos son el aumento sustancial de los ingresos provenientes del petróleo, lo cual va a dar origen a un mayor volumen del gasto público y a una mayor disponibilidad de divisas y la reapertura e incremento, en términos de normalidad, del comercio internacional como fenómeno

de postguerra. Durante el período 1940-1950, los ingresos del Tesoro arrojan un promedio de 925 millones de bolívares por año dentro de una serie cuyas cifras más altas se obtienen en los últimos años; ese mismo promedio es, para el período 1950-1959, de 3.467 millones de bolívares, cifra que casi cuadruplica la del decenio anterior.

La industria manufacturera va a ser objeto, en este nuevo período, de dos fuerzas contrastantes: de un lado, el crecimiento del gasto público, que genera una gran demanda y que estimula, por ello, el aumento de la producción; y del otro, la vigencia del Tratado de Reciprocidad Comercial con Estados Unidos, que mantiene abierto el mercado interno con bajísimas tarifas arancelarias, a los productos manufacturados de Estados Unidos y de aquellos países de Europa que gozan de la cláusula de la nación más favorecida. La consecuencia va a ser un proceso de crecimiento forzado por la magnitud del ingreso, pero distorsionado por la composición de la llamada Lista N° 1 del Tratado: la industria va a crecer dentro de un mercado marginal, aprovechando las rendijas que un sistema netamente importador va dejando al esfuerzo de la producción interna.

Esto lo sostienen ya los industriales en 1950, cuando presionan la revisión del Tratado, logrando apenas la exclusión de unos cuantos renglones tales como calzados, sardinas, algunos textiles, cemento, etc., pero dejando intactos casi doscientos numerales arancelarios compuestos por bienes de consumo, productos intermedios y materias primas, susceptibles, en su gran mayoría, de ser producidos dentro del país. El Gobierno no definió, durante el período, una política industrial proteccionista quedando ésta sujeta a la voluntad, comprensión o capricho de los funcionarios de Fomento y Hacienda.

Todo lo cual explica la heterogénea e irregular fisonomía de nuestro proceso manufacturero en dicho lapso. Sin embargo, y habida cuenta de los factores mencionados, podemos establecer las características más sobresalientes.

### *1. Crecimiento paradójico*

Con base en 1953 el índice de crecimiento de la industria manufacturera, que para 1950 es de 64,7 alcanza en 1959, excluida la refinación interna de petróleo, a 223, lo cual muestra un aumento de 3,5 veces en diez años. El producto industrial bruto se mueve, en dicha década, con una variación interanual media del 16%, superior a la correspondiente a otros países del área, dentro de la cual sólo es relativamente comparable con Brasil.

Estas magnitudes, sin embargo, adquieren su real sentido cuando las estudiamos a la luz de la economía en su conjunto y así hallamos que, con todo y ser rápido el proceso, su importancia como participante en el producto territorial bruto apenas se mueve dos y medio puntos, al pasar de 9,3% en 1950 a 11,55% en 1959. Esta participación es realmente baja, si se la considera en relación con otros países del área (Argentina 23,4%; Brasil 20,6%; Colombia 20,7%; Chile 17,45%; México 20,42%; Perú 17,31%, etc.); y si se le considera en relación con los restantes sectores de la economía nacional, tendríamos al final del período (1959) tres sectores que la superan con las siguientes magnitudes: petróleo 29%; comercio 15,36% y servicios 13,94%; todo ello con el agravante de que el sector agrícola ha venido disminuyendo su participación, desde 7,97% en 1950 hasta 6,3% en 1959, de manera que lo incrementado en industria apenas compensa lo deficitario en agricultura y, juntos los dos 17,85%, apenas si alcanza las dos terceras partes del peso conjunto del comercio y los servicios 29,30% mientras que, dentro de la estructura económica general, sigue dominando por su alto margen el petróleo, como sector fundamental generador de bienes físicos.

La conclusión es sencilla: el aumento de la renta petrolera y su efecto a través del gasto público ha estimulado el crecimiento del sector

manufacturero, sólo que no en la medida y con la eficacia que la magnitud de aquella renta haría prever. El mecanismo dinámico del ingreso petrolero, que pasa a la economía a través del gasto público fundamentalmente, ha originado y fortalecido, desde hace cuarenta años, una estructura comercialista de importación que ha venido manteniendo en niveles marginales la demanda interna de productos nacionales. El otro mecanismo importante de transmisión de la renta petrolera, el de sueldos y salarios y reinversiones mediante contratos para obras y servicios, ha operado bajo el mismo esquema anterior, generando un ingreso que se traduce en importaciones.

El Estado venezolano y las compañías petroleras, además, en su condición de compradores, han sido los mejores clientes del comercio exterior, con toda una gama de privilegios para adquirir, exonerados y a cambio preferencial, no sólo bienes de consumo básico o productos intermedios, sino hasta bienes suntuarios.

## *2. Industrialización importadora*

En estas condiciones, la industria manufacturera es una planta que vive superficialmente sobre el tronco petrolero y comercial de la economía venezolana. Pero su signo es ahora, y por ello mismo, distinto del que caracterizó su génesis. Hemos visto que en la década 1940-1950 la industria se orienta movida por una perentoria exigencia de autoabastecimiento y que, privada de las facilidades del comercio internacional, desarrolló un proceso de integración hacia adentro: se originó una tendencia al establecimiento de industrias derivadas de la agricultura y la ganadería, cuyas materias primas deberían ser suministradas internamente. El camino era correcto y la orientación obedecía a un orden natural de prioridades en cuanto a la disponibilidad de los recursos. Pero este proceso, que no obedecía a un política nacionalista consciente, sino

una necesidad impuesta por las circunstancias internacionales, se va a romper cuando tales circunstancias cambien y, en la década 1950-1959 asistimos a una desviación del sentido con que, allá en 1944, aquella Junta para el Fomento de la Producción Nacional se vió forzada a orientar el desarrollo industrial venezolano. Trataremos de explicar este cambio del proceso.

La estructura latifundista del sector agropecuario, con sus características de cultivos extensivos, tierras ociosas, producción irregular y baja productividad, así como la existencia colateral de una forzada agricultura de subsistencia, factores esenciales del estancamiento secular del agro venezolano, determinan una producción irregular y una oferta inflexible muy poco adecuadas para atender la demanda de materias primas y de alimentos de una industria y una población crecientes. El esfuerzo industrial de los años cuarenta para proveerse de materias primas nacionales, obedecía a una causa impuesta por la situación internacional, como ya lo demostramos. Desaparecida esta causa, la economía interna va a imponer las condiciones de su estructura deformada: será más fácil ahora importar las materias primas y los alimentos, que exigirlos a una agricultura cuyo sistema feudal la estanca e incomunica con el sistema capitalista. Comienza así un proceso inverso al anterior, un proceso hacia afuera, ayudado por la abundante y libre disponibilidad de divisas y por el poder adquisitivo exterior de la unidad monetaria nacional.

Los jugos no van a ser de frutas criollas, sino de frutas importadas en forma de papilla; se importa el tabaco rubio para los pocos cigarrillos que se fabrican en el país; se importa la madera para los muebles, el cuero para el calzado, las fibras para los textiles y la melaza y el mosto para los licores. En este sentido, la industria se acomodó no sólo a un desajuste estructural, sino al marco institucional comercialista, puesto que aprovecha las ventajas que, para tales importaciones, le ofrece la lista N° 1 del Convenio Comercial con Estados Unidos. Se trata así de una



industria artificial, importadora, desligada de todo nexo con los recursos naturales disponibles, verdadera flor de invernadero, propia de una economía rentista.

Desligada de aquel orden natural de prioridades señalado por la disponibilidad de los recursos naturales, la industria importadora podrá diversificar sus renglones de acuerdo con la naturaleza y variedad de la demanda, con la única limitación de su mercado marginal; y como el generador de esa demanda es, fundamentalmente, el gasto público, la industria importadora va a seguir, por toda orientación, la política que siga ese factor dinámico. Por ello, cuando en el lapso 1955-1957, el gasto público se vuelca en vastos programas de obras públicas, varía también la distribución del capital dentro de la industria manufacturera en favor de los sectores directamente ligados a la construcción (productos metálicos, construcción de materiales de transporte, química, caucho, etc.), con detrimento relativo de los sectores de mayor peso tradicional (alimentos, bebidas, tabaco y textiles, que en 1950 aportaban el 42% del producto industrial bruto pasaron al 32% en 1959); al mismo tiempo, los productos metálicos, maquinarias y equipos de transporte, que representaban el 5% del producto industrial bruto en 1950, alcanzaron el 9% en 1959.

Es una tendencia conocida la de que todo proceso industrial, a medida que se desarrolla, trae aparejado un mayor crecimiento de las industrias productoras de bienes intermedios y bienes duraderos, simultáneamente con una saturación en las industrias tradicionales de alimentos, bebidas, tabaco, textiles, etc.

El caso analizado aquí no corresponde, sin embargo, a la naturaleza estructural de esta tendencia pues, en primer término, está muy lejos de existir, para el período en que dicho fenómeno se manifiesta, una saturación en las industrias tradicionales (aún en 1959 se importaban 409 millones de bolívares en productos alimenticios y 406 en bienes

no durables de consumo); ni la importancia relativa de las nuevas industrias corresponde a un orden de prioridades en la sustitución de materias primas, productos intermedios y bienes durables importados: esa importancia corresponde al desarrollo inarmónico de un sector, el de la construcción, sobre el cual recae la parte más sustancial del gasto público.

De nuevo aquí, como en el caso de la relación agroindustrial, nos tropezamos con la economía interna imponiendo inexorablemente las deformidades de su estructura.

Al final de la década nos encontramos, pues, con un desarrollo industrial que acusa una rapidez de crecimiento intrínseco, aun cuando su importancia en el conjunto conserva variación.

Se trata de un proceso desligado de raíces que lo afirman sobre los recursos naturales del país (durante la década, se importan 10.254 millones de bolívares en materias primas e insumos), en donde las industrias importadoras del 45%, del 50% y en ciertos casos del 80% de sus insumos, son como jardines colgantes de una economía que, allá en su base, sigue siendo latifundista y petrolera.

### *3. Mucho capital poco empleo*

Vimos cómo, en la década de los cuarenta, la industria manufacturera surgió como un proceso caracterizado por la escasez de maquinarias y equipo y, por ello mismo, altamente empleador de mano de obra.

La productividad del sector era baja y se hallaba ligada a la productividad, mucho más baja, del sector agropecuario. En la década 1950-1959 esta característica va a variar totalmente: la disponibilidad de divisas, la inexistencia de restricciones cambiarias, las insignificantes tarifas para importación de maquinarias y equipo, van a alentar un afán de meca-

nización de singular magnitud para un país que transita los caminos iniciales de la industrialización. Ese afán obedece, simultáneamente, a otro estímulo de una suma importancia: la violencia del proceso no ha contado con un desarrollo intenso y adecuado del entrenamiento, preparación y educación del elemento humano. Venezuela se lanza al desarrollo industrial moderno sin obreros especializados, sin gerentes y sin experiencia. Se importa la técnica, se importa la experiencia. Si algo es nuevo y admirable, es precisamente la voluntad de industrializar a toda costa, en lo cual, digámoslo francamente, no se ha hecho plena justicia a un grupo pequeño pero aguerrido de empresarios nacionalistas que, a la postre —y como veremos— resultan víctimas del proceso que engendraron con una fe desorientada, oficialmente desatendida y traicionada, a veces, por ellos mismos. Pero volvamos al argumento anterior: la escasez de una mano de obra especializada y barata<sup>30</sup> estimula la tendencia a las instalaciones más modernas mecanizadas que se importan bien de Estados Unidos, bien de Alemania Occidental, ya de Italia, ya de Inglaterra, de Bélgica o de Japón y, en casos dignos de estudiarse, por la habilidad combinatoria de los ingenieros asesores, el equipo es la unidad resultante de una combinación que recoge los adelantos tecnológicos de varios países competidores.

Se va organizando así, para las etapas finales de la producción —que son las que, en rigor, cubren la industria manufacturera descrita— un complejo de alta mecanización y automatización que sólo exige, para su operación y control, unos cuantos ingenieros —generalmente extranjeros— y unos cuantos obreros para la vigilancia. De este modo, el empresario inversionista resuelve dos problemas a la vez: el de la disparidad entre productividad y salario y el de los problemas sociales en potencia que todo agrupamiento obrero puede generar.

Algunas cifras bastarían para respaldar estadísticamente la afirmación anterior. En 1950, el capital existente para el conjunto de la economía

alcanza a Bs. 26.523 millones, cifra que se duplica hacia el final de la década (1959) cuando hallamos un capital de Bs. 54.874 millones. La relación entre el producto y el capital es durante dicho lapso de 0,48% en promedio, sólo que dicha relación no expresa las grandes disparidades entre los diversos sectores, fruto de los desajustes de productividad entre los mismos, así: mientras el sector agropecuario mantiene una relación producto capital que oscila entre 0,21% para 1950 y 0,22% para 1959, las industrias manufactureras pasan de 0,51% a 0,82% en el mismo lapso; el conjunto de manufacturas, minería, petróleo y construcción englobados bajo la denominación de “sectores de producción dinámicos” arrojan un promedio superior a 1,10%. El capital existente en manufacturas, más que se duplica al pasar de Bs. 1.536 millones en 1950 a Bs. 3.692 en 1959 (del 5,8% al 6,7% del total en el período); pero mientras que en agricultura el capital existente por persona activa se mantiene estancado en una cifra baja (de Bs. 7.003 en 1950 a 8.819 en 1959), en la industria manufacturera dicha relación se duplica al pasar de una intensidad de Bs. 7.270 a Bs. 14.145 por persona activa en igual período.

Si del capital existente pasamos a la inversión bruta y a la ocupación generada, la diferenciación y el dinamismo del proceso en la manufacturera se torna más claro: en 1950 nos encontramos con un capital manufacturero existente de Bs. 1.536 millones, una inversión bruta fija de Bs. 226 millones (el 6,9% de la inversión fija total) y una población activa, en dicho sector, de 207.000 personas; en 1959, este mismo cuadro ofrece las siguientes dimensiones: Bs. 3.692 millones de capital existente, Bs. 853 millones de inversión bruta fija (12,6% del total) y una población ocupada en el sector, de 261.000 personas. En cifras relativas, esto quiere decir que el capital existente, en el período reseñado, aumentó un 140% (el producto bruto aumentó 162%) la inversión bruta fija un 227%, al tiempo que el empleo, por contraste,

sólo aumentó 26 %, resultando, examinados los incrementos absolutos interanuales, que la industria manufacturera, en el período 1950-1959 dio empleo a un promedio de 6.000 personas por año, lo cual equivale al 10% apenas de la población activa que, en promedio anual, iba al mercado de trabajo durante la década analizada<sup>31</sup>.

Tocamos, de este modo, uno de los aspectos más interesantes de nuestro estudio: la relación de ese gran esfuerzo capitalizador descrito, con el empleo de la fuerza de trabajo disponible. Los sectores más productivos —petróleo, manufacturera, construcción y minería— lo son, precisamente, por la alta intensidad de capital existente por personas empleadas; en 1950, estos sectores en conjunto representaban 17,5 % del capital existente y empleaban 20% de la población activa total; la agricultura representaba 18,6% y empleaba 41% de esa población; al tiempo que los servicios mantenían dicha relación en 5,4% del capital y 20% del empleo.

En 1959, el contraste entre productividad y empleo es mucho más definido, como se desprende al establecer la misma secuencia anterior: petróleo, minería, manufactura y construcción, en conjunto, representan 23,8% (un aumento de 5,3%) para un empleo del 20,9% (apenas un punto de diferencia en la década); mientras que la agricultura baja en su participación relativa dentro del capital hasta situarse en 13,4% (5,2% que es, prácticamente, el incremento de los sectores dinámicos en conjunto) para un empleo del 33%; los servicios ofrecen una relación de 7,4% del capital y 20,9% del empleo. La tendencia es bien clara ahora: por un lado, los sectores de mayor capitalización muestran una condición estacionaria, en cuanto a la absorción de mano de obra (condición que se va tornando regresiva en la medida del avance tecnológico, como es el caso del petróleo de 55.170 trabajadores en 1948, para una producción de 78 millones de m<sup>3</sup>; pasa a 43.056 trabajadores en 1959 para una producción de 161 millones de m<sup>3</sup>, es decir, con

12.000 trabajadores menos se producen 83 millones de metros cúbicos adicionales de petróleo) y por otro, los sectores de más baja productividad (que se mantienen estacionarios y aun regresivos en cuanto a su participación relativa en el capital existente) continúan absorbiendo la mayor cantidad de mano de obra, aunque, en términos relativos, también disminuye su papel de empleadores<sup>32</sup>.

La conclusión salta a la vista: el mantenimiento de semejante relación productivo-empleadora dentro de la estructura económica conducirá a una disparidad y desajuste cada día mayor entre unos y otros sectores, así como a la acentuación de las condiciones de subdesarrollo con las secuelas económicas, políticas y sociales que tales condiciones implican. Si a ello se añade el hecho objetivo (que examinaremos con detalle más adelante) de que el capital existente en los sectores más altamente productivos es capital extranjero, y que de aquel avance tecnológico, este capital aprovecha los beneficios marginales en su parte más sustancial, mientras el país acumula un desempleo estructural, entonces habremos planteado, en apretada síntesis, las perspectivas del problema básico que deberá resolver una política económica nacionalista.

Por ahora, concluyamos asentando que, a pesar del proceso capitalizador de la década 1950-1959, nos encontramos con que de 106.423 desempleados, que al comienzo de la misma representaban 6% de la población activa, pasamos a 252.521 desempleados al final, los cuales representan 10% de la población activa. Asentemos, asimismo, que en la agricultura, una situación de estancamiento general convive con el mantenimiento de una población campesina cuyos niveles absolutos se conservan y aumentan (de 704.704 en 1950 a 833.287 en 1959), a pesar de la ininterrumpida corriente migratoria del campo a la ciudad, lo cual determina en el sector rural una situación de desempleo oculto o subempleo, cuya estimación prácticamente duplicaría la cifra del desempleo descubierto y cuyo crecimiento, acoplado al vertiginoso

crecimiento de la población total, ahonda, años tras años, un problema social, rural y urbano, para cuya solución se muestran incapaces las fuerzas y relaciones de productividad cuya heterogeneidad, entramiento y divergencias, conforman el complejo panorama de nuestra estructura económica actual.

#### *4. El capital extranjero*

La inversión directa constituye, aproximadamente, el 96% de la inversión extranjera total del país, correspondiendo a las inversiones de cartera un porcentaje mínimo, cuyas fluctuaciones siguen las tendencias especulativas y movimientos típicos de corto plazo de inversiones en acciones, títulos, etc. Aquella inversión directa recae, fundamentalmente, en el sector de hidrocarburos y de minería, los cuales representan en la década 1950-1959 el 93%, aproximadamente, de la inversión directa total. El 7% restante se distribuye entre comercio, industria manufacturera, construcción, servicios, bancos y seguros en proporciones diversas, cuyas relaciones analizaremos luego. Nos interesa, por ahora, destacar como objeto de estudio, la cuantía y la evolución de tales inversiones en el sector manufacturero. La inversión acumulada en el sector manufacturero es de Bs. 209 millones para 1951 y llega a Bs. 557 millones en 1958; el índice de crecimiento (1950=100) pasa de 123 a 340 en dicho lapso, señalando un ritmo más elevado que el índice general de inversiones extranjeras totales, cuyas cifras para ambos extremos de la serie son 105 y 228, respectivamente; pero denotando, sin embargo, un movimiento muy lento en relación con los índices de inversión extranjera en construcción (de 110 en 1951 a 900 en 1958), en minería (de 113 a 621), en comercio (de 145 a 730) y en bancos (de 111 a 439), actividades que, durante

la década, parecen ofrecer un atractivo mayor que la manufactura para el capital extranjero.

Desafortunadamente, en la fuente estadística principal y prácticamente única para este tema<sup>33</sup>, las series correspondientes a la inversión bruta fija para la industria manufacturera, y a la inversión acumulada extranjera en el mismo sector, no pueden ser sencillamente comparadas por cuanto su cálculo tiene base y objeto diferentes. Los datos sobre la inversión extranjera son muy limitados y, en todo caso, la inversión es calculada a precios de cada año y con arreglo a informes que suministran las empresas, mientras que las cifras de inversión fija parecen ser el fruto de cálculos en base a una mayor disponibilidad de información, de evaluaciones propias del instituto investigador y con relación a los precios de un año determinado. Por ello, la cifra de Bs. 209 millones de inversión extranjera en 1951 no puede ser analizada como integrante o en relación directa con la de Bs. 253 millones que, para dicho año, es la inversión bruta fija en el sector manufacturero; con todas las reservas hechas, basta, sin embargo, una simple ojeada a estas cifras para tener una idea vaga, pero significativa, de las proporciones que, dentro del sector, tiene ya en 1951 la inversión extranjera. Aquellas mismas cifras son, para 1959, de Bs. 650 y 853 millones, respectivamente, de donde se desprende que, a pesar de no ser el sector manufacturero, durante la década 1950-1959, un sector relativamente muy atractivo para el capital foráneo, la inversión acumulada de este ocupa, sin embargo, una proporción decisivamente alta.

Al analizar estas inversiones por ramos de actividad, encontramos una relación semejante a la que vimos al estudiar la evolución del sector manufacturero en la década 1950-1959, es decir, una orientación hacia aquellas actividades impulsadas por las tendencias del gasto público; frente a la posición relativamente menor de la inversión de las industrias tradicionales (alimentos, bebidas, textiles, tabacos, etc.) se acentúa



la inversión en luz y energía, en las industrias químicas, metálicas y, en general, hacia 1955-58, en las actividades afluentes de la construcción.

A pesar de que comparada con la inversión extranjera en petróleo y minería, la correspondiente al sector manufacturero es bastante menor, relativamente, debemos comenzar por apreciar su importancia dentro del sector en sí mismo y en su evaluación y, en este sentido, es indudable que, dentro del período analizado, la inversión extranjera desarrolla un proceso de penetración ascendente en determinados ramos industriales. Si examinamos dichas industrias nos encontramos con que son aquellas que mayor cantidad de insumos importan del exterior: las industrias metálicas, la industria química y la de los materiales de transporte constituyen el 40% (unos Bs. 300 millones) de los insumos y materias primas totales importadas durante la década reseñada. Las industrias se establecen para la elaboración de las etapas finales e importan de proveedores extranjeros —generalmente de sus casas matrices— los productos semielaborados con lo cual entran a gozar de privilegios no reservados al capital criollo: ventajas de suministro, de crédito y de precios que, añadidas a la protección industrial del Estado (crédito público, exoneraciones y aranceles) crea las condiciones propias a la formación de monopolios y duopolios, ya que la estrechez del mercado en relación con la capacidad y mecanización de aquellas industrias, rara vez permite una competencia más diversificada. De este modo, la inversión extranjera industrial se complementa con la inversión extranjera comercial dentro de un sistema de alta productividad que, encadenado con la inversión extranjera en bancos, servicios y seguros, remacha sobre la economía nacional la característica de dependencia y mediatización a que la somete la hegemonía absoluta del capital extranjero en la explotación de los hidrocarburos y de la minería. A la luz de este criterio de conjunto es como debemos plantear la cuestión de la inversión extranjera en el sector manufacturero.

El hecho cumplido de que recursos naturales básicos, como petróleo y hierro, constituyen el eje de un sistema capitalista extranjero que opera, dado el volumen comparativo de su producción de bienes, como el sistema fundamental de nuestra economía, ha determinado, en la mente de políticos y economistas, el surgimiento y desarrollo de una tesis nacionalista a la cual se alude cuando se habla de “diversificación económica”, “desarrollo de la producción interna” o simplemente “industrialización nacional”. Consiste esta tesis en que, partiendo del ingreso interno generado por el petróleo, el país desarrolla el sector agropecuario y el industrial como la fórmula más adecuada para contrarrestar los problemas que engendra la monoproducción y exportación, por el capital extranjero, de una materia prima agotable.

Esta tesis, con ser cierta en su enunciado general, encierra un gran peligro y puede crear (en realidad ha creado) ilusiones acerca de una fórmula sencilla y automática, que consistiría en una política de industrialización basada en una serie de estímulos institucionales para la sustitución de importaciones, en cuya realización se pone toda la fe de un nacionalismo ingenuo. Estamos convencidos de que la política proteccionista que se inicia en 1958, bajo la presión de la burguesía progresista industrial y agropecuaria, se inspira en la convicción mecanicista de que basta aumentar el número de plantas industriales distintas de las de hierro y petróleo para alcanzar la independencia económica. Si examinamos los documentos del Ministerio de Fomento nos encontramos con este criterio en el fondo de las declaraciones de política industrial, en los lineamientos de una escala de prioridades y en las medidas concretas de fomento a la producción.

La tesis nacionalista de la industrialización tiene necesariamente que penetrar más a fondo en la consideración del problema. Es cierto que hierro y petróleo constituyen el núcleo del capital extranjero invertido en Venezuela, pero no es cierto que ellos exclusivamente integren el sis-

tema capitalista extranjero incrustado en nuestra economía. Ese sistema es más vasto y dinámico, lo hallamos en la banca, en el comercio, se filtra en los servicios, crece en la industria, invade las esferas más lucrativas de la ganadería y, a través del dominio industrial, controla y explota a los agricultores que se dedican a la producción de materias primas. El problema no es un simple problema de sustitución de importaciones a como dé lugar, ni de la creación pasiva de una serie de estímulos institucionales (aranceles de aduana, exoneraciones, subsidios, asistencia técnica y créditos), sino de un problema complejo de elaboración y ejecución de una política económica nacionalista e integral que contemple la sustitución de importaciones y la utilización de los estímulos existentes como partes y factores de un contexto mucho más amplio que garantice la dirección nacionalista real del proceso. De lo contrario, sucederá lo que hasta hoy ha venido sucediendo: que aquella presión de los sectores de la burguesía productora y la política proteccionista resultante han estimulado, paradójicamente, el crecimiento y diversificación de la inversión extranjera en el país.

El capital extranjero está guiado por una experiencia centenaria y por una inteligencia muy bien organizada: un nacionalismo ingenuo es el mejor caldo de cultivo para sus operaciones. Nos bastaría un ejemplo para ilustrar el caso: aprovechando el entusiasmo industrialista generado por aquella política, una compañía petrolera, la Creole, ofreció como una contribución desinteresada para el desarrollo industrial la constitución de una empresa financiera para desarrollar proyectos industriales, en cuya inversión, aquella compañía participaría con determinada cantidad del capital. Las acciones derivadas de esta inversión serían posteriormente ofrecidas a inversionistas venezolanos. De este modo, se daría gran movilidad al capital de la financiadora, se cumpliría su función de promover el desarrollo y se demostraría su desinterés. Así nació la *Creole Investment Corporation*, con diez millones de dólares

de capital, realizando su primera operación lucrativa al cambiar estos dólares, no al cambio oficial del dólar petrolero, sino al cambio para inversiones corrientes, lo cual daba un saldo de más de diez millones de bolívares en favor de la compañía petrolera inversionista. Pero el problema no se detiene allí: la *Creole Investment Corporation* ha invertido y está invirtiendo su capital en empresas industriales agropecuarias de alta productividad que le permiten, aparte de alcanzar una ganancia, influir en estos sectores y fortalecer la mediatización de los mismos en provecho de los intereses mayores de la gran compañía. En cuanto al ofrecimiento de venta posterior de las acciones, se trata de un recurso tan gastado de la política de penetración del capital extranjero, que no vale la pena detenerse en su consideración. Basta citar el caso de las inversiones de Rockefeller en la industria y el comercio en Venezuela para demostrar que aquel tipo de mecanismo no funciona en la práctica, porque si funcionara hace más de cinco años que tales inversiones estarían en manos de capital privado venezolano. Ha sucedido, por una de esas ironías muy corrientes en el destino de los países neocoloniales, que muchas inversiones venezolanas han sido y siguen siendo absorbidas por el capital Rockefeller. Igual sucederá con las inversiones no petroleras de la Creole y, de ese modo, quedará demostrado que es errónea la tesis de la diversificación por la diversificación misma, a pesar de las buenas intenciones. No debemos olvidar que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno.

##### *5. El desarrollo más reciente*

Durante el período que viene de 1958 a nuestros días, se mantiene en su esencia la caracterización del período anterior, continúa el fenómeno de crecimiento paradójico, la condición importadora de la

industrialización, el contraste entre capital invertido y empleo generado y se mantienen vigentes los factores que permiten e impulsan la invasión incontrolada del capital extranjero en la manufactura.

Se desarrolla, sin embargo, una nueva política que acelera ciertos mecanismos de protección industrial, que intenta definir y crear una conciencia de industrialización no existente en las grandes mayorías del país y que mueve, por ello, importantes sectores de la opinión nacional. De igual manera, surge y se institucionaliza la idea de orientar el proceso, de planearlo y de preverlo en relación con la economía en su conjunto, fijándole ciertas metas para períodos prudenciales de cuatro años. Es muy reciente el proceso, muy breve la experiencia y muy conflictiva la vida política del país durante este período como para expresar un juicio tajante sobre el valor de la política industrial, iniciada a partir de 1958. Nos limitaremos, por ello, a comprobar que no han variado, en esencia, aquellas características fundamentales y que sus variaciones y tendencias siguen el esquema de las ideas hasta ahora esbozadas por nosotros.

El crecimiento interanual del sector, a pesar del descalabro sufrido en 1960 y 1961 (consecuencia obligada del colapso de la construcción) recupera hacia 1962 y 1963 su ritmo de crecimiento rápido en sí, pero con un peso en el producto territorial bruto (11,4% y 11,7% para el 62 y 63) que aún no supera los niveles de la década anterior y que, en todo caso, sigue siendo una participación muy pobre frente a otros sectores de la economía. Continúa pues, la paradoja del crecimiento<sup>34</sup>.

La ocupación pasa de 261.000 personas en 1959 a 314.000 en 1963. El incremento ha sido de 53.000 nuevos empleos, que darían un promedio de 13.000 oportunidades por año, o sea, 10% a 11% de la población activa adicional que durante estos años, y en promedio, ha ingresado al mercado de trabajo. En otras palabras, continúa la característica de mucho capital y poco empleo. En este aspecto, se insinúa en los últimos dos años una variación que debemos tomar en cuenta:

se trata de que el capital existente por persona en 1963 desciende un 3,3%, respecto de 1962, lo cual podría tomarse como efecto de la sustitución de importaciones por producción interna y, en cierto modo, como un proceso inverso de incremento de la ocupación en proporción mayor que el del capital existente.

Este fenómeno podría tomarse, superficialmente, como una refutación de las ideas expuestas contra la forma desintegrada de nuestra industrialización, puesto que estaría expresando una tendencia de menos capital y más empleo dentro del mismo esquema de producción caracterizado por nosotros en sentido contrario. La verdad, sin embargo, es que este fenómeno viene precisamente a reforzar nuestras argumentaciones: en primer término, es muy baja la variación si se relaciona con el volumen del proceso sustitutivo; en segundo término es bien probable que la disminución del capital existente por persona se deba a una mayor utilización de la capacidad ociosa, como efecto del crecimiento de la demanda interna, y en tercer lugar es obvio que la sustitución de importaciones, especialmente en el campo de las industrias que procesan materias primas agropecuarias, ha creado un cierto grado de integración entre el sector agrícola y el industrial. La pequeña variación anotada puede ser consecuencia de uno de estos dos últimos factores, o de los dos conjuntamente, con lo cual se demuestra algo por lo demás ya comprobado históricamente en otros países subdesarrollados, o sea, que un proceso de desarrollo autosostenido no puede partir de una estructura cuyos desajustes mantengan separados a los diversos sectores de la economía. El Banco Central, en su informe correspondiente a 1963 interpreta acertadamente la cuestión cuando expresa que:

La incidencia del fenómeno descrito, registrado durante los dos últimos años y favorecido por circunstancias específicas,

hubiera sido mayor de no existir dos hechos que han caracterizado el desarrollo de nuestra producción industrial: uno, la falta de integración del proceso productivo; y otro, el uso de técnicas e instrumentos correspondientes a países de etapas más avanzadas de industrialización<sup>35</sup>.

Es necesario andar con cuidado en la consideración de los dos factores mencionados en el texto. El primero nos conduce a la insoslayable cuestión del cambio estructural como imperativo que no puede ser evadido por una política de desarrollo nacionalista e independiente so pena de caer en el reformismo típico de una economía mediatizada. Este problema ha sido bastante debatido y clarificado entre nosotros y bastaría, para no entretenerse en razonar la necesidad y justificación del cambio estructural, con remitirnos al *Diagnóstico de la Economía Venezolana*, del Colegio de Economistas, así como a los trabajos de los doctores D.F. Maza Zavala, Armando Córdova, Héctor Silva Michelena y Ramón Lozada Aldana, entre otros.

El segundo de los factores mencionados por el Banco Central —el del “efecto demostración” en la técnica, equipo y maquinarias— nos sitúa ante el dilema: ¿Conviene desechar los avances tecnológicos alcanzados en los países más adelantados en función de una política de empleo y adoptar para nuestra industrialización, una técnica que corresponda a la etapa histórica de nuestro desarrollo? ¿Cuáles son, y cómo determinar, tanto la técnica como los instrumentos que corresponderían a la etapa actual de nuestro desarrollo? El planteamiento formulado de este modo parece absurdo: se ha dicho que una de las ventajas del subdesarrollo es que, sin los problemas de sustituir equipos y métodos, puede aprovechar los adelantos ya obtenidos por países cuya industrialización cuenta con una tradición técnica. No se concibe el planteamiento de un desarrollo de segunda o tercera mano, como no sea forzado por la escasez

de capital o, en el caso de los países coloniales, porque su dirección esté en manos de la metrópoli. Ni el primero ni el segundo caso se dan de modo absoluto en Venezuela, aun cuando sean reales ciertos aspectos de escasez financiera para algunas actividades de la producción, así como la existencia de un centro de gravitación capitalista que mediatiza nuestra economía y nuestra política.

Existe la tesis de la “técnica óptima”, que consistiría no en la técnica más avanzada ni en la adopción de una técnica anacrónica, sino en la consecución de una técnica *ad-hoc* que responda a las exigencias del Estado, situación o etapa del desarrollo de determinado país; mas con esto no logramos otra cosa que debatirnos en la arena movediza de las generalidades, acaso muy satisfactorias para el juego mental y hasta útiles como base de especulaciones metódicas en busca de teorías serias, pero que poco ayudan y aun podrían confundir la tarea más práctica y humilde de encontrar soluciones concretas para una política industrial aplicable a través de un ministerio de economía.

Nuestra idea es que mientras resulta adecuado hablar de “efecto demostración” en el nivel del consumo, no pasa de ser una relación imaginativa trasladar el concepto a nivel de producción. En efecto, si bien es cierto que la abundancia de automóviles lujosos y de todos los tipos y modelos en nuestras calles no corresponde, como consumo, a la etapa y al esfuerzo industrial de nuestro país y se constituye en un drenaje de los recursos para el desarrollo, no es menos cierto que el éxito de nuestra industria siderúrgica depende de que, en su concepción y ejecución, se hayan tomado en consideración los últimos avances de la tecnología en los grandes centros siderúrgicos del mundo.

No damos, por tanto, al segundo factor el peso del primero y aún más allá: nos parece que el segundo problema no existe como tal si se resuelve el primero. En otras palabras, si se logra la integración de los sectores, mediante la eliminación de los desajustes de estructura,



el aprovechamiento de la más avanzada tecnología se impone necesariamente. Por ello mismo es bien cierto que, mientras tal integración no se realice, los beneficios de la técnica se distribuirán con la misma desigualdad y desajuste que los de la riqueza. Este razonamiento haciéndolo extensivo a todos los niveles de la técnica nos lleva, todavía en el caso del empleo, a una conclusión más general: dentro de una estructura económica que ofrezca los desajustes de la nuestra, la técnica más avanzada y el equipo más moderno provocan el desempleo (piénsese, por ejemplo, en la evolución de la industria petrolera en los últimos quince años), mientras que el estancamiento de la técnica o su primitivismo, crean el empleo disfrazado o sub-empleo (nuestra agricultura es el mejor ejemplo).

Si en el primer caso el capital fundamental es extranjero y en el segundo es nacional, se hace evidente el hecho de que la dinámica del desajuste opera progresivamente en favor de la inversión extranjera y en detrimento del interés nacional. Si esa inversión extranjera, como en el caso nuestro, viene predominante de Norteamérica, es evidente que la economía venezolana es una rica factoría de Estados Unidos: ¿No somos, pues, una colonia?

En la industria manufacturera se dan los dos niveles, el de la alta tecnología, como el caso de las plantas industriales del área de Valencia y zonas centrales, y el de la técnica bajísima, como es el caso de la artesanía y pequeña industria. Si tomamos la cifra del empleo global en el sector, para 1963, encontramos que de 314.000 personas ocupadas, 100.000 corresponden al campo artesanal. Dada la disparidad de las inversiones entre este sector y el de la grande y mediana industria, podemos afirmar que en la manufactura, como en la agricultura, también tenemos empleo disfrazado o subempleo. Si la inversión extranjera en la manufactura está concentrada totalmente en el primer sector, es decir, en el de más alta productividad, es obvio que también

aquí Venezuela opera como factoría de centros capitalistas foráneos, y es innegable que una política industrial que estimule, por un lado, la inversión extranjera indiscriminada en el sector y, por el otro, el fenómeno de la artesanía como solución al desempleo, sólo está incrementado el subempleo, evadiendo el problema básico y enajenando la soberanía económica de Venezuela<sup>36</sup>.

La inversión extranjera, por su parte, ha aumentado en la manufactura de 1959 a 1963 en una proporción mayor que la del resto de los sectores de la economía. Entre 1961 y 1962 su crecimiento fue el más elevado, incluyendo la inversión petrolera, al pasar de 631,06 (inversión bruta) a 837,32 millones de bolívares, o sea, un crecimiento de 32%. La apreciación de la inversión extranjera, como dijimos anteriormente, debe hacerse a la luz del fenómeno general de esta inversión en su conjunto dentro del país, a fin de poder comprender el grado de su influencia en el sector.

Asimismo, no podemos desprender su consideración de la importación de insumos de industria.

La característica de industrialización importadora se mantiene según se desprende de los datos del período: en 1959, la industria importaba el 65% de sus insumos; en 1963, importaba el 50,1%. Esto indica un progreso en favor de la utilización de insumos propios, pero a un ritmo demasiado lento que nos llevaría más de una década para alcanzar un autoabastecimiento, y ello sólo en caso de que no aumentáramos las instalaciones de envasamiento y de ensamblaje. Todo el progreso obtenido durante el período más reciente sólo nos permite afirmar que tenemos una industrialización mitad nuestra y mitad ajena.

De este modo, la caracterización histórica de nuestro desarrollo industrial nos mueve a la conclusión de que sólo falseando las palabras podemos hablar de una “industrialización nacional” o “propia” y que el sendero por el cual nos han llevado las circunstancias de nuestra

realidad económica y política es equivocado. Seguimos dentro del esquema de una estructura dual caracterizada por un sector precapitalista autóctono de pequeñas economías agrícolas, mercantiles y artesanales y por un sector capitalista predominantemente extranjero dentro del cual, el capitalismo autóctono es escaso y deficientemente industrial, todo lo cual se traduce en un funcionamiento típicamente inestable (en la producción, en la exportación, en los términos de intercambio) y esencialmente subordinado a empresas extranjeras establecidas en el país, a la importación de bienes y servicios y al capital procedente del exterior<sup>37</sup>.

## **Conclusión**

La propaganda oficial y las agencias publicitarias del capital norteamericano realizan costosos esfuerzos para popularizar la tesis errónea del gran desarrollo industrial de Venezuela. Se dice, por ejemplo, que la industria ha subido, en la distribución sectorial del producto territorial, hasta 14%; pero no se advierte que en esa relación está incluida la refinación interna de petróleo, una inversión netamente extranjera cuyos productos pueden ciertamente considerarse como importaciones subsidiadas, debido a que su venta provee de moneda nacional a las empresas petroleras para gastos cuyo financiamiento, de no existir este ingreso, tendría que ser hecho mediante el cambio de dólares en el Banco Central a una rata menor que el cambio libre. La real participación de la manufactura en aquel producto es, a la altura de 1964<sup>38</sup>, de 11,5% lo cual indica que sigue ocupando, respecto a la economía en conjunto, una posición proporcional a la de 1959.

Con el mismo afán de engañar tanto a la opinión interna como a la internacional suelen sumarse la participación de la agricultura (7%) y la

de la manufactura incluida la refinación petrolera (14,1%), para señalar que el 21,1% resultante, comparado con el 27,4% correspondiente al petróleo, indica que la producción interna camina a la igualdad y superación del sector petrolero dentro de la economía nacional. Hay quienes añaden la construcción (4,6%) para lograr la igualdad. Vimos, sin embargo, que un 3% atribuido al sector manufacturero corresponde, en rigor, al petrolero. Pero hay algo más y es que la inversión extranjera en el sector (Bs. 766 millones en 1964) corresponde 70% a capital norteamericano y que la etapa desarrollada hasta hoy es la de sustitución de importaciones de bienes de consumo mediante la importación (1964) de 1.835 millones de bolívares en materias primas y productos intermedios, además de 935 millones de bolívares en maquinaria y equipo.

Añádase a lo anterior el hecho de que los productos que hoy se ensamblan o envasan en el país, importando sus ingredientes y partes, son elaborados por las mismas firmas que antes los mandaban del exterior y las cuales después de las medidas proteccionistas han instalado casas subsidiarias en el país; y aún no concluye aquí la penetración imperialista en la industria porque algo más monstruoso sucede todavía y es que tales subsidiarias se instalan en el país sin que realicen egreso monetario alguno: el procedimiento aplicado es el de acudir, con la garantía de su firma, a los bancos comerciales y a las instituciones de crédito público de Venezuela.

Es así como el dominio extranjero se extiende y consolida en el país sin correr riesgo ni traer capitales. Es así como lo que con tanto orgullo suele llamarse industrialización nacional no es sino un proceso de complementación del colonialismo económico de Estados Unidos sobre Venezuela.

## Un puente made in USA

*Muchas empresas norteamericanas estudian desde hace años las posibilidades que les ofrecería la formación de un mercado común en la América Latina. La General Foods, por ejemplo, ha hecho investigaciones con miras a producir alimentos en conserva para el mercado latinoamericano, por su parte la Allied Chemical ha tomado la iniciativa en un plan para formar una industria mancomunada de fertilizantes. La International Business Machines ha dado un paso significativo con un convenio de complementación industrial en que participarán Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.*

*Los técnicos coinciden en que las industrias petroquímicas y de fertilizantes ofrecen las mejores perspectivas de trabajar mancomunadamente, pues son las que tienen menos intereses creados. Para los próximos diez años se prevé una mejor coordinación de las inversiones en las llamadas industrias básicas: siderúrgica, petroquímica, automotriz e hidroeléctrica.*

*LIFE en español, vol, 29, N° 7, abril 10 de 1967.*

### Manufactura y violencia

Estamos pasando revista a los contextos económicos de la violencia y a pesar de que hemos conservado una vigilancia continua sobre el lenguaje para despojarlo de tecnicismos crípticos y de cargas estadísticas innecesarias no hemos podido evitar, sin embargo, las exigencias científicas mínimas del análisis económico y ello posiblemente ofrezca dificultad a algunos lectores, tal vez a aquellos a quienes con mayor afán deseamos acercarnos.

Es fácil captar la relación entre el problema agrario y la violencia, tanto por la experiencia histórica como por el contraste social que presenta nuestro campesinado con los sectores urbanos perceptores de ingresos. Por cierto que la simpleza mental de algunos sostiene que basta el hecho de que los campesinos estén quietos en sus campos para demostrar que ya en Venezuela cesó el problema agrario y que la reforma cumplió sus objetivos. Jamás ha habido en nuestra historia relación de efecto a causa entre el silencio, la pasividad aparente de los campesinos y el *status* agrario. Los largos silencios de la colonia y de la república vienen sacudidos por explosiones cuya frecuencia se acelera con el ritmo con que la conciencia revolucionaria penetra en las masas rurales. Los gobiernos pueden disminuir ese ritmo reprimiendo esta penetración, sólo que con ese expediente pueden también acelerarlo: la violencia en manos del revolucionario termina dándole la victoria, pero en manos del conservador termina aniquilándolo.

Mas, si la relación es clara en el caso agrario ¿Cómo podríamos vincular el problema desarrollado en el segundo capítulo —“Sucursal Venezuela”— con el tema de la violencia? ¿Qué relación habría entre la capacidad ociosa, la inadecuación tecnológica y la violencia? ¿Es una raíz de violencia la inversión extranjera? Tratemos de responder a estas preguntas como un medio para que el lector pueda explicarse por qué tenemos que seguir explorando los contextos económicos y sociales.

En el capítulo I sobre la cuestión agraria hemos comprobado la existencia de un fenómeno de subempleo en el campo, es decir, que un considerable número de personas en edad de trabajar, lo hacen en actividades marginales (labores ocasionales de artesanía, empleo estacional para limpiar o recolección) que precariamente los mantiene activos y con ingresos generalmente por debajo del nivel de subsistencia. El sector está saturado en cuanto se refiere a la agricultura pre-capitalista; y en

cuanto al subsector más productivo, el capitalista, la tendencia es hacia la mecanización que demanda poca mano de obra, siendo especializada la permanente y siendo la estacional en todo caso inferior al incremento interanual de la oferta de mano de obra. Esto promueve, junto con otros factores, el éxodo rural-urbano que alimenta el cinturón de miseria alrededor de las ciudades más importantes.

Ya dijimos que estas gentes, arrojadas de su medio por un sistema estancado, buscan una salida en otros sectores de la economía y por ello buscan carretera hacia los centros urbanos e industriales.

Dijimos, también, que históricamente los países han resuelto este problema mediante el desarrollo de sus industrias y fuimos a ver cómo estaba respondiendo la industria venezolana al grave problema de un éxodo campesino que, unido al propio crecimiento demográfico de las zonas urbanas, generaba una demanda de trabajo cada año mayor y la cual alcanzó y superó, a partir de 1960, los 100.000 trabajadores adicionales por año.

No hemos revisado toda la industria venezolana, pero sí el subsector más importante y el más desarrollado, el de la industria manufacturera. Y allí hemos comprobado una gran morosidad en la tasa de absorción de mano de obra y hemos visto que, a pesar de la política de sustitución de importaciones y del incremento cuantitativo registrado en los últimos años, el subsector manufacturero, como bien lo dice Cordiplán, “cumple un rol limitado en cuanto a generar nuevos empleos”<sup>39</sup>. Al investigar las causas de este fenómeno hemos encontrado, entre las más notorias, el desajuste tecnológico, la desvinculación o desajuste entre agricultura e industria y la alta propensión importadora del subsector manufacturero que, durante la década 1950-1960, llegó a ser más un capítulo del comercio importador (importación de maquinaria, repuestos, materias primas, productos intermedios y servicios) que de la producción interna.

A estos factores se añade el dominio del capital extranjero, fundamentalmente el norteamericano, sobre las ramas más avanzadas de la manufactura para completar un cuadro de desligamiento raizal que caracteriza el proceso industrial venezolano en su aspecto manufacturero. Ese desligamiento raizal da a nuestra industrialización la imagen de un árbol acostado cuyo follaje y frutos tenemos acá en Venezuela pero cuyas raíces se hunden en el suelo del país que nos abastece con insumos industriales, con tecnología y con capitales.

El hecho de que aquellos frutos terminen de madurar delante de nosotros nos crea la ilusión de que los hemos sembrado, regado y cosechado en suelo propio cuando la verdad es que la actividad de siembra y riego, así como la remuneración de estos trabajos, se hace allá donde están las raíces y se hace con el dinero transferido por la importación de insumos y servicios y por la exportación de utilidades, ya que el cogollo del árbol industrial, que es lo que aquí tenemos, pertenece en su parte más fructífera a capitalistas no residentes en el país.

Y ahora sí podemos responder a las preguntas. Si el lector nos ha seguido, ya tiene las respuestas: la industrialización del país en el campo manufacturero, a pesar de sus progresos y en rigor por la fórmula mediatizada con que éstos se han logrado, no responde al papel que en la solución del problema social le confió la esperanza de la nación venezolana.

Esto significa que por las distorsiones señaladas, agricultura y manufactura (los dos polos de la producción interna) se lanzan una a otra la carga del desempleo sin que puedan absorberla y liquidarla ni la una ni la otra; y como es una carga explosiva que aumenta de peso año tras años, alimentada precisamente por la improductividad de un sector y por la deformación y mediatización del otro, es por lo que sostenemos que aquella improductividad y esta mediatización y desajustes constituyen raíces de violencia.



## Se comprueba la desintegración

La política industrial del Gobierno venezolano, en los documentos donde hace análisis (Cordiplan) ha reconocido las distorsiones internas de la economía que se reflejan en el proceso manufacturero, así como las de éste que se reflejan en el ingreso y por tanto en la demanda. Se ha hablado de un desequilibrio entre los sectores de la economía, desequilibrio que nosotros acabamos de revisar en los capítulos anteriores y que los informes económicos del Banco Central expresan con elocuencia en las cifras y con mucho cuidado en los análisis.

Es muy sencillo comprender por qué una agricultura sometida a la improductividad latifundista no puede servir a una industria cuya tecnología peca por exceso más que por defecto: la continuidad de flujo de las materias primas, el control de calidad, los ajustes entre demanda y oferta, la conservación, distribución y precios, todo ello exige del sector agrícola una organización (campesina y empresarial) que éste no ha logrado, sino en un dinámico pero limitado grupo de cultivadores medianos los cuales abastecen parcialmente la demanda de materias primas, mientras se debaten entre una asistencia técnica precaria, un crédito deficiente y una demanda industrial monopolística, muy influida por capital y gerencia extranjeros, cuya propensión a importar materias primas demuestra una ferocidad que aterra a los funcionarios del Ministerio de Fomento.

No hay, a pesar de la sustitución de importaciones que en el ramo de las materias primas agropecuarias acusa las mayores proporciones, una intercomunicación agroindustrial que nos permita decir que, en ese género de relaciones, hemos roto las cadenas que sujetan la industria a la agricultura de otros países.

Y esa intercomunicación existe menos todavía de la industria hacia la agricultura, pues la demanda industrial de la agricultura está dominada

por renglones de producción foránea: insecticidas, herbicidas, fungicidas, maquinaria, repuestos e implementos medios y hasta menores para el trabajo agrícola.

De este modo, la desintegración establece dos corrientes paralelas de Estados Unidos a Venezuela: una corriente de bienes agrícolas importados para la industria y una corriente de bienes industriales importados para la agricultura. Este cuadro se complica en la realidad con una tercera y poderosa corriente de bienes industriales del exterior al interior, representados por las importaciones de intermedios químicos, petroquímicos y metalmecánicos para el subsector manufacturero de bienes durables.

Esta triple corriente viene pesando cada año más sobre la balanza de pagos y ya vimos que, por importaciones del sector manufacturero solamente, esa corriente extrajo del país, en la década 1950-1959, la suma de 10.250 millones de bolívares. En 1960, la transferencia alcanzó a 1.188 millones de bolívares y en 1964 a 1.835 millones<sup>40</sup>. La agricultura mantiene un ritmo entre 40 y 45 millones de bolívares de bienes intermedios entre 1960 y 1964. Si complementariamente buscamos la relación de pagos al exterior por concepto de remuneración de factores de la producción externos, es decir, pagos de capital y al trabajo (servicios) de no residentes, nos encontramos con que, además de los 2.819 millones de bolívares que en 1965 correspondieron al exterior por el sector petrolero y los 194 por el sector minero, la economía no petrolera ni minera del país pagó al exterior 475 millones de bolívares en los cuales 135 millones corresponden a pagos hechos por el sector manufacturero.

Este es el verdadero sentido del costo de la industrialización en términos de ingreso transferido por desajuste interno y, así mismo, en términos de malestar social por transferencia al exterior de oportunidades de trabajo en el considerable margen inducible de una inversión de 17.580 millones de bolívares en quince años. Si el país hubiera industrializado

la mitad siquiera de esas transferencias, hubiera roto la barrera del subdesarrollo; mas, para hacerlo, habría tenido que romper primero la del latifundio, eliminar el Convenio Comercial con Estados Unidos y subordinar al interés del desarrollo interno el interés de los inversionistas extranjeros y eso, eso equivale a una revolución.

### **Contra desintegración, integración**

Mientras no se construyan los correajes internos que sustituyan a aquellas tres corrientes de demanda intermedia que, por un lado traen bienes para la agricultura y la industria, y por el otro se llevan el ingreso destinado al desarrollo, no habrá desarrollo y el crecimiento tenderá a estancarse y a regresar en la medida en que la fuente que costea la importación intermedia deje de atender a ese financiamiento.

Esta necesidad de integración interna de la economía nacional ha estimulado la promoción e instalación de las industrias básicas del gas natural (petroquímica), del hierro (siderúrgica), del aluminio y de la energía hidroeléctrica. Estamos, actualmente, en un período transitorio en el cual ya se han realizado las inversiones fundamentales para siderúrgica, petroquímica, aluminio y electrificación, pero en el cual faltan todavía las etapas finales a fin de que el subsector básico que ellas forman se ligue operativamente con el subsector manufacturero, que habrá de absorber parcialmente los insumos allá producidos, y con el sector externo de nuestra economía para la colocación de los excedentes en el mercado internacional.

La finalidad de las industrias básicas es, entonces, la de llenar el vacío entre los recursos naturales del país y el proceso manufacturero, rompiendo de este modo la corriente ambivalente de bienes intermedios importados y de transferencia de ingresos al exterior por tales importaciones. Al mismo tiempo, y colateralmente, las industrias básicas,

por la necesidad que tienen de aprovechar las economías de escala, se imponen el objetivo de romper la unilateralidad del comercio exterior venezolano diversificando nuestras exportaciones.

El papel de las industrias básicas, como es fácil comprender, pasa a ser un papel estratégico en el esquema del desarrollo autónomo de la economía venezolana: por un lado se propone integrar el sector manufacturero a las fuentes internas de abastecimiento en el campo complejo de la demanda intermedia y, por el otro, se propone fortalecer el comercio exterior del país aumentando y diversificando las exportaciones, a fin de proporcionar al desarrollo interno un financiamiento más sostenido y menos susceptible de estrangulamientos.

Por ello es por lo que el control de aquella plataforma básica debe estar en mano de la nación venezolana. No puede estar en manos del capital privado del país porque a éste no puede exigírsele inversiones cuantiosas en obras de infraestructura y porque su capacidad financiera es menor que la requerida por industrias cuyo costo total monta a varios miles de millones de dólares. Es el Estado, con la tremenda potencia financiera derivada de la renta petrolera, el que debe realizar las inversiones y controlar las industrias básicas, pues de lo contrario estas caerían bajo el dominio del capital extranjero y entonces, lejos de romper aquella corriente transferidora de riqueza al exterior, estaríamos consolidándola al entregar la explotación de los recursos al mismo capital que antes nos vendía los bienes intermedios: en otras palabras, cambiaríamos de cadenas, pero no de dueño. Y eso es, precisamente, lo que ha pasado en Venezuela, con el agravante de que la entrega se hace cuando ya el Estado ha realizado las obras más costosas, como son las de infraestructura. El capital extranjero, en nombre de una tecnología supuestamente intransferible y de un mercado supuestamente cautivo, viene al aprovechamiento de la etapa menos arriesgada y más productiva de las industrias básicas<sup>41</sup>.

De este modo nos hallamos con la casa invadida y con todas sus salidas tomadas por el enemigo: éste tiene en sus manos, desde hace medio siglo, la industria fundamental (el petróleo), ha penetrado y domina las etapas y renglones más lucrativos del sector manufacturero y, ahora mismo y adelante de nosotros, está tomando posesión de la petroquímica, ya tomó el aluminio y asedia sin tregua la siderúrgica. A esto es lo que hemos denunciado como una monstruosa operación de puertorriqueñización de nuestra economía.

Hemos dicho que contra la desintegración se impone una política de integración interna y autónoma. Desafortunadamente, la política oficial lo ha entendido —forzada por los intereses que la determinan y sostienen— como una integración hacia afuera y a base de empresas “mixtas” con predominio de capital y de administración foráneas. Así se logra escurrir el bulto ante el problema de las desigualdades en la distribución interna del ingreso, marginar y posponer las soluciones internas y de fondo de los desajustes estructurales y ofrecer a la quebrantada esperanza de un pueblo, ya saturado de engaños, una ilusión más: la de que todos sus problemas se resolverán uniendo la debilidad y los desajustes de la economía venezolana con la debilidad de las economías vecinas, cuando la verdad es que sobre tales bases sólo puede construirse una vasta colonia sin problemas aduaneros para que los empresarios norteamericanos aumenten su productividad aprovechando las economías de escala que le proporcionará una integración de satélites subdesarrollados.

Con la entrega de las industrias básicas, Venezuela pasa a constituirse en un puente del capital norteamericano para penetrar el mercado común latinoamericano y convertirse, de este modo, en el gran beneficiario de la Alalc. Se comprende ahora por qué en 1958, el *Informe Rockefeller*<sup>42</sup> sobre la política internacional mencionaba “la experiencia de Puerto Rico” como indicadora de las ventajas que

reporta al capital norteamericano la eliminación de barreras arancelarias, por lo cual debía estimularse un mercado común latinoamericano, idea que respaldó Kennedy al presentar la Alalc ante el Congreso de Estados Unidos, diciendo que la integración traería a las empresas de su país “ampliación de los mercados y mayores oportunidades”. Es esta vasta operación Puerto Rico sobre América Latina la que llevó al presidente Johnson a solicitar del Congreso, antes de la segunda reunión de Punta del Este, la cantidad adicional de 1.500 millones de dólares para apoyar la evolución hacia el mercado común latinoamericano.

Como ni el Convenio de Montevideo, ni las resoluciones posteriores, prevén un tratamiento defensivo frente a la inversión extranjera, es evidente que ésta aprovechará —está aprovechando ya— la situación de puertas abiertas para sacar el mejor partido de la fórmula integracionista propiciada por la Alalc. El texto que sirve de epígrafe a este capítulo es bastante elocuente: Estados Unidos será el gran ganador de una integración hecha a la medida de sus intereses, una integración de colonias en la cual cada país será un puente especializado del capital extranjero para dominar en gran escala un mercado integrado que se cierra para las manufacturas de otros continentes, pero que se abre sin defensa al establecimiento de grandes sucursales norteamericanas. Para esa penetración, Venezuela tiene asignado su papel: será el puente a través del cual grandes consorcios petroquímicos y metalúrgicos de Estados Unidos controlarán el abastecimiento regional. Para satisfacer las formalidades de un nacionalismo sin sentido y sin fuerza, se acude al expediente de las “empresas mixtas” dominadas por el socio extranjero, con tecnología secreta y sin aportes efectivos de capitales (se opera con el crédito internacional del Gobierno venezolano). Tal es, en rigor, *un puente made in USA*.

## Integración hacia adentro

En Venezuela, menos de la tercera parte de la población es perceptora de ingresos: en rigor, sólo la cuarta parte aparece percibiendo ingresos, lo cual quiere decir que 75% de los venezolanos depende del ingreso del 25% restante. Pero dentro de esta reducida porción de perceptores, se notan a simple vista disparidades violentas. Así, 45% de los perceptores reciben 9% del ingreso, mientras que 49% del ingreso se concentra en el 12% de los perceptores. En una forma todavía más gráfica, los cuadros del informe Shoup señalan que 1.850.000 personas que constituyen 88% del total de perceptores reciben la mitad del ingreso total, mientras que sólo 250.000 perceptores, que constituyen el 12% concentran la otra mitad. Al relacionar las disparidades de la distribución personal con los contrastes de la distribución regional entre áreas rurales y urbanas y, dentro de estas últimas, entre áreas de mayor y de menor densidad de población, observaremos que en Caracas, por ejemplo, donde hallamos 17% de los perceptores, se recibe el 40% de ingreso mientras que el otro 60% debe atomizarse entre el 83% restante de los perceptores, con el agravante de que el fenómeno de concentración rige también, y gradualmente, para estos últimos ya que, en el extremo final de la serie, es decir, en las áreas y poblaciones rurales inferiores a los 500 habitantes, en las cuales se disemina y vegeta el 38% de perceptores, sólo tienen acceso al 9% del ingreso<sup>43</sup>.

Hallamos en este módulo de distribución, en el cual se manifiestan las deformaciones tradicionales de nuestra economía, la razón de fondo de la “saturación” del mercado de productos manufactureros y la clave de la “estrechez” de este mercado que no reside, fundamentalmente, en el volumen de la población, sino en la baja escala de perceptores de ingresos y en los agudos contrastes de la distribución de tales ingresos, todo lo cual determina en el organismo económico nacional la formación

patológica de pequeños grupos de concentración de riqueza y de baja propensión a invertir, con la consecuente deformación de la demandas, vicio en el gasto y freno en el desarrollo. El dinamismo regresivo de esta deformación conduce al conocido círculo vicioso del mercado estrecho, tan claramente formulado y denunciado por D. F. Maza Zavala en un breve artículo sobre “las limitaciones del mercado nacional”, donde expresa que, según los teóricos falaces de la insuficiencia, el “mercado es pequeño porque el ingreso es bajo; el ingreso es bajo porque el poder productivo del país es reducido; y el poder productivo es reducido porque el mercado es pequeño”.

Es claro para nosotros que aquellos desajustes en la distribución del ingreso nacional determinan, para el sector manufacturero, la existencia de un mercado efectivo estrecho, muy por debajo de las posibilidades que ofrece la magnitud del ingreso, si su distribución obedeciera a una política de desarrollo equilibrado. El módulo actual de distribución determina, asimismo, la existencia de grandes capas de la población sin capacidad adquisitiva, cuyo consumo descansa sobre el ingreso precario de perceptores marginales en áreas rurales y urbanas.

En Venezuela hay un subconsumo de productos alimenticios, es deficiente la dieta de niños y adultos en las capas de más bajos ingresos y son lamentables las condiciones del vestido y la vivienda para esas mismas capas, que son las más densas de nuestra población y que, al satisfacer deficitariamente los consumos esenciales, a los cuales dedican más de un 70% de sus escuálidos ingreso, no cuentan como consumidores de bienes durables que, aun cuando no sean suntuarios, representan estadios más avanzados de la vida civilizada. Este esquema del consumo suele romperse en la población de bajos ingresos que circunda a las ciudades mayores: aquí los ingresos siguen siendo bajos pero, por el efecto demostración, los gastos presionan sobre las necesidades del consumo esencial (alimento, vestido y vivienda) para dar cabida a aquellos consumos avanzados, que



se tornan suntuarios precisamente porque se realizan dentro de una escala muy baja de ingresos. Tal es el caso de las áreas de ranchos en los centros urbanos, carentes de elementales servicios higiénicos, donde los niños vegetan entre los miasmas, precariamente alimentados y donde los ranchos formados con cartones, tablas y latas ofrecen a la vista del espectador un bosque de antenas de televisión.

Y esta es la gran paradoja de nuestra industrialización: un país donde hay gente con hambre y vastas capas de población mal alimentadas, mal calzadas, mal vestidas y, en general y por ello mismo, mal vividas y mal educadas, presenta un esquema de alta capacidad ociosa en sus industrias tradicionales que son, precisamente, las de alimentos, calzados y vestidos. Y lo que es todavía más paradójico, el desarrollo industrial, detenido en estos esquemas, no puede avanzar porque el mercado está saturado con aquellas producciones. Todo el problema del llamado “estrangulamiento” del sector manufacturero reside en que, dentro del mercado interno, quienes tienen hambre y necesitan vestir y vivir mejor, no tienen cómo adquirir los bienes esenciales; y quienes tienen con qué adquirir los bienes esenciales, ya no los necesitan o los demandan sólo en una proporción mínima en relación con la magnitud de sus ingresos.

Y hemos llegado con esto al punto de divergencia de las soluciones.

La política económica oficial, expuesta por el Ministerio de Fomento en la más reciente convención de exportadores (abril de 1967), ratificada allí mismo por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos y recogida en *Memorias* y otros documentos, es la del reconocimiento de la regresión y del estrangulamiento hacia el cual camina el sector manufacturero; pero no se hace este reconocimiento para formular la política adecuada de corrección de las deformaciones internas que la producen y la cual llevaría —como fórmulas de redistribución del ingreso— a una verdadera reforma agraria que cambie las relaciones de producción en

el campo, sustituyendo las propias del latifundismo por otras más avanzadas que resuelvan la cuestión social agraria e integren las masas rurales torrentes de bienes y servicios mediante un aumento en sus escalas de ingreso; asimismo, y conjuntamente, una reforma tributaria que rompa los contrastes violentos de la distribución, castigue el consumo suntuario, corrija la demanda y estimule la inversión.

La agricultura y la industria —dice Maza Zavala en el trabajo ya citado— produciendo bienes para el mercado interno, absorbiendo recursos y factores nacionales, difundiendo los beneficios de su actividad en toda población, serán los factores del ensanchamiento del mercado, removidos los frenos estructurales que hasta ahora han detenido el crecimiento nacional. Este proceso limitaría la proliferación de servicios estériles, en los cuales se despilfarran el poder productivo y adquisitivo del país, absorbería el desempleo y el subempleo, liquidaría las situaciones monopólicas que convierten al mercado interno en un conjunto de cotos cerrados al arbitrio de la aristocracia pseudo-industrial, educaría al consumidor para el mejor aprovechamiento de su ingreso y crearía las bases sólidas para una sostenida concurrencia al mercado exterior.

Muy por el contrario, la tesis del estrangulamiento y las razones de “mercado estrecho” han servido sólo para motivar y argumentar la necesidad de ingresar a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Una vieja consigna, con la demagogia típica de las consignas, que decía “Venezuela se industrializa o se muere” parece sustituida por otra que sería: “Venezuela exporta o se muere”. Es cierto que Venezuela necesita, como premisa fundamentalmente de su desarrollo aumentar su producción interna, fortalecer los sectores dinámicos internos hasta convertirlos en factores esenciales del crecimiento equilibrado.

Es verdad, también, que para ello se requiere transformar la actual sub-utilización de los recursos básicos en industrias básicas con plena efectividad productiva y de mercado y que esto último —en el caso de la siderúrgica y de la petroquímica— impone a nuestra industrialización exigencias de operación en gran escala que nos obliga a formular y a realizar en la práctica una vasta y audaz política de exportaciones. Es, asimismo, cierto que la organización comercial de grandes áreas en bloques de comercio de defensa común e intereses recíprocos ante entidades nacionales constituyentes obedece a una modalidad histórica contemporánea que no puede ser ignorada por los países latinoamericanos. Todo ello es cierto y plantea a nuestro país la necesidad de tomar una decisión al respecto y de planear su desarrollo atendiendo a las proyecciones futuras de la nueva modalidad del comercio internacional.

Lo que no es cierto es que, en las actuales circunstancias, no haya alternativa interna para el crecimiento. Lo que no es cierto es que no exista, a corto y mediano plazo, posibilidades reales de expansión de la demanda interna de productos industriales, y lo que no es cierto es que el estrangulamiento de nuestra producción manufacturera sea causado por la estrechez de un mercado de escasa población. Hemos visto que en una población cercana a una decena de millones de habitantes, sólo de dos a tres millones son contabilizados como perceptores reales de ingreso y hemos visto que entre ellos y entre las diferentes áreas donde residen se manifiestan desigualdades profundas que perturban el mercado industrial, limitando y deformando la demanda, al mismo tiempo que frenan el desarrollo económico.

Por ello, una política que busque soluciones definitivas no puede basarse en la teoría de las posibilidades del mercado externo como una fórmula para evitar el reto que plantean las deformaciones internas de nuestra economía, porque ello sería como diagnosticar la existencia de células cancerosas dentro de un organismo enfermo y luego

intentar la curación mediante un cambio de clima o, lo que es todavía más dramático e inefectivo, en el caso de América Latina, mediante la transfusión de sangre entre varios enfermos del mismo mal.

Sin predicar la doctrina del aislamiento, sin ignorar con soberbia ni mucho menos desentendernos del proceso de integración económica latinoamericana, sino, al contrario, estando alertas ante él, tomando parte en el debate, intentando las modificaciones que la autonomía del desarrollo independiente hace inevitable dentro del texto de los acuerdos y en la *praxis* del intercambio, la política económica de Venezuela debe dar prioridad a los cambios estructurales internos a los cuales ya hemos referido. Sacar todo el partido que aún es posible de las potencialidades de su mercado interno, asegurar la autonomía y el control de su crecimiento, completar el desarrollo trunco de sus industrias básicas en el más corto plazo y lanzarse al mercado exterior partiendo de un desarrollo equilibrado que evite al país una integración para retroceder y lo prepare a una integración para avanzar, tal es el marco general de política económica que se desprende como conclusión de nuestro análisis.

La integración con mercados similares puede seguir un camino positivo o uno muy negativo según que sigamos o no esta política de cambio interno y desarrollo independiente. Creemos, desafortunadamente, que el no haberla seguido en nuestro país está ocasionando graves daños y perspectivas peligrosas para nuestro crecimiento porque, en lo que atañe al mercado externo y concretamente a la integración de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (Alalc), la ausencia, en su estatuto y resoluciones, de normas precisas que aseguren la defensa del mercado común latinoamericano frente al asalto y la voracidad del gran capital extranjero, así como la presión de ese capital sobre nuestras industrias básicas, está determinando, como hemos visto, fórmulas de inversiones mixtas con predominio de los consorcios extranjeros mediante las cuales, tanto la potencialidad de nuestros recursos como las posibilidades

del mercado común, están siendo penetradas y aprovechadas por capitales norteamericanos.

En pocas palabras, una política económica equivocada nos condena a seguir cargando con los males internos del subdesarrollo; y al buscar afuera el remedio para esos males, y al hacerlo sin una conciencia lúcida acerca de la exigencias y principios del desarrollo independiente, aquella errada política está contribuyendo a ahondar más el conflicto fundamental de nuestro desarrollo y de nuestro destino histórico, el cual no es otro que el de la contradicción entre los intereses de la nación, por un lado, y los intereses del gran capital norteamericano por el otro.

## **Conclusión**

Al analizar la cuestión agraria como contexto de violencia hicimos mención de las rebeliones pre-independentistas en cuya compleja causalidad, el problema de la prioridad y tenencia de la tierra se hacía sentir como uno de los factores más importantes. Pasamos revista, asimismo, a la Guerra de Emancipación, a la Guerra Federal y a la violencia caudillesca en cuyos tormentosos episodios se desangraba e íbase apagando la energía motora de masas inconformes en búsqueda instintiva de una vida mejor.

Esta violencia de contextos feudales, cuyas raíces subsisten todavía, va a recibir la semilla de una violencia generada por nuevos contextos económicos y sociales. Estos son los que acabamos de analizar en el campo industrial manufacturero y básico: no sentimos en ellos, como en el caso agrario, un ligamen directo con la violencia de las clases y sectores afectados ni podemos ilustrar con episodios de relevancia histórica su condición explosiva. Se trata de una situación demasiado reciente en nuestra historia y, desde el punto de vista de nuestro enfoque, sólo es

comprensible como demostración y al mismo tiempo como ingrediente de un conflicto entre los intereses económicos y políticos de la nación venezolana y los intereses también políticos y económicos de Estados Unidos de Norteamérica. El predominio de los segundos sobre los primeros ha venido subordinando, en grado cada vez mayor, la soberanía del desarrollo interno a las decisiones de la metrópoli económica, generándose así una complicada madeja de relaciones de signo colonial con las tensiones, desajustes, presiones, enfrentamientos, vejámenes y frustraciones propias del conflicto entre un país que domina y explota sobre otro que es explotado y dominado.

El hecho de que no haya tierra ocupada por el ejército del más poderoso, sino capitales y gerentes respaldados desde lejos por aquel ejército, hace más humillante y explosiva la situación porque al deseo natural de liberarse que provoca todo género de explotación se añade, en el caso del neocolonialismo, la conciencia de que los amos son de fuera. Y esta conciencia adquiere extremos irritantes cuando los servidores internos de esos amos tratan de cubrir la vergüenza de su entrega con un lenguaje falso en el cual la evocación de los héroes y el uso de las palabras “libertad”, “derecho”, “democracia” y “soberanía” son tan sólo un miserable aspecto del escarnio social y humano en que metieron sus vidas.

Por ello, la violencia anti-imperialista es más avasallante y continua que la violencia feudal. En aquella, el odio de las clases explotadas contra las clases opresoras aparece reforzado por el odio al invasor, y ambos odios han movido durante milenios las palancas de la historia.

Pasemos pues a analizar; en el capítulo siguiente, el contexto fundamental de la violencia imperialista a cuya penetración se debe, no sólo la mediatización de la industria manufacturera y básica, sino la existencia interna de una burguesía parásita y estéril, cuya lucidez progresiva en el servicio al imperio exige necesariamente una lucidez mayor en la conciencia y en la conducta revolucionarias.

## Nuestro señor el petróleo

*Cuando está con su amigo. El Yanqui  
dentro de su gran gozo,  
se le rebotan los labios,  
siente escalofríos de emoción  
se le nubla la vista  
y se siente con deseos de amor*

CAUPOLICÁN OVALLES

*¿Duerme usted, señor Presidente?*

### La gran riqueza ajena

Si imaginamos a Venezuela como una vasta empresa y hacemos un gran inventario de fin de año obtenemos como capital una cifra entre 55.000 y 60.000 millones de bolívares. Si luego investigamos la residencia nacional o extranjera de los dueños de ese capital encontraríamos que más de 200.000 millones de bolívares corresponden a inversiones extranjeras. Esto quiere decir que casi la mitad de aquel inventario no es nuestro y que si pintáramos de blanco lo que es venezolano y de negro lo que es extranjero, lograríamos un país de medio luto, mitad nuestro, mitad ajeno. Veamos esta mitad ajena reflejada en el cuadro siguiente:

LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN VENEZUELA<sup>44</sup>

Sectores	Inversión bruta total %		Inversión proveniente		Utilidad
			de Estados Unidos	Inversión bruta %	
Petróleo	18.020,55	86,86	11.898,39	66,0	3.149
Minería	963	4,64	946,44	98,3	125
Industria	766,16	3,69	529,87	69,2	87
Comercio	569,98	2,75	443,94	77,9	46
Bancos	190,66	0,92	87,28	45,8	7
Servicios	135,91	0,65	116,77	85,9	9
Seguros	59,82	0,29	17,13	29,8	5
Construcción	40,85	0,20	31,54	77,2	-

Fuente: Banco Central de Venezuela, *Informe Económico 1964*.

Cómo es fácil observar no existe actividad económica en Venezuela donde no haya penetrado el capital extranjero y no hay parcialidad de este capital en la cual no domine la inversión norteamericana. La realidad presenta a veces aristas muy duras que en vano se intentan suavizar con eufemismos. Al comentar este cuadro tan sencillo nadie encontrará exagerada la afirmación de que, en su estructura económica, Venezuela en un país colonizado y que, de acuerdo al origen de los capitales, esa colonización es fundamentalmente norteamericana. Venezuela es, pues, una colonia yanqui.

Hay, sin embargo, mucha gente en Venezuela que aún no está satisfecha con esta situación y desea que la parte *made in USA* aumente su proporción. Son los agentes de la inversión extranjera en el país. Tienen partida de nacimiento en Caracas o en los Andes, en el llano



o en los estados orientales y occidentales, pero están al servicio de un país imperialista y cobran muy altos emolumentos por su gestión de intermediarios en la entrega de las riquezas nacionales. Son los representantes de aquella burguesía comercialista, que encontramos a comienzos de siglo, la misma que traspasó las concesiones petroleras a los grandes consorcios internacionales, la misma que, salida del latifundio y anudada con él, se hizo poderosa en el comercio importador y en los negocios financieros, a la sombra de la explotación petrolera y gracias a la mediatización del poder político. En la burguesía parásita y estéril que se organiza y domina en Fedecámaras, en la Cámara de Comercio y en organizaciones ambiguas como la llamada AVI (Asociación Venezolana Independiente) o como la Asociación de Ejecutivos, que no son gremios ni son partidos, pero llenan a cabalidad su papel de grupos de presión.

Estos señores manejan instrumentos de alto poder coactivo y argumentos de impacto psicológico para impedir cualquier intento de regulación o control del capital extranjero y para desalentar cualquier reforma impositiva que afecte las ganancias de dicho capital. Tienen representantes en el Congreso, presionan y logran el nombramiento de candidatos salidos de su seno para desempeñar funciones públicas relacionadas con la actividad económica. Tienen ministros en el gabinete ejecutivo y mantienen perfectamente lubricada una compleja red de soborno y de chantaje con la cual conducen, en provecho propio, los hilos de la administración pública y las alternativas de la política económica.

Ello explica por qué, cada vez que se olfatea alguna iniciativa reformista que roce los intereses de esta oligarquía intermedia, o los del capital extranjero del cual depende, observamos en la gran prensa la inmediata y amenazante reacción de una compañía nutrida por declaraciones, rumores, notas, artículos y conferencias que hablan de “pánico”, de “incertidumbre” y de “huída” del capital extranjero. Generalmente

esta campaña se complementa con anuncios de las compañías petroleras sobre disminución de inversiones y baja de precios del petróleo. Estas mismas empresas acentúan el ritmo de desempleo, y desde Washington parte la amenaza de “restricciones” a la compra de petróleo venezolano. El Gobierno se asusta, desmiente rumores, archiva los tímidos proyectos de reformas y todo continúa inquebrantable en este paraíso de la inversión extranjera.

Max Freedman, un periodista norteamericano, al referirse a los nueve artículos —café, algodón, petróleo, cobre, carne, azúcar, lana, hierro y bananos— que forman 70% de las exportaciones latinoamericanas observa lo fácil y corriente que es, para los pequeños grupos que controlan tales productos, obtener la mayor concentración de poder político: “controlando la industria dominante —dice— se obtiene una posición de supremo poder político en el Estado”, si ese pequeño grupo es extranjero —como es el caso general en América Latina— aquella suma de poder político reposa en manos foráneas. En Venezuela tales manos tienen nombre propio, son las manos de la Standard Oil, cuya traducción personal es la firma Rockefeller.

En el capítulo anterior vimos cómo Rockefeller ha extendido sus inversiones más allá del sector petrolero, hasta la agricultura y la industria, lo cual constituye un fenómeno típico de la inversión extranjera que, partiendo del sector fundamental desde el cual domina, va extendiendo sus tentáculos, penetrando otras esferas de la actividad económica y creando una compleja e inextricable red sobre la cual se superpone una sociedad cuyas instituciones nacen y se desarrollan mediatizadas por los intereses de ese gran capital dominante.

En Venezuela, los partidos políticos —aún los de centro izquierda— reflejan esta dependencia. La reflejan, asimismo, las instituciones oficiales y burgueses de la cultura. Hay una pintura, una literatura, una arquitectura mediatizadas. Hay una capa de intelectuales directa

e indirectamente al servicio de aquella estructura neocolonial en cuya cúspide social una legión de burócratas, de comerciantes importadores, de clérigos y de militantes se afanan por asegurar una paz imperialista mientras van acumulando sus mendrugos.

### **Nuestro señor el petróleo**

El petróleo constituye 87% de la inversión extranjera en el país, 93% del valor total de las exportaciones, 85% de las divisas que ingresan anualmente y las dos terceras partes de los ingresos fiscales ordinarios. Basta una disminución de las inversiones anuales de las compañías petroleras, o una baja en los precios del mercado internacional o una restricción de la demanda en el principal mercado comprador para que en el interior de Venezuela se genere y propague una onda depresiva cuya intensidad y duración dependen de la duración e intensidad del movimiento externo que la provocó.

En otras palabras, el destino de todo el país depende de la aventura económica de un producto y cómo ese producto es explotado por capitales extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, y está subordinado a sus decisiones.

Esta realidad es la clave de la situación venezolana y subyace en el fondo de nuestro drama político y social. Un país cuyo destino no le pertenece porque está en manos ajenas, un país enajenado, una prolongación periférica de otra economía más poderosa, una sociedad con las contradicciones, frustraciones, miserias y odios, una sociedad colonial. Una sociedad, también, para quien la violencia puede plantearse como alternativa válida, como liberación.

En Venezuela el petróleo está en todas partes y, como Proteo, puede encarnar en mil formas diferentes. Su presencia directa la hallamos en los indicadores económicos en los cuales predomina, según hemos

visto. En los vastos programas de obras públicas está la generosidad del ingreso petrolero. Caracas pasó de ciudad colonial a metrópoli moderna en menos de veinte años; la autopista Caracas-La Guaira pasa por ser una de las vías más espectaculares y costosas del mundo; la televisión llega a las ciudades de segunda y tercera categoría y los automóviles más lujosos de América y Europa forman largas colas en las avenidas de la ciudad. Más del 60% de las importaciones de bienes de consumo que, por un valor de 1.216 millones de bolívares, se hicieron en 1964 constituyen importaciones de lujo imprescindibles para una sociedad que aún no ha conquistado los estadios avanzados de la producción de bienes y servicios. Los usufructuarios de este consumo superfluo constituyen una minoría privilegiada dentro de la población venezolana, y ya sabemos porqué: mientras que sólo 1,5% de la población activa devenga salarios petroleros, más del 30% de esa misma población se mantiene en el límite de la subsistencia rural. En las escalas intermedias, el 10% devenga salarios de una industria altamente mecanizada que importa más de la mitad de sus materias primas e insumos, el 7% trabaja circunstancialmente en obras de construcción mientras que el 44% se ubica en el comercio, los transportes y la burocracia: es, pues, una estructura de campamento minero en la cual vegetan núcleos de población parasitaria a expensas de una renta cuyo mantenimiento exige el sacrificio y agotamiento cada día mayor de una riqueza que no puede reponerse.

Las vanguardias del pensamiento económico y político han expresado en variadas maneras y estilos esta convivencia de la riqueza y la miseria en una Venezuela colonizada por el capital extranjero. Durante años el tema petrolero estuvo reservado a los técnicos de las compañías extranjeras y a los funcionarios públicos a su servicio.

Hace treinta años nadie penetraba en el cerco misterioso hábilmente tendido alrededor de la explotación de los hidrocarburos y apenas

algunos políticos de izquierda, guiados más por su intuición que por su conocimiento, se atrevían a dirigir sus enfoques sobre el tabú petrolero. Rómulo Betancourt, uno de esos políticos, llegó a escribir más adelante en el exilio uno de los ensayos más completos y desorganizados sobre el tema, descubriendo terribles verdades que fueron convenientemente relegadas al olvido una vez en el poder. Juan Pablo Pérez Alfonzo es otro de estos pioneros: llegó a construirse un prestigio nacionalista por su tenacidad en el ataque a la explotación imperialista del petróleo, haciendo gala de un radicalismo nacionalista que subrayó su actuación cuando, en el Congreso de Isaías Medina Angarita, elaboró una prolija demostración de que las ventajas de la Ley de Hidrocarburos de 1943 eran secundarias frente al dominio todavía mayor que se aseguraba a los capitales explotadores. Cuando ese hombre tiene ocasión —y la ha tenido dos veces— de poner en práctica sus ideas nacionalistas desde el poder, atempera entonces aquel radicalismo: de 1945 a 1948 no se toca la Ley que fuera refutada en el Congreso, limitándose, por toda política, a no otorgar concesiones petroleras cosa que, por lo demás, no estaban solicitando las compañías, ni lo necesitaban en un período en que acababan de reconvertir las ya obtenidas mediante una fórmula de borrón y cuenta nueva. Y de 1959 en adelante, cuando nuevamente regresa Pérez Alfonzo a participar en el poder público, reconoce que el petróleo sigue siendo el problema clave del país y que continúa en pie la necesidad de su control nacional

pero —nos dice en 1961— la economía venezolana tiene por base el petróleo y de él depende. Una disminución sensible de las entradas que recibe el país por la explotación de este producto, provocaría una cadena de reacciones capaces de suscitar una crisis económica y social<sup>45</sup>.

Es necesario, por tanto, que la acción nacionalista no pierda de vista este hecho. Se impone, pues, la moderación y la prudencia. Prudencia y moderación que, en política petrolera, significan conservación esencial del *Status quo* y reformismo hasta donde no se rompa la paciencia de quienes dominan los asuntos de nuestro señor el petróleo.

De este modo, se crea —para satisfacer una promesa electoral— la Corporación Venezolana del Petróleo, una empresa nacional que despierte de inmediato la esperanza y el entusiasmo de los sectores nacionalistas y, como es lógico, la reacción adversa de las compañías del petróleo. Antes, en una acción audaz del Gobierno provisional que se instaura a la caída de Pérez Jiménez, se ha lanzado un decreto que aumente la participación del Estado venezolano en las utilidades de las compañías y, ahora, conjuntamente con la empresa nacional se anuncia, como política definitiva, la eliminación de la política de concesiones. Se inicia, así, un camino que de ser mantenido y continuado, constituirá una sabia alternativa hacia el control del recurso fundamental de nuestra economía, es decir, hacia el control de nuestro destino nacional.

Pero basta que las empresas extranjeras, en una maniobra descarada, disminuyan sus inversiones internas, manipulen con los precios controlados por ellas mismas en el mercado internacional y presionen a través de la oligarquía comercial y financiera por ellas alimentada y enriquecida, para que el inestable Gobierno de la “burguesía nacional” ceda y en vez de decidirse a una grande y definitiva batalla apoyándose en las masas populares, decida estrangular las posibilidades de la empresa nacional convirtiéndola en un juguete inofensivo que merece la aprobación de los jefes de relaciones públicas de las compañías petroleras<sup>46</sup>. Así mismo, se prescinde de reformas impositivas que afecten la utilidad de los consorcios y se acuña un término —“contratos de servicios”— para sustituir el ya proscrito de “concesiones”, Rómulo Betancourt cobra los dividendos políticos: se mantiene cinco años en el poder y se jacta de

ello atribuyéndolo a las virtudes de una democracia que no funcionó en la realidad de su mandato. La verdad es que su “hazaña” es el fruto de una negación de los principios e ideas con que ganó los votos que lo llevaron al poder y aquellos cinco años, bañados con sangre de estudiantes, de obreros y de campesinos, son el precio de una traición del pueblo a expensas de la soberanía económica de Venezuela. Pérez Alfonzo, como epílogo de aquella moderación y aquella prudencia, se retiró a la paz de su casa solariega para seguir elaborando estadísticas y asesorando a un Gobierno que, en el período presente, ha pactado ya con la burguesía intermediaria y elabora una política petrolera adecuada a tales circunstancias.

El “tecnicismo” en las interpretaciones del fenómeno petrolero ha sido un recurso bastante efectivo para evitar que el tema se convierta en materia de discusión diaria y de preocupación por parte del venezolano corriente. El “experto” petrolero es, generalmente, un ingeniero bien remunerado por las compañías extranjeras, el cual suele sonreír ante la ingenuidad nacionalista de los políticos de izquierda, o bien es un funcionario público “moderado y prudente” que piensa en su carrera futura y guarda un silencio técnico ante los manejos de las compañías. Durante varias décadas, las empresas extranjeras han venido formando y aprovechando a un vasto núcleo de profesionales, muchos de los cuales van perdiendo el acento de la lengua castellana y ascienden a posiciones directivas desde las cuales emplean su talento “criollo” y su partida de nacimiento venezolano en servir con eficiencia los intereses extranjeros en su tierra. Las compañías se hacen representar por ellos en las organizaciones gremiales, y a tanto llega su confianza en los más destacados, que se vale de estos nativos cada vez que deciden maniobrar para engatusar al gobierno local.

El petróleo, que así determina diversas formas del ser social, subyace también en el muñón de todas las ideologías cuya escala parte de los

servidores incondicionales del capitalismo extranjero hasta el extremo opuesto de los partidarios de la nacionalización violenta de la industria petrolera. Héctor Malavé Mata, un investigador universitario que ha penetrado algunos secretos del laberinto petrolero, ha dedicado un ensayo al análisis del drama de las contradicciones internas generadas por la incrustación del capitalismo extranjero en nuestra economía. Personajes de ese drama son

dos sectores de antinomia, irreductible, perfectamente definido y mutuamente excluyente. Uno, con caracteres propios, que conoce los riesgos de la penuria degradante y la mortificación de la miseria. Otro, sin originalidad, amurallando entre los privilegios que le otorga el poder político, con riqueza que por cuantiosa es socialmente mezquina.

Y precisando la raíz ideológica de este segundo sector, Malavé Mata dice:

La penetración neocolonialista en Venezuela no se limita solamente a la extracción y el beneficio de los recursos primarios, sino que determina también las prácticas institucionales sobre la misma contextura del Estado o sobre los sectores básicos de la economía nacional, al mismo tiempo que la alta burguesía, en colaboración con los inversionistas extranjeros, moviliza el elenco teórico de su liberalismo<sup>47</sup>.

La Universidad Central de Venezuela ha roto el tabú petrolero y un grupo de profesores e investigadores —D.F Maza Zavala, Malavé Mata (ya citado), Pedro Esteban Mejías, Armando Córdova, Francisco Mieres, entre otros— han venido analizando con seriedad científica el problema de la explotación petrolera en Venezuela. En sus estudios, que requieren una mayor divulgación, han puesto al descubierto los mecanismos de la evasión fiscal que un lustro (1959-63) alcanza la suma



de 5.099 millones de bolívares, la transferencia de plusvalía al exterior que, en igual período, sobrepasa los 15.000 millones de bolívares; y han señalado la contradicción básica del sistema capitalista extranjero con el interés interno de la economía venezolana y la cual consiste en que, a mayor avance tecnológico en la industria petrolera corresponde una mayor productividad, todo lo cual se refleja en menores ingresos fiscales por unidad producida, en menores inversiones por unidad adicional extraída y en menor nivel de empleo para una producción cada vez mayor. Es decir, todo avance de la industria petrolera, dado el origen extranjero de los capitales, se traduce en un mayor excedente económico que se transfiere al exterior y en menor ingreso al interior, ya por la vía fiscal, ya por la vía directa de la inversión interna<sup>48</sup>.

Sobre esta contradicción fundamental se afirma el ramaje de una crisis que, siendo estructural en su base, se acentúa o se aleja, según las circunstancias de la coyuntura económica, pero sin desaparecer porque, en su raíz, se mantienen activos los factores de la deformación estructural que la ha engendrado.

Los ideológicos de la burguesía comercialista y financiera asociada al capital petrolero sostienen la tesis ambigua de que la mejor política de hidrocarburos es aquella que mayor suma de beneficios produce al país. Para concretar su tesis parten de la falacia de que el petróleo es una mercancía de libre competencia en el mercado internacional<sup>49</sup> y que el éxito de toda explotación y venta depende del esquema competitivo de los costos, de las garantías que se ofrezcan a la inversión y de la menor cantidad de obstáculos que el Estado interponga en el negocio. De esta manera el petróleo puede concurrir con ventajas frente a sus rivales, puede imponerse en el mercado y reflejar tal éxito en los ingresos fiscales que el Estado, según aquella tesis, se convierte en un socio afortunado.

El Estado venezolano debe limitarse, por tanto, a percibir la renta petrolera, a tratar de que esa renta sea mayor sin quebrantar la libre

empresa y, finalmente, a administrar esos ingresos para el desarrollo de los sectores restantes de la economía.

La idea, muy hábilmente expresada, es la de que si la política de concesiones es desechada, debe sustituirse por otra que garantice al país un ingreso mayor o al menos igual al garantizado por el sistema de concesiones, todo ello en términos de corto plazo.

Esta tesis, y la presión ejercida para su aceptación, ha comenzado por romper aquella plataforma nacionalista iniciada hacia 1960 y ha llegado hasta imponer la fórmula sustitutiva del régimen de concesiones que deje, sin embargo, todo igual que antes: las compañías con la seguridad de seguir en el negocio hasta su agotamiento, el Gobierno con un ingreso fiscal que le garantice presupuestos cada vez más altos y a la medida de sus intereses electorales y la alta burguesía segura de que bajo el rubro de partidas para el desarrollo económico, continuará usufructuando los privilegios que le garantiza un poder político modelado según la medida de sus intereses de clase.

Juan Pablo Pérez Alfonzo sigue de asesor: su moderación y prudencia se ha limitado a pedir que los expendios de productos refinados en el país sean administrados por la empresa nacional de petróleo en un porcentaje moderado. El Gobierno lo decretó así, pero ni esto conceden de buena manera las compañías petroleras, al parecer no dispuestas a que la Corporación Venezolana de Petróleo prospere ni siquiera como una simple distribuidora de productos.

El petróleo se desliza también en la educación hasta dominar en algunas de sus esferas e influir en la política general educativa del país, no sólo porque existen numerosas escuelas primarias creadas y subvencionadas por las compañías, ni porque en las ciudades proliferan los institutos venezolano-americanos adonde la burguesía envía sus hijos, sino porque en el presupuesto de propaganda de las compañías se incluyen generosas partidas para colegios, universidades e instituciones

culturales, así como para el financiamiento de investigaciones, becas para cursar estudios en institutos norteamericanos, filmación de documentales de interés científico o turístico, fundaciones culturales y científicas, mesas redondas, seminarios, conferencias, ediciones, programas radiales y televisados, formas que sirven todas a un objetivo preciso: penetrar en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en las instituciones de la cultura, en los hogares, en la conciencia y en la mente de los venezolanos sobre los cuales, día y noche, se ejerce el influjo de las más sutiles técnicas que la propaganda psicológica ha logrado crear para convencer, adormecer o neutralizar a una sociedad colonizada.

Veamos, ligeramente, algunos datos que fueron tomados del Plan del Servicios de Información de Estados Unidos (USIS) para 1964 y publicados por Federico Álvarez en la edición del 7 de marzo de 1964 en el seminario “Qué pasa en Venezuela”:

los programas radiales del USIS se transmiten gratuitamente por 80 de las 90 estaciones de Venezuela, un promedio de 2 horas y media al día en cada estación (200 horas al día); 50 noticieros y documentales del USIS son televisados cada mes en la TV venezolana; se publica el material periodístico anónimo en cada diario importante; las películas de USIS utilizadas por la mayor cadena de cine alcanzan una audiencia estimada en 250.000 personas.

Y ya sabemos que USIS es una agencia aparentemente independiente de las compañías que extraen petróleo, aunque atada a ellas por hilos subterráneos que todos intuyen. Añádase, pues, a estas actividades las de los que forman la “gran prensa” en Venezuela que se atreve a dar cabida en sus páginas a informaciones que pongan al desnudo la verdad de la explotación petrolera porque ello equivaldría a un suicidio: no sólo por los anuncios directos de las compañías petroleras, sino porque las empresas publicitarias que distribuyen las cuentas de propagandas del gran comercio están controladas y sometidas a la esfera del capital extranjero.

Y por si fuera poco, las propias redacciones de los periódicos han sido invadidas por profesionales del periodismo que perciben regalos y remuneraciones fijas de los departamentos de relaciones públicas de las compañías y del Gobierno.

Recientemente se ha suscitado un debate público sobre el *vasallaje intelectual* (conciencia vasalla) en Venezuela. Desde diversos ángulos se enfocó el problema de una cultura subordinada a centros de gravitación externos, el problema de la penetración de entidades científicas y literarias por el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) y la mediación de la libertad de expresión debido a la influencia determinante de la “gran prensa” y de los poderes (oligopolio publicitario, empresas petroleras, militarismo, etc.) que la rige.

El intelectual se debate entre los tentáculos del oficialismo cuyas instituciones de cultura aspiran a comprar talento barato (y lo consiguen) para labores de apariencia estética pero de fondo propagandístico, y los tentáculos no menos ávidos del gran capital dispuesto a pagar mejor el alquiler intelectual y la adaptación de la conciencia. Son muy pocos los que resisten y de ellos proviene una literatura y un arte de protesta y denuncia y grito desesperado cuya violencia individualísima no asusta a la burguesía porque no la ve traducirse en acción, pero cuyo testimonio —debilitado, golpeado, acorralado, pero jamás aniquilado— es una de las vertientes más elevadas, dolorosas y solitarias de la inconformidad, de la rebeldía y de la esperanza.

No se detiene en el ámbito económico, político y cultural la penetración del sistema capitalista extranjero, sino que para ejercer mejor su influencia sobre ellos, ese capital utiliza dos grupos de poder que han gravitado decisivamente en la historia política de América Latina: la iglesia y el ejército.

En un seminario sobre “Relaciones Humanas” con cuyos materiales se editó posteriormente un libro, Monseñor Lizardi, una representación

del clero venezolano y universal señaló, con un cinismo de prelado renacentista, que las buenas relaciones entre iglesia y empresas petroleras resultarían de altísima utilidad por cuanto aquella institución “disponía de recursos de comunicación y de convencimiento que no eran comunes a otras entidades”.

En cuanto al plano militar, dada la identificación de los intereses económicos de la industria petrolera con el Gobierno de su país de origen, no es difícil hallar concatenación y armonía entre tales intereses en Venezuela y el papel cada día más activo y descubierto de la misión militar de Estados Unidos en la patria de Bolívar.

El petróleo, como Dios, está en todas partes al mismo tiempo aun cuando, a veces, no se le pueda ver o adquiriera, como Proteo, mil formas diferentes para desconcertar y aniquilar a quienes osen atravesarse en su camino. Venezuela vive bajo la tiranía de ese Dios cuyos sacerdotes mascan chicle, fuman pipa y distribuyen premios y castigos entre los nativos que se sometan a su culto o que se atrevan a desafiarlo. Venezuela es el paraíso de la inversión extranjera, la tierra de nuestro señor el petróleo. Venezuela es una colonia yanqui.

## Situación de la burguesía

*La burguesía nacional describe como misión histórica la de servir de intermediario.*

*Como se ve, no se trata de una vocación de transformar a la nación, sino prosaicamente de servir de correa de transmisión a un capitalismo reducido al camuflaje y que se cubre ahora con la máscara neocolonialista. La burguesía nacional va a complacerse, sin complejos y muy digna, con el papel de agente de negocios de la burguesía occidental. Ese papel lucrativo, esa función de pequeño gananciero, esa estrechez de visión, esa ausencia de ambición simbolizan la incapacidad de la burguesía nacional para cumplir su papel histórico de burguesía.*

FRANTZ FANON

*Los condenados de la tierra*

### La burguesía estéril

Aquella burguesía comercial que surge y convive con el lector latifundista a lo largo del siglo XIX, que se eleva en importancia y se asocia con el capital europeo bajo el régimen autocrático y civilizador de Guzmán Blanco y que entra en conflicto con el feudalismo improductivo hacia fines del XIX y comienzos del XX, según lo hemos visto en el capítulo I de este ensayo, va a recibir del sector petrolero un impulso decisivo y, en menos de dos décadas, se va a transformar de una clase sujeta a la suerte de las exportaciones de café, cacao y cueros en un poderoso sector comercial y financiero, el cual va a servir de intermediario entre los grandes exportadores de manufacturas

de los países avanzados y los receptores internos del ingreso petrolero. A través de ellos se escapan al exterior los residuos que bajo forma de impuestos y de gastos directos va dejando en el país la explotación de los hidrocarburos: lo que no se va como ganancia (transferencia directa) de las compañías hacia sus casas matrices, se va por el desaguadero de un comercio que importa desde los consumos más imprescindibles (alimentos, medicinas, vestidos) hasta los más superfluos y lujosos (bebidas, joyas, perfumes, automóviles). El mecanismo es sencillo como corresponde a una economía colonial: las empresas extranjeras traen dólares para costear los impuestos y los servicios requeridos por la extracción del petróleo, la minoría perceptora de estos ingresos, a su vez, vuelca su nuevo poder adquisitivo en todo género de consumos, servidos por un comercio que, de este modo, transfiere riqueza al exterior y acumula capitales en el sector.

Es un círculo continuo, cerrado, vicioso. Es el círculo de la riqueza y del poder económico concentrados. Los ahorros acumulados en este círculo no van a la agricultura, muy al contrario, los excedentes precarios de esa agricultura, que sigue siendo feudal, convergen también a ese círculo que los emplea en su propio fortalecimiento y en el refinamiento de sus consumos lujosos.

Una oligarquía de comerciantes y de banqueros va entonces prosperando y acumulando un poderío económico que se traduce en poderío político y que se refleja en la vida institucional. No es una clase creadora de riqueza como históricamente fue la burguesía en las primeras etapas del capitalismo. Esta clase no imita el capitalismo en Venezuela, es sencillamente la proyección colonial de un sistema capitalista foráneo más avanzado. Su papel es el de un agente de ese capitalismo, su función es intermediaria y su poder económico es derivado de otro fundamental y mayor. Sus ingresos no provienen de una combinación arriesgada de factores de producción, sino de una comisión: la comisión del

intermediario que compra afuera y vende adentro. No es, pues, una burguesía productora sino una burguesía estéril.

La ideología de esta clase refleja necesariamente su ser social.

Es la ideología que, dentro de una economía colonialista, conviene a los intereses de la clase asociada al sistema capitalista extranjero. Es la proyección ideológica de este sistema que va encarnando en leyes, instituciones, doctrinas, hábitos y en formas múltiples de la vida política, social y cultural del país colonizado.

La burguesía estéril tiene una institución que la representa con toda su ortodoxia ideológica: se trata de la Cámara de Comercio de Caracas, fundada hace cien años y organizada hoy con asesores experimentados e inteligentes que defienden y tratan de imponer con agresividad su peculiar concepción del liberalismo económico y del papel del Estado frente a la empresa privada. Hacer la historia de la Cámara de Comercio de Caracas es hacer la historia de la burguesía estéril, una historia llena de oscuros pasadizos, de tortuosos caminos y de hábiles maniobras, con su parte jugada en los episodios decisivos de un siglo de historia económica y política.

Presididas por este organismo, un conjunto de instituciones similares de todo el país presentó, en una asamblea de organismos empresariales, celebrada en Mérida en 1962, una compilación de sus ideas conocida hoy como *Carta Económica de Mérida* cuya elaboración ofrece un sentido ambivalente de estudio económico, manifiesto filosófico y programa de gobierno.

El documento hace un diagnóstico veraz de la situación económica del país caracterizándola con los siguientes rasgos: existencia de niveles ínfimos de vida para la mitad de la población, bajas condiciones sanitarias, bajísimo nivel educativo y acumulación de un fenómeno de desempleo progresivo. Constata, asimismo, el documento que, para aquella fecha (1962), hay una comprobada reducción de la inversión



nacional privada y pública y de la inversión extranjera, así como una reducción de las reservas internacionales y el problema de un presupuesto público deficitario.

Al pasar del diagnóstico a las soluciones, se pierde la objetividad del enfoque y entra a funcionar el interés primordial de clase. En efecto, se plantea la necesidad de borrar los desequilibrios intersectoriales de la economía (el contraste de productividad y empleo que vemos entre agricultura, industria y petróleo, Caps. I y II) y la necesidad de lograr un desarrollo integral (tesis de la diversificación) que rompa el carácter monoprodutor de la economía nacional. ¿Cómo lograr tales y tan sensatos objetivos? La solución fundamental —dice la carta— hay que buscarla en el aumento de la producción y no en la redistribución de la riqueza porque, en Venezuela, no existe una exagerada concentración de la riqueza. El lector que nos haya seguido a través de los capítulos anteriores o que esté familiarizado con el mecanismo de la formación del ingreso y su distribución, habrá captado de inmediato la falacia que se encierra en esta afirmación. Basta recordar la concentración de la propiedad territorial frente a la existencia de grandes masas depauperadas en zonas rurales y urbanas; la productividad del sector agrícola y artesanal, el mecanismo triangular del gasto público en provecho del ingreso nacional sin preocuparse de su redistribución (tesis de la productividad económica sobre la productividad social) y tendríamos una dinámica hacia el equilibrio, según la cual, a mayor producción, menor desequilibrio. La historia económica del siglo XX venezolano demuestra, sin embargo, lo contrario: a medida que la producción ha venido alcanzando magnitudes considerables, los desajustes de la estructura económica se han venido acentuando hasta provocar el estallido de manifestaciones sociales y políticas —léase violencia— que ponen de relieve una crisis profunda en cuyo fondo fermenta la desigualdad en la distribución de la riqueza.

Pero esta verdad tiene que ser negada por quienes deben su ser social precisamente a la existencia, conservación y prosperidad de aquellas desigualdades. Es a esta clase y al sector del capital extranjero monopolista a quienes interesa que aumente la riqueza sin que se mejore una distribución que ha sido adaptada a sus intereses.

Aquí es evidente que la clase dominante y explotadora confunde e identifica el interés general del país con sus intereses de clase.

La tesis de la no intervención del Estado en la economía privada y la defensa ardiente de la libertad de iniciativa y de empresa constituyen puntos básicos de la ideología de la burguesía estéril. La aparente contradicción entre estas ideas, las prácticas monopolísticas a que dicha clase se dedica y su constante presión sobre el Gobierno para lograr créditos y medidas en provecho suyo, tiene una sencilla explicación: como esta clase identifica el interés nacional con su particular interés, considera natural que el Estado se limite a la salvaguardia y al incremento de esos intereses. De este modo, la intervención del Estado es negativa cuando tiende a limitar los privilegios de la burguesía comercialista y financiera, pero es positiva, y se presiona fuertemente para obtenerla, cuando se trata de créditos, subsidios, exoneraciones y, en general, medidas y leyes que protejan y estimulen a esa misma burguesía.

Esto explica la oposición cerrada frente al control público de las industrias básicas, las presiones ejercidas sobre los poderes públicos para evitar reformas impositivas, regulaciones de alquileres de precios, de inversiones extranjeras, de importaciones, etc., etc. Igualmente, ello explica las presiones ejercidas para que el Gobierno consulte con los organismos de la burguesía cualquier proyecto de ley o reforma económica antes de ponerla en vigencia<sup>50</sup>. Por intermedio de estos organismos gremiales, las empresas extranjeras intervienen en la formulación de la política económica, y como tales empresas dominan el panorama económico del país, no es exagerado concluir que el capital extranjero

conduce la política económica oficial. Tal es, objetiva y crudamente hablando, la lucrativa y despreciable misión que en Venezuela cumple la burguesía comercialista y financiera, una clase estéril y traidora.

### **La burguesía productora**

El pueblo se muestra, con razón, escéptico ante la tesis de una “burguesía mala” y una “burguesía buena”. Tal escepticismo es producto de siglo y medio de frustraciones, aventuradas en los últimos cuarenta años de formación de una oligarquía del dinero, madrinera del capital extranjero y apadrinadora de una “democracia formal” cortada a la medida de sus intereses. La intuición popular cubre con la denominación de “ricos” a toda esa vasta fauna del poder económico, desde el terrateniente tradicional hasta el comerciante importador, conjuntamente con el banquero viejo, el banquero nuevo, el industrial antiguo, el gerente moderno, el monopolista, el traficante de bienes raíces y el inversionista que especula en la bolsa de valores.

Hay, sin embargo, una burguesía llamada con cierto optimismo “burguesía nacionalista” constituida por un grupo cada día más numeroso de empresarios nuevos que, dentro de la agricultura y de la industria, están dedicados a la producción interna de bienes materiales. Son los agricultores capitalistas y los industriales manufactureros. Su aparición es de reciente data y sólo puede estudiarse como un fenómeno de posguerra, aún en plena evolución y sin una fisonomía definitiva y precisa.

Es necesario tener presente este hecho a fin de no caer en apreciaciones subjetivas ni en la fácil ilusión de una burguesía revolucionaria conscientemente dispuesta a realizar sacrificios o correr riesgos en función de un cambio nacionalista que le dé la rectoría del poder económico. Esta burguesía convive en conflicto con la burguesía importadora,

ese conflicto es involuntario y refleja en sus episodios la contradicción básica de dos sectores: el de la producción interna para el mercado interno y el de la importación de bienes para ese mismo mercado. Este conflicto, sin embargo, tiene proyecciones que trascienden sus límites sectoriales debido a que obliga a la polarización de dos ideologías contrapuestas: del lado del sector importador (burguesía estéril) se coloca el capital extranjero con todo el peso de su influencia ya que las importaciones representan valores provenientes de sus países de origen (léase Estados Unidos) y del lado de los productores internos se colocan los sectores nacionalistas y progresistas del país que ven en el desarrollo moderno de una agricultura y una industria, eficientes y nacionalmente controladas, el muñón de un desarrollo económico autónomo.

El esquema no es tan sencillo como a primera vista parece pues no existen fronteras precisas entre una y otra capa de la burguesía. Es más, en el linde de una y otra, se ha venido formando una especie de empresario híbrido que participa por igual de la condición de importador y de productor y cuya conducta social y política refleja la incertidumbre de su ambivalencia. A esto debe añadirse que aún los empresarios netamente productores lo son forzosamente a medias, sobre todo en el campo industrial, debido a que para la elaboración de sus manufacturas deben emplear, en promedio, un 50% de materias primas e insumos importados<sup>51</sup>.

Ello explica, en cierto modo, las vacilaciones de esta burguesía y las ondas recurrentes de entusiasmo y depresión con que la estremecen las variaciones bruscas en la correlación de fuerzas que determinan el proceso social y económico del país. Los rasgos diferenciadores que la separan de la burguesía estéril aún no han alcanzado una acentuación convincente y, por el contrario, abundan algunos rasgos que tornan ambiguos los límites: cierta propensión trepadora, cierta debilidad oportunista, cierto complejo de inferioridad ante el gran capital y una

tendencia a rehuír la postura nacionalista y sus riesgos una vez que esa postura ha rendido sus frutos concretos en la protección aduanera, el crédito obtenido o la exoneración concedida. Sería idealista esperar que esta burguesía adopte gestos heroicos que pongan en peligro sus intereses todavía precarios; al contrario, los empresarios medios de la ciudad y del campo conducen sus asuntos con sagacidad, previsión y prudencia: carecen de fortunas sólidas y no pueden permitirse el lujo del fracaso. Pero es precisamente su lucha por subsistir y preponderar lo que los hace necesariamente nacionalistas y los lleva a coincidir, en un momento dado, con la vanguardia del movimiento popular que lucha por una modificación de la estructura económica. Propiciar tales coincidencias, consolidarlas y dirigirlas al objetivo del cambio revolucionario es una de las tareas primordiales que se plantea hoy a los partidos políticos de izquierda en Venezuela. Esa tarea, que exige una gran dosis de madurez y de conocimiento de aquel sector, conforma una etapa transitoria e inmediata en el camino a marcha forzada de la liberación nacional.

La burguesía productora no cuenta, como la burguesía estéril, con instituciones seculares. Las suyas son de reciente fecha y, en muchos casos, reflejan la situación ambigua y vacilante de este sector económico. Tal es el caso de la Cámara de Industriales de Caracas, dominada por la otra burguesía; y el caso, también, de esa proliferación regional de cámaras de industriales y comerciantes cuya denominación ya indica su contenido. Hay sin embargo, dos organismos de la actualidad que representan nacionalmente a las ramas industrial y agropecuaria de la burguesía productora: la Asociación Pro-Venezuela y Fedegro, respectivamente. Con todas sus vacilaciones e inconsecuencias y a pesar de la penetración que, dentro de ellas, realizan los grupos dominantes de la burguesía estéril, estas dos instituciones han venido conformando una ideología y una conducta nacionalistas que la enlazan con los sectores

progresistas del país y que constituyen una plataforma sobre la cual desenvolver aquella tarea planteada con sentido emergente a las vanguardias nacionalistas del país.

El mejor símbolo y expresión de la convivencia conflictiva de las dos capas de la burguesía venezolana lo constituye el organismo superior que las reúne: la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, corrientemente denominada Fedecámaras. Veamos la situación y los términos actuales de ese conflicto.

Fedecámaras es una organización de permanentes y progresivas contradicciones. Las lleva hasta en su nombre que pretende conciliar comercio y producción en un país donde el primero es un freno a la segunda. Comerciantes importadores conviven a duras penas con sus rivales de la industria y de la agricultura, mientras que banqueros poderosos sonrían sin compromiso a los pequeños comerciantes sin crédito. Las tensiones latentes y las contradicciones esenciales se mantienen como conflictos en potencia cuyo apaciguamiento se debe a tres factores fundamentalmente: comerciantes, industriales y agricultores evitan plantear en el organismo superior aquellos problemas de sus sectores que pueden originar choques y que, en la práctica, pueden ser procesados por sus organismos específicos: en segundo lugar, la vida social común ha creado vínculos personales que dan sus frutos a la hora de limar diferencias y en tercer término, la junta directiva se integra con predominio de los intereses más poderosos que son los que, en definitiva, dictan la política del organismo. Hay, además, un factor imponderable de aglutinamiento: el temor común a la marejada popular y a los cambios radicales que traería un movimiento revolucionario triunfante.

Hasta 1958, Fedecámaras estuvo dirigida por hombres del gran comercio y de la banca, cuya vasta experiencia buscaba la armonía entre el mundo de los negocios y los intereses de la dictadura, todo ello con suma discreción apenas rota por la imprudencia de algún acto

espectacular, como aquel de la cena pública con el dictador Marcos Pérez Jiménez. En 1958, ante la explosión y el auge de la conciencia revolucionaria del pueblo, Fedecámaras no tuvo otra alternativa que vestir un atuendo progresista: fue entonces cuando Alejandro Hernández y Reinaldo Cervini, dos representantes de la burguesía productora, vencieron en las elecciones de la asamblea anual e imprimieron a la institución un vuelco nacionalista. Los altos jefes del poder económico, esos que no asisten a las asambleas pero envían emisarios y recados a los asambleístas, tuvieron que soportar, para salvarse, la presencia de Ramón Quijada —dirigente campesino— quien, metralleta al hombro, se paseaba del brazo de un don Feliciano Pacanins, Presidente de la Cámara de Comercio y oligarca viejo, en procura de un fusil para defender la democracia.

Luego llegó al poder Rómulo Betancourt y ya no tuvo por qué ser nacionalista Fedecámaras: volvieron las viejas fuerzas de la banca, de la construcción y del comercio a tomar la batuta, y la presidencia de la junta se puso en manos de un antiguo comerciante importador. El nacionalismo, sin embargo, no había cruzado en vano por la dirección de Fedecámaras: industriales y agricultores capitalistas, más seguros de su fuerza, han venido conquistando posiciones y condicionando con una influencia creciente la conducción de la política empresarial hasta el punto de que hoy se logra mantener un equilibrio precario gracias al “justo medio” de aquellos empresarios híbridos, mitad comerciantes y un tanto banqueros cuya función directiva es la de mantener el fiel de la balanza.

Preguntémonos ahora por qué estos hombres tan prácticos y tan realistas, cuyo tiempo es otro, realizan esfuerzos para conservarse unidos y, además, por qué gastan energías y tiempo en discutir sobre asuntos tan abstractos como el “intervencionismo” y la “libre empresa”, una polémica que los alumnos elementales de cualquier escuela de Economía

considerarían ya superada. La verdad es que no se trata de un torneo intelectual, sino de una aguda lucha de intereses cubierta por el eufemismo técnico de los asesores, cuya misión no es otra que la de cubrir con velos de fábula los cálculos, ambiciones y proyectos concretos de estos capitalistas que suelen pagar muy bien el ropaje convencional con que han de presentarse en sociedad.

Sólo si vemos esto con claridad podemos entender la naturaleza del conflicto de Fedecámaras. Así, cuando uno de estos señores de la Cámara de Comercio, por ejemplo, habla de la “libre empresa”, debemos entender que habla contra aquellas intervenciones del Estado que, de una manera u otra, limitan los privilegios particulares del grupo. Cuando alguien que tiene dinero invertido en Avenza o en Viasa (dos líneas aéreas privadas) cita a Wilhelm Röpke para afirmar que el Gobierno es un mal administrador, debemos entender que aspira el monopolio de las rutas nacionales e internacionales y que desea y presiona la eliminación de la empresa aérea estatal. Aquellas sirven, pues, a estos fines y ello explica por qué unos señores que tienen tan claro el sentido de la productividad económica se gastan cien mil bolívares para que se les ensamble la *Carta Económica de Mérida* (comentada en páginas anteriores) y doscientos cincuenta mil bolívares para que se les prepare una ponencia sobre “Planificación democrática”.

También en el sector de los empresarios progresistas existen velos de fábula para cubrir intereses económicos concretos, sólo que tales intereses son de un signo diferente al de los anteriores: el grupo de empresarios del agro que se dedica a producir materias primas para la industria y el de los industriales que utiliza tales materias primas, amén de las importadas, están fortaleciendo el sector capitalista interno productor de bienes físicos. El comercio importador y la banca que lo financia están, por el contrario, conservando y fortaleciendo la transferencia del ingreso y la riqueza venezolana al exterior. Los primeros crean fuentes



permanentes de trabajo dentro del país, los segundos envían afuera un dinero que va a pagar sueldos y salarios a los extranjeros fabricantes de los productos que luego nos venden. Ni los unos ni los otros son ángeles o demonios, ni proceden así porque unos sean buenos y otros malos. Unos y otros actúan como capitalistas, son guiados por un común afán de obtener la máxima ganancia; pero en su actividad, ubicada en sectores diferentes, afrontan de manera opuesta el proceso de nuestro desarrollo y el interés general de la colectividad: los unos se aferran al mantenimiento de las estructuras colonialistas que nos definen como una economía dependiente; los otros, al luchar por sus intereses, incrementan los sectores productores internos sobre los cuales ha de fundamentarse necesariamente cualquier esfuerzo de independencia económica. Por ello es por lo que a estos últimos se les conoce bajo el calificativo de burguesía “progresista”, “nacionalista” o, como nosotros preferimos, “burguesía productora”, en contraposición de una burguesía “importadora”, “intermediaria” o, como nos parece más expresivo, una burguesía estéril.

La Federación de Cámaras está integrada, como ya hemos dicho, por esos dos sectores y ha logrado mantenerlos en convivencia desde su fundación (1943) hasta hoy. No está planteado, tampoco, el rompimiento inmediato y brusco en la actualidad: su tolerancia recíproca o su choque abierto reflejan y dependen de variables tanto en la estructura económica como en la superficie política. En efecto, mientras el proceso industrial no adquirió un desarrollo que lo acercara a las magnitudes relativas del comercio y mientras la agricultura capitalista no adquirió personalidad técnica, el comercio y la banca dominaron a su antojo y disfrutaron paradisiácamemente de un mercado de cuatro esquinas: petróleo, presupuesto, construcción e importación.

Lentamente, sin embargo, y aprovechando las rendijas de ese cuadrilátero, avanzaba una industrialización de invernadero y una agricultura

capitalista adherida a esa industria. El cambio político de 1958 fue favorable a este proceso, la industrialización manufacturera se convirtió en bandera política de todos los partidos que deseaban atraerse la clientela de los empresarios de mentalidad más nueva y menos comprometidos con la dictadura. En este momento llega el primer empresario industrial a la presidencia de Fedecámaras. Esto no sucede por azar, como tampoco fue un azar la caída, dos años más tarde, de Fedecámaras en poder de la tendencia comercialista. En este último evento tuvo mucho que ver la alianza de la administración Betancourt con la oligarquía financiera. Pero la burguesía productora, nos interesa repetirlo, ya había probado sus fuerzas y adquirido conciencia de sus posibilidades rectoras. Esto es muy importante porque es el factor que, en los últimos cinco años, clava su piqueta para un cambio cuya demora es otro fruto de la distorsión estructural de nuestra economía, pero cuya dialéctica es irreversible.

La oligarquía financiera o burguesía estéril es económicamente más poderosa, está mejor organizada, tiene una conciencia política más lúcida y una mayor capacidad de decisión que su rival. A esto se debe que la *Carta Económica de Mérida*, un documento contrario a la ideología de la burguesía nacionalista, haya sido aprobada, con leves modificaciones, por la totalidad de Fedecámaras. Igualmente a ello se debe que aquella oligarquía, a fin de no arriesgar políticamente la mampara gremial (apolítica) de Fedecámaras, haya inspirado y logrado la organización de grupos y partidos políticos que representen, defiendan e impongan sus puntos de vista en la esfera de los poderes públicos y en el centro mismo del combate político. Tal ha sido la razón de ser de la Asociación Venezolana Independiente (AVI) y, en general, de las agrupaciones de “independientes” de la derecha, dirigidos por una simbólica combinación de millonarios y de empleados de las compañías petroleras. Como esa oligarquía está asociada y depende del sistema capitalista extranjero (la Cámara del Petróleo ocupa

un lugar dominante en Fedecámaras), estos partidos y agrupaciones al representar a la burguesía estéril representan y defienden también el sistema económico que subordina y coloniza al país.

Aunque menos poderosa y en algunos aspectos bastante infiltrada por intereses foráneos, la burguesía productora tiene de su lado fuerzas históricas determinantes. No tiene ni la claridad de objetivos, ni la magnitud de los capitales ni el ejercicio del poder económico que caracterizan a su rival, pero las condiciones están dadas para que continúe el ascenso y asegure la supremacía. De sus dirigentes depende que se atrase, se desvíe o se adelante el papel que están llamados a jugar en el proceso de independencia económica. Si en este sector hubiese una mayor conciencia de ese papel, comprenderían sus integrantes que la lucha por sus intereses coincide con los objetivos inmediatos de la liberación económica de Venezuela y que, mientras más se acerquen y estrechen lazos con los sectores nacionalistas empeñados en esa lucha, mayor será su fuerza para vencer en un conflicto que trasciende los límites gremiales de Fedecámaras y se constituye en parte de un proceso nacional cuya dinámica se proyecta hacia etapas más avanzadas de nuestra evolución social.

Desafortunadamente, cuestiones tan esenciales no están claras en la mente de nuestros empresarios agrícolas e industriales. Hemos visto las vacilaciones con que conducen su propia lucha y es frecuente, en su reciente historia, encontrarlos confundidos y aun mediatizados por las tenazas del comercio distribuidor y de la banca. Es aquí donde ha fallado la organización y la unidad de acción y es aquí, también, donde la intervención eficaz de un gobierno nacionalista, que Venezuela no ha tenido, habría ejercido una influencia decisiva. La conquista de esa unidad, de esa organización y de ese gobierno está planteada a corto plazo. Las vanguardias políticas del país —trabajadores, estudiantes, intelectuales— tienen conciencia de ello. También la tienen los más avanzados representantes de la burguesía nacionalista.

Frente a la estructura neocolonial que hemos descrito no hay otra alternativa que no sea la liberación económica, social, política y cultural del país. Estas fuerzas tienen, conjuntamente, el mandato histórico, la responsabilidad, el compromiso de luchar por ella hasta conquistarla. No hay evasión ni escapatória que no sea una traición. Este es el sentido de la lucha fundamental que se desarrolla hoy en Venezuela y que el mundo entero observa. La libertad del hombre venezolano actual consiste, precisa y objetivamente, en el compromiso revolucionario, en la toma de conciencia y en la acción consecuente para transformar un país colonizado en un país realmente libre. Los primeros en dar su contribución han sido los obreros, los estudiantes y los campesinos. Se han venido sumando a ella los intelectuales de vanguardia. Es necesario ahora sumar, aglutinar, incorporar nuevos efectivos a una lucha que es irreversible como la historia. Es el tiempo de avanzar.

## Contexto político de la violencia

*Y la búsqueda de la libertad vendría a ser tan sólo una obra de corrección, de enmienda de una realidad cambiante, gracias al empleo de una violencia depurada, orientada, encauzada, convertida, en el instrumento de su propio perfeccionamiento.*

GERMÁN CARRERA DAMAS

*Hipótesis sobre historia, libertad y violencia*

*Y a mí el mundo no me da cuartel... No hay en el mundo un pobre tipo linchado, un pobre hombre torturado, en el que no sea ya asesinado y humillado.*

CÉSAIRE

*El Rebelde*

### El país violento

Mucho antes de ser establecidas las fronteras geográficas de Venezuela y mucho antes de ser una república, ya la violencia había sido factor determinante de su historia. La trajo el conquistador español y la respondió el indio con justa causa y mayor nobleza, puesto que sus armas eran inferiores y lo que defendía era su propia tierra. Al guerrillero Guaicaipuro le persiguió y aniquiló el ejército real de Losada, y el Capitán Rodríguez Suárez cayó en una emboscada de combatientes criollos. Miguel es, en rigor, el negro primero y Juan Francisco de León obedece a un sentimiento antiimperialista. En los Andes, la violencia de los comuneros estableció el primer antecedente de la inversión de fincas.

En el centro, Gual y España fueron los “extremistas” de una frustrada rebelión popular.

Nadie más violento que Bolívar a quien José Domingo Díaz, en un respiro de los realistas, llamó asesino y terrorista con gran aceptación de ciertos “honorables” caraqueños. A Páez lo llamaron “azote” cuando sustituyó a Boves en la conducción de las huestes llaneras, porque su violencia era la del pueblo; al mismo Páez lo llamaron “salvador” cuando, en nombre de las clases dominantes, desarrolla la violencia que terminó perdiéndole. Y al más violento, Ezequiel Zamora, lo frustró la violencia de una bala que va a recibir las bendiciones de Juan Vicente González, un escritor equivocado. La violencia, después del caudillismo, del caciquismo y del atentado palaciego, hasta llegar a Gómez.

Mariano Picón Salas despachaba todo esto de la violencia diciendo que nuestro pueblo es “levantisco”. Sin embargo, hemos comprobado en las páginas anteriores que este pueblo, lejos de ser levantisco es paciente hasta extremos imponderables: la “Emancipación” fue el banquete de los “mantuanos”, la “Federación” hizo a los generales más ricos y a los campesinos más pobres. Guzmán fue un demagogo, Cipriano Castro un libidinoso y Gómez un terrateniente cruel. Se descubrió el petróleo, llegaron la Standard y la Shell, la burguesía comercial y los terratenientes les sirvieron de mampara, y el imperialismo hizo las delicias de los Valladares, los Gómez, los Boulton y tantos otros apellidos intermediarios entre los nuevos colonizadores y la riqueza nacional. El pueblo, al decir campechano del general Gómez, “estaba callado”.

La violencia, sin embargo, estaba latente porque no se había resuelto, para los venezolanos, el problema fundamental de ser independiente. Mucho hizo Bolívar, bastante hicieron Zamora y Falcón, pero seguía en pie la razón de la violencia: una sociedad compuesta por explotadores

y explotados no había alcanzado la autonomía para decidir su vida, su fortuna y su destino.

La violencia tuvo una memorable eclosión en 1928. Rómulo Betancourt, Jóvito Villalba, Miguel Otero Silva, Raúl Leoni y, en general, los estudiantes universitarios de la época recogieron la antorcha de Guai-caipuro, de Andresote, de Gual, de Bolívar, de Zamora. Apenas habían trascendido la adolescencia y arriesgaron la vida contra la tiranía: su violencia era la del pueblo y, como tal, fue calificada de terrorista por el Ministerio del Interior de entonces a quien corresponde el “honor” de ser el primer reaccionario que empleó el expediente del “anticomunismo” para justificar atropellos y desafueros.

En 1936, a raíz de la muerte del dictador, la violencia popular tuvo oportunidad de ser revolución. Pero Rómulo Betancourt aceptó la continuidad “con el pañuelo en la nariz” y Jóvito Villalba, en nombre de obreros y estudiantes, se dejó embaucar por Eleazar López Contreras quien, luego, los expulsa del país bajo la acusación de

agitar las masas, alentándolas a la revuelta y a la violencia revolucionaria, hasta llegar al atentado personal, al incendio y al saqueo de fincas urbanas y rurales pertenecientes a servidores del viejo régimen. Necesariamente estos desmanes —añade López Contreras en su justificación—, contra los ciudadanos y la propiedad privada obligaron a las autoridades civiles, políticas y militares a intervenir enérgicamente para contenerlas y reprimirlas, con un doloroso balance de muertos y heridos<sup>52</sup>.

Vuelve la violencia en 1945 y Acción Democrática, olvidada del “hilo constitucional”, asciende al poder llevada por un golpe militar, pero lejos de luchar por un cambio revolucionario, Rómulo Betancourt

suscribe con Nelson Rockefeller un acuerdo para establecer empresas industriales mixtas que amplíen los negocios de este último hacia los sectores agrícolas e industrial.

La violencia en 1948, apoyada por el partido socialcristiano Copey y URD concluye con la caída de AD y con la instalación de una dictadura cuya represión arroja un saldo no menor de veinticinco muertos, sin incluir la masacre de Turén.

El 23 de Enero de 1958 culmina un proceso de violencia iniciado por la izquierda diez años atrás y apoyado, en las últimas horas, por la burguesía y el ejército. Como en 1936 y en 1945, la violencia pudo haber fructificado en revolución. Sin embargo, no sucedió así y el Gobierno fue controlado por la alta burguesía que, habiéndose lucrado en tiempos de Pérez Jiménez, se presentaba ahora como salvadora. El resultado fue Betancourt quien, para neutralizar los grupos reaccionarios de poder (curas, militares y yanquis) comenzó vociferando un anticomunismo histérico (recordemos al ministro del Interior de Gómez), un intocable “hilo constitucional” (recordemos “el pañuelo de la nariz”) y finalmente una pintoresca y desvergonzada condición de súbdito yanqui que, mezclando lo dramático con lo ridículo, produjo el estancamiento y castración de la Corporación Venezolana del Petróleo, el endeudamiento externo, la entrega de la explotación del aluminio a la Reynolds, del hierro a la Koppers, el odio oficial de Cuba y el hábito muy puertorriqueño de intercalar expresiones en inglés dentro de la conversación en español. Este personaje puede enorgullecerse de haber sido el primer presidente de Venezuela que concluyó su período con un saldo de 300 muertos políticos (no se cuentan los saldos de acciones armadas: Barcelona, Carúpano y Puerto Cabello) por acción represiva, más de diez periódicos clausurados; un balance de diez mil presos políticos durante los cinco años y dieciocho parlamentarios inconstitucionalmente



detenidos y secuestrados. Si el de López Contreras ha sido llamado el “quinquenio socarrón”, bien pudiera llamarse el de Betancourt el “quinquenio violento”.

La violencia en Venezuela no ha concluido. Sus raíces históricas alimentan todavía su follaje profuso. Venezuela sigue siendo un país de minorías explotadoras sobre mayorías explotadas y sigue siendo, dentro de un proceso dinámico de enajenación, un país que no tiene la autonomía ni de su vida, ni de su fortuna, ni de su destino. Si para su expresión más reciente —esta que vivimos— tuviera algún sentido investigar su origen, allí están aquellos tres primeros muertos abaleados por la policía durante una manifestación pacífica en agosto de 1959<sup>53</sup>. Pero, a poco de ahondar en nuestras averiguaciones, tropezamos con aquellas raíces afirmadas en la historia y en la deformación estructural: los tres caídos eran obreros y la manifestación era de desempleados. Un Gobierno cuyos compromisos con las minorías privilegiadas y con el capitalismo extranjero le impiden ir al cambio de estructuras verá crecer ante sí el problema del desempleo y sólo tendrá a mano la policía para silenciar sus explosiones sociales, y como éstas son intermitentes, forzadas por una situación de desequilibrio y estimuladas por el hambre y la desesperación. El expediente policial se irá convirtiendo en la única política de contención de masas a la cual acudirá un Gobierno cuyas posibilidades reformistas no permiten remediar a fondo y extirpar la raíz del mal. Esta es la razón por la cual Rómulo Betancourt, llevado al poder por el voto de las mayorías, traiciona a estas mayorías y fundamenta su acción represiva sobre dos postulados: “Las calles son para las fuerzas del orden público” y “hay que disparar primero y averiguar después”.

Lo que comenzó circunstancialmente con aquellos tres venezolanos asesinados al salir de la plaza Concordia, se desarrolló con la voracidad de un vertiginoso incendio atizado por acciones y reacciones que convirtieron la “democracia representativa” en una funesta

agencia de violaciones al derecho y a la dignidad humana y forzaron a organizaciones políticas que durante años venían demostrando su vocación por la lucha cívica y soportando persecuciones, prisiones, exilios y torturas por la democracia, a gestar un movimiento armado para asegurar su subsistencia y garantizar su continuidad en la lucha revolucionaria frente a la decisión de aniquilamiento adoptada por un Gobierno que no daba cuartel.

Pero no nos engañemos, los errores de Betancourt y los disparos de los policías, fueron sólo el detonante de un explosivo cuya carga viene alimentándose con todas las frustraciones de nuestra historia. El drama por él desatado no era un episodio circunstancial, sino un episodio decisivo en el destino histórico de Venezuela. Un proceso envolvente, que en los primeros años afectaba directamente a dos organizaciones políticas (al Partido Comunista y al Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y al Gobierno que las combatía, hoy afecta y conmueve a la sociedad entera, comprometida inevitablemente en la alternativa de la violencia y de la pacificación.

La violencia en Venezuela anda por las calles y por los campos. Sus manifestaciones han sido como todas las manifestaciones de la violencia: sobrecogedoras, terribles, destructoras. Esas manifestaciones se enhebran en un círculo vicioso y sangriento cuyo saldo se mide con sacrificio de vidas y bienes. Casi dos lustros de violencia se han necesitado para que aún las más impermeables capas de la sociedad venezolana se convenzan de que la solución del problema no está en la represión policial y militar.

### **Testimonio rojo**

La violencia en Venezuela hunde sus raíces en dos contextos históricos distintos cuyo deslinde es necesario si queremos comprender por

qué en los conflictos actuales subsisten estímulos originados en la etapa colonial, vigentes en el siglo XIX y no resueltos todavía y por qué, sin embargo, debido a la inserción de factores dinámicos novedosos, no podemos aplicar a las meditaciones sobre la violencia contemporánea el esquema ideológico que aplicaron nuestros más progresistas pensadores del siglo pasado y de las primeras décadas del presente.

Hasta el momento en que los indicadores económicos de la explotación petrolera por capitales norteamericanos, ingleses y holandeses igualan y sobrepasan a los indicadores de la economía agrícola tradicional, la dialéctica de la violencia se desarrolló dentro de una estructura feudal predominante; pero a partir de aquel cruce histórico de magnitudes, la violencia se complica al arrastrar los estímulos del sistema feudal dentro de una estructura donde comienza a dominar un capitalismo de signo imperialista.

La síntesis histórica sobre el problema agrario, ofrecida en el capítulo I de este ensayo, pone de relieve el conflicto feudal entre la nobleza territorial venezolana como clase dominante y la masa heterogénea de indios, negros y mestizos sujetos a esclavitud y a servilismo como clase desposeída y explotada. La tierra, como el factor fundamental de la riqueza social, polariza los extremos de la violencia, aunque en las motivaciones aparentes e inmediatas no se exprese una conciencia lúcida de las causas más profundas ni de los objetivos finales, envueltos por la nobleza criolla en los velos de una fábula ideológica tomada de la revolución burguesa, y apenas intuidos y confundidos con otros estímulos y apetencias en el subconsciente de las masas desposeídas y explotadas.

El testimonio de los historiadores y ensayistas que, en América Latina, han profundizado el estudio económico y social de la colonia nos libera de la tarea de demostrar que las rebeliones durante los siglos coloniales y su culminación en las guerras emancipadoras contra la corona española son episodios de una violencia provocada por dos conflictos: uno

fundamentalmente económico-social, y el cual no es otro que el enfrentamiento de explotadores y explotados en el nuevo mundo, y uno fundamentalmente político, y el cual se produce en el momento en que la nobleza territorial criolla ha consolidado su poder económico y necesita, históricamente, asumir la dirección del poder político quitándoselo al rey.

En el primer conflicto, la violencia surge entre quienes concentran la gran propiedad territorial y quienes son brutalmente explotados para que esas grandes propiedades rindan los mejores frutos de su riqueza en provecho de aquella minoría.

En el segundo conflicto, la violencia surge entre estos grandes propietarios criollos y la corona española por el desajuste de poderes ya mencionado. La derrota de España y la solución histórica del segundo conflicto no se debe, sin embargo, a la acción exclusiva de los terratenientes criollos, sino a su alianza transitoria y un tanto paradójica con sus antagonistas del primer conflicto, es decir, con las masas por ellos mismos explotadas, cuya presencia y acción en la lucha emancipadora dio a ésta un sentido de guerra popular.

La paradoja se explica por la coincidencia transitoria de dos intereses contrapuestos en un momento propicio: el interés de la nobleza criolla de liberarse del dominio español y el interés de las masas rurales y urbanas de buscar en el riesgo de la guerra, y en despojo del enemigo, su liberación como clase oprimida y como clase no propietaria. Podrán, por tanto, pelear bajo las banderas del rey o bajo la nobleza criolla sin que, en uno u otro caso, estuvieran traicionando su búsqueda fundamental. Los llaneros de Páez no eran mejores que los de Boves: la aspiración colectiva de estos hombres, al renovar en el segundo la fallida esperanza que murió con el primero, reforzaban su lucha y la vestían con las galas abstractas de la libertad, la igualdad y la fraternidad.

La autenticidad de Bolívar como revolucionario y su genio político conciliaron los intereses de clase contrapuestos y volcaron, en provecho

del conflicto político de los terratenientes contra el poder español, la unidad circunstancial de la oligarquía criolla y del pueblo. Pero una vez resuelto el conflicto entre los terratenientes y el rey en favor de los primeros, van a reaparecer todavía más definidos y enconados los términos dialécticos del conflicto entre clase explotadora y clase explotada porque, ahora, la primera surgía más poderosa que antes y gobernaba sin limitaciones, al tiempo que la segunda adquiría contextura histórica de pueblo y había aprendido a utilizar el fusil como instrumento de liberación. Su desengaño y su rencor de entonces encontrarán salida y expresión en la Guerra Federal y la seguirán encontrando mientras no se extirpen aquellas raíces coloniales que todavía alimentan la violencia feudal en Venezuela.

Y va a ser precisamente la degeneración de esta violencia en caudillismo y su esterilidad para el cambio social lo que provocará en la élite del pensamiento positivista una reacción contra la lucha armada frente a la cual esgrimirán un evolucionismo progresista, basado en la educación cívica y técnicas de las masas, en la industrialización y en la consolidación gradual de las instituciones democráticas.

Cecilio Acosta reitera continuamente en su obra la sensación provocada por el círculo vicioso de la violencia caudillista: “Las convulsiones intestinas han dado sacrificios, pero no mejoras, lágrimas pero no cosechas. Han sido siempre un extravío para volver al mismo punto, con un desengaño de más, con un tesoro de menos”<sup>54</sup>.

Y cuando penetra en las causas del malestar de nuestra América señala, como una de las principales, a la revuelta armada:

...para todo, como remedio único, el conciliábulo, el plan secreto, el fusil faccioso y, tras esto, la llama de la guerra civil que a poco se extiende y azota. Las sociedades, como los líquidos que, descansados, logran precipitar y echar al fondo sus heces,

han menester también de paz para descartarse de vicios y resabios y hasta de malos hombres que sólo medran al favor de condiciones turbias, y dejar así limpio y sano el cuerpo...

Como muchos de estos pueblos, por razón de no tener todavía grandes gremios, gran riqueza creada ni grandes industrias... son pueblos pletóricos, es decir, en que todo el poder de la vitalidad reside en la cabeza o en el gobierno que rige, echando éste abajo por una revuelta, los elementos de reconstrucción que quedan no son bastante eficaces para el objeto, y de resultas, de en medio de esa debilidad y anarquía, que por lo mismo que lo es, produce fuerzas dispersas, lo que se ve salir es caciques lugareños, héroes de machete y campeones de matanza<sup>55</sup>.

Ideas similares encontramos en Lisandro Alvarado quien no concibe, para resolver el problema de la disparidad entre las élites urbanas de la riqueza y el poder y las masas paupérrimas e incultas, otro remedio que no sea la educación y el progreso técnico. Así mismo, Luis López Méndez:

Sustituir a la acción violenta e intermitente del poder personal el imperio constante y moderador de la Ley, al predominio de los individuos la influencia de los principios, al silencio que enerva y envilece la discusión que ilustra y dignifica...<sup>56</sup>

Y César Zumeta, al proyectar hipotéticamente la curva de un desenvolvimiento pacífico desde la Independencia hasta sus días, señala en 1919 que: "De haber perfeccionado nuestra educación política a fin de vivir en paz, hubiéramos podido mantener la progresión normal trabajosamente alcanzada en el primer decenio de la República, y estaríamos exportando un mínimo de cuatrocientos millones de bolívares<sup>57</sup>.

Apasionados por el estado de desarrollo de otras naciones más avanzadas, ganados por la convicción del progreso continuo y de la ciencia como instrumentos básicos de estabilidad y de felicidad sociales, estos hombres ansiaban la paz y el orden a fin de que plantas industriales, explotaciones agrícolas modernas, vías de comunicación y una banca y un comercio sin trabas, todo ello abandonado por un lento pero sostenido esfuerzo de educación popular y técnica, levantaran airoosamente la estructura de un país nuevo y civilizado sobre las ruinas de un país feudal. Ellos eran los adelantados intelectuales de una burguesía comercial y pequeño industrial que necesitaba imponerse sin violencia sobre la improductividad del latifundio.

Juan Vicente Gómez va a resolver el problema de la paz y el orden; los grandes capitales ingleses, holandeses y norteamericanos del petróleo van a resolver el problema de aquella burguesía haciéndola poderosa en el plano comercial, pero desalentando la vertiente industrialista y dejando intacto el esquema feudal latifundista. No hubo educación técnica, ni hubo progreso transformador ni ciencia liberadora, pero en cambio a las antiguas raíces de la violencia antifeudal, forzadas al silencio pero siempre vivas en el instinto de lucha campesina, se va añadir ahora una raíz nueva que va a comenzar su arraigo en las vanguardias políticas urbanas. La universidad se adelantará con las nuevas banderas, y los positivistas irán cediendo el paso a los marxistas en el análisis de los nuevos contextos económicos, sociales y políticos, así como en el deslinde y promoción de un género de violencia, la violencia imperialista y anti-imperialista, bajo cuyo signo de trayectoria infamante vivimos todavía.

Si tenemos clara la distinción histórica entre las dos situaciones de violencia comprendemos, entonces, el anacronismo y la contradicción que entrañaría aplicar al sentido de la violencia actual los conceptos de aquellos ideólogos positivistas cuyas ideas se movían dentro de un arco

caudillista. En otras palabras, quien se proponga reflexionar seriamente sobre el problema actual no puede confundir los contextos históricos de la violencia ni identificar social, política y militarmente a las modernas guerrillas llamadas de liberación nacional con las guerrillas tradicionales que llenan el anecdotario político del siglo XIX y primeras décadas del XX en Venezuela y en otros países latinoamericanos.

Esta observación tan obvia parece necesaria, sin embargo, ante el manejo que algunos intelectuales y políticos hacen de la falacia mencionada. En efecto, recordamos que Mariano Picón Salas —para no mencionar a Juan Liscano— se apoyaba con frecuencia en el pensamiento humanístico del siglo XIX venezolano para enjuiciar una situación de violencia que aquellos no podían prever. Asimismo, la violencia contra la cual Rómulo Gallegos se pronuncia en sus novelas es la misma violencia caudillista —forma anárquica y degeneración de la violencia antifeudal— negada y combatida por Cecilio Acosta y Lisandro Alvarado.

La violencia imperialista y su contrapartida, al ir perfilando sus aristas en este último medio siglo de nuestra historia, nos van mostrando un contexto internacional desconocido en la contradicción feudal y antifeudal. Ya no se trata solamente del conflicto entre latifundistas y campesinos, ni del contraste entre la explotación extensiva feudal del campo y las formas avanzadas de la producción agrícola capitalista, sino de la oposición y conflicto de intereses entre la nación venezolana, dueña de recursos fabulosos en petróleo y minería, y la nación norteamericana, dueña mayoritaria de los grandes capitales que explotan aquellos recursos.

Ya hemos visto la trabazón económica de estos intereses, la alianza del capital foráneo con la burguesía comercial y financiera, así como el reflejo de esa alianza sobre una burguesía productora que baila en la cuerda floja de esa alianza y sobre los gobiernos “reformistas”, forzados a ceder continuamente dentro del círculo vicioso de la entrega, el cual consiste



en perder el apoyo de las masas porque no van a fondo en las reformas y no ir a fondo en las reformas porque se ha perdido el apoyo de las masas.

Mientras tanto, en el país avanza, en el grado en que lo permite el juego de las fuerzas contrapuestas, la creación de una conciencia anti-imperialista cuyas manifestaciones nos señalan el paso de una ideología prendida al comienzo en una élite intelectual y política y difundida, luego, dentro de la irregularidad histórica del año 1936 hasta hoy, en las masas urbanas y parcialmente en las rurales. El fenómeno de las guerrillas del tipo diseñado por las guerras actuales de liberación y la subsistencia de núcleos subversivos en el medio rural no puede ser explicado seriamente como una manifestación y subsistencia de la violencia caudillista: cualquiera que sea la posición e interpretación que asumamos frente a ellas, hay algo que el más superficial observador anotará sin duda alguna y es que, sin una mínima base social de respaldo esas guerrillas no hubieran durado un año. No sólo la base social que exige una retaguardia urbana sino la que indispensablemente exige la movilización y permanencia en áreas rurales por más inaccesibles que sean.

No es un atrevimiento sostener que la creación de una base social urbana y rural para una guerra anti-imperialista comenzó con las luchas estudiantiles frente a Gómez y, concretamente, con el deslinde entre conspiración y lucha armada con un caudillo tradicional a la cabeza y la organización de células y grupos ideológicamente identificados por un sentimiento anti-imperialista y por un incipiente marxismo.

Aun cuando en la década 1910-1920 encontramos vagos testimonios de un sentimiento anti-imperialista y aun cuando la presencia y la excepcional actitud de un adolescente rebelde como Gustavo Machado, en las rebeliones estudiantiles y movimientos subversivos de entonces, lo constituye a él en precursor de la violencia anti-imperialista, lo cierto es que en el más completo y magistral testimonio de violencia de ese tiempo, las *Memorias de un venezolano de la decadencia* de

José Rafael Pocaterra, solo hallamos alusiones lejanas, sutiles y vagas al problema imperialista. Para Pocaterra, Gómez es el origen, centro y culminación del mal: no quiso o no pudo verlo como agente o instrumento porque esto lo habría disminuido en el grado de la culpa, en el sueño de la venganza y en la figura terrible de antihéroe que inspiró páginas tan inmortales. Por ello Pocaterra dice (en 1924 al morir Castro y a propósito de las *Memorias...*) que se trata de “un libro que contiene el proceso pavoroso de un novenario de desmanes en que él (Juan Vicente Gómez) era el “héroe invicto” y los demás gentualla roedora de desperdicios o sombras en las cárceles y en lejanas playas”.

Ahora, de que Pocaterra conocía las fuerzas internacionales en juego no cabe duda cuando leemos el siguiente texto:

Se dice que Preston Mac Goodwin, el ministro de los Estados Unidos de América en Caracas, el hombre que ponía las notas “fuertes” en los días postreros de la guerra europea y que hizo quitar del Ministerio del Exterior al doctor Bernardino Mosquera para poner a Gil Borges, quien podía “tratar mejor los asuntos”, ha sido delator y atizador de las denuncias contra lo del golpe de estado y “la manifestación”...<sup>58</sup>

Las manifestaciones estudiantiles de 1910 a 1918 tienen, sin duda, un signo antiimperialista, pero entonces se trata de un reflejo sentimental del “arielismo”, lanzado por Rodó y estimulado por la intromisión militar de Estados Unidos en América Latina. Es entre 1919 y 1929, o sea, entre el abortado golpe contra Gómez (1918-19) delatado por un oficial y la toma de Curazao (1929) y subsiguiente invasión revolucionaria de las vanguardias políticas de Venezuela<sup>59</sup>.

El enfoque y la actitud positivista van cediendo paso al análisis marxista de la realidad social y a la actitud combatiente que ese análi-

sis exige: la invasión de Venezuela, después de los sucesos de Curazao, en 1929, es en rigor el primer acto de guerra de liberación antiimperialista intentado en nuestra patria. La presencia allí de Rafael Simón Urbina, un caudillo de tipo tradicional, afecta pero no niega la claridad revolucionaria ni los objetivos antiimperialistas de los dirigentes más lúcidos de aquel movimiento. Reconocidos los errores<sup>60</sup>, queda para la historia el antecedente liberacionista cuyo fracaso no puede ser argumento para su negación, así como su triunfo no habría disculpado aquellos errores.

Cuando en 1929, dos estudiantes venezolanos comprometidos en los sucesos del año veintiocho —Rómulo Betancourt y Miguel Otero Silva— lanzan desde el exilio un libro que los reúne como autores<sup>61</sup>, ya es clara la conciencia anticaudillista en la vanguardia estudiantil que insurge contra Gómez, como lo demuestra el análisis que hacen del “sentido y la orientación del movimiento universitario venezolano”. Con una gran honestidad intelectual, de la cual Betancourt se va a desprender más tarde, estos dos noveles autores reconocen una precaria formación ideológica y, en general, una pobrísima base cultural como fruto menguado de la universidad bajo la tiranía:

Entre los universitarios, solamente los cursantes de Ciencias Políticas y Sociales tienen conocimiento, y muy relativo, del comunismo, discuten dentro del cuadro disciplinario de algunas materias... y solo como doctrina, desde un punto de vista nuevamente docente. Algunos no se encuadran dentro de esa limitación de conocimientos y por propia cuenta se leen a Marx, a dos o tres de sus exégetas, el *Ideario* y algún libro de Trotski. Y a eso se reduce el arsenal del más erudito “bolchevique” de la Universidad<sup>62</sup>.

Era muy poco, teóricamente, pero era bastante para ir definiendo y canalizando la violencia de una juventud ya encendida por la fe revolucionaria de Sachka Yegulev, ya atacada por la campaña “anticomunista” del ministro Arcaya y ya consciente del papel de los grandes monopolios norteamericanos en el suelo de América. En el amanecer de la conciencia y de la lucha antiimperialista hay mucha confusión todavía, y ello explica por qué, en la obra que comentamos, surge como argumento para atacar a Gómez el de que, bajo su tiranía, “la propiedad privada perdió su sentido de cosa sagrada”<sup>63</sup>, inconsecuencia que se justifica, tanto por la validez de un ataque contra el saqueo y el despojo gomecista como por la necesidad táctica de ganar para la lucha a sectores de la burguesía afectados por la rapacidad del régimen, solo que se les fue la mano (el texto pertenece a Betancourt) en lo de “cosa sagrada”. Sin embargo, la claridad estratégica vuelve más adelante, cuando afirman que:

Los llamados a destrozarse esa tramoya donde se embozan todas las fuerzas enemigas de la tranquilidad y de la integridad de América son los universitarios unidos en frente único con el proletariado<sup>64</sup>.

El *Libro Rojo* (1936), publicado bajo el Gobierno del general López Contreras para denunciar las actividades comunistas en Venezuela<sup>65</sup> es un documento imprescindible para seguir la marcha de aquel cambio de conciencia revolucionaria entre el caudillismo (degeneración de la violencia feudal y antifeudal) y la violencia imperialista y antiimperialista bajo cuyo signo predominante vivimos todavía.

Allí aparece el contexto internacional que caracteriza a la violencia del imperialismo y su contrapartida revolucionaria. Torturas, vejámenes, confesiones y actos heroicos comienzan a formar, allá por el año 1932, ese inmenso testimonio rojo que sustenta y hace irreversible la

revolución antiimperialista en Venezuela. Aparece, allí también, y reproducido con fidelidad perversa, el viraje oportunista y la tremenda potencialidad traidora del pensamiento de Rómulo Betancourt. En un lenguaje vicioso, salpicando de maledicencia, envaselinado de sentimentalismo y plagado de pequeñas trampas, este hombre desarrolla una admirable tarea de confusión y de envenenamiento de espíritus simples y de cerebros enchufados al suyo, con el clarísimo objetivo de desligar la lucha de su contexto internacional y de darle un objetivo de alcance meramente institucional. Conservará la etiqueta antiimperialista y militará en el partido comunista de Costa Rica para disimular mejor sus propósitos reales de caudillo pequeño-burgués. En los documentos, cartas y recados que Betancourt reparte desde Costa Rica en esa época, encontrará el historiador futuro la raíz de toda la conducta posterior de este gran político venezolano del siglo XX: grande por su ambición, grande por los poderes que esa ambición conquistó y grande por las traiciones que alimentaron esas conquistas. Su biografía, aun cuando la escriban sus propios partidarios, será un elocuente epitafio de la pequeña burguesía como clase conductora de la revolución.

El testimonio rojo de la violencia imperialista y de sus víctimas no ha cesado ni habrá de concluir hasta que no se liquide definitivamente el conflicto fundamentalmente entre la nación venezolana y los intereses dominantes con que la ha ocupado, en medio siglo largo de sujeción neocolonial, el imperio de Estados Unidos de Norteamérica. Frente a la represión de la dictadura del general Pérez Jiménez, el testimonio rojo queda recogido en el *Libro Negro*<sup>66</sup> del partido Acción Democrática, y en el cual hallará el historiador materiales para enjuiciar los cuatros primeros años de un régimen de terror que habría de continuar hasta 1958.

Mejor que el documento escueto, por el interés universal que despierta el hecho humano tratado con sensibilidad y con capacidad creadora, es el testimonio rojo en obras literarias trabajadas con lealtad realista.

En este sentido, la violencia imperialista y su reflejo en este rincón del mundo que se llama Venezuela, cuenta con tres fundamentales testimonios: *Se llamaba S.N.*, una novela de José Vicente Abreu (testigo y víctima de las torturas en el campo de concentración de Guasina durante el régimen de Pérez Jiménez) en la cual, con serena grandeza admirable en quien fue vejado, se entrega, para que el mundo nunca olvide, la trágica odisea de un grupo de hombres, el autor casi adolescente entre ellos, sometidos al más feroz aniquilamiento por el delito de poner sus vidas al servicio de la liberación de su país.

El segundo testimonio creador es *La muerte de Honorio*, novela de Miguel Otero Silva, autor familiarizado con la violencia anticaudillista y antiimperialista, tanto por su experiencia estudiantil y guerrillera en los años 1928 y 29, como el testimonio que de esas experiencias nos han dejado en el ensayo citado anteriormente y en su novela *Fiebre* (1939) que la juventud venezolana sigue leyendo con entusiasmo. *La muerte de Honorio* recoge el testimonio de cinco heroicas víctimas de la represión perezjimenista, sometidas a torturas diferentes en un alarde del refinamiento más cruel para despojar al hombre de su condición humana. El testimonio es auténtico y el autor respeta la verdad histórica: este libro —cualquiera que sea el juicio estético que se ejerza sobre él— es un expediente acusador y perdurable contra el sistema en cuyo seno los poderes dominantes pueden descender a nivel tan execrable y bestial.

En tercer lugar, y ya como testimonio rojo de la violencia imperialista desatada durante el régimen de Rómulo Betancourt, con sus asociados y sucesores, está la más afamada obra creadora de la literatura venezolana de los últimos años, la novela *País portátil* de Adriano González León y en la cual, por primera vez en la narrativa venezolana, aparecen simultáneamente los contextos de la violencia feudal y de la violencia imperialista. Con una intuición propia de un escritor excepcional, el autor capta la diferencia histórica de ambas violencias,

correspondientes a sistemas sociales de épocas diversas, pero que, sin embargo y paradójicamente, coexisten en un mismo tiempo histórico en Venezuela, razón por la cual los frutos de la violencia feudal y los de la violencia imperialista se entrelazan en nuestra tierra, un país mudable y transportable, que pasa de las manos débiles a las manos fuertes, no importa que se utilice el chopo de la montonera en el feudo o la ametralladora punto cincuenta en la trepidante y modernísima Caracas. Ametralladora y chopo se juntan para un mismo objetivo: hacer que el país siga siendo portátil<sup>67</sup>.

Finalmente, ya no como ficción sino como el más tremendo de los documentos que hasta hoy integran el testimonio rojo, la reciente historia nos deja en las manos el *Expediente negro*, de José Vicente Rangel. Este libro recoge el proceso de investigación (material parlamentario y periodístico) iniciado y llevado hasta su culminación por el diputado José Vicente Rangel y una comisión especial del Congreso Nacional sobre la detención, tortura, asesinato y “desaparición” de Alberto Lovera, un dirigente del Partido Comunista de Venezuela apresado por la Dirección General de Policía (Digepol) en tareas de lucha clandestina, el 18 de octubre de 1965. *Expediente negro* demuestra la participación directa del mencionado cuerpo policial en el asesinato del profesor Lovera así como la complicidad, con el tenebroso hecho, de muy altos personajes del Gobierno de Leoni, incluido entre ellos, el propio ministro de Relaciones Interiores de entonces, el doctor Gonzalo Barrios, candidato por Acción Democrática a la Presidencia de la República en el momento en que estamos escribiendo.

Las circunstancias que rodean la muerte de Lovera —dice José Vicente Rangel—, el enseñamiento contra el detenido, la tortura, la brutal y fría decisión que movió a los victimarios, es decir, todo ese clima espeso, mefítico, propicio a la consumación

de este crimen político sin antecedentes en Venezuela, no podrá ser descifrado por quienes busquen una respuesta en la superficie de los métodos policiales. La clave de todo lo ocurrido está en la esencia de una política que circula a través de sutiles canales, integrada verticalmente, autorizada unas veces, otras con tácito respaldo, pero en todo momento oculta tras pliegues de ciertas apariencias democráticas<sup>68</sup>.

A nosotros nos correspondió, por generosa distinción del autor, escribir un prólogo para *Expediente negro*. De lo que allí decimos tomamos lo siguiente para cerrar este capítulo incompleto sobre un expediente de violencia que no se ha cerrado todavía:

El Caso Lovera, como se le conocerá en la historia, ha servido para poner en claro las fuerzas antagónicas que hoy se manifiestan y disputan la conducción de Venezuela. Hemos hablado de los ejecutores directos de esa muerte. Queremos ahora decir que ellos constituyen la parte final de una pirámide sangrienta cuya base está formada por la dominación imperialista y el poder económico norteamericano en nuestro país. Entre esta base y aquella cúspide ejecutora se van escalando, desde abajo hacia arriba, en la concepción y ejecución del crimen, la oligarquía comercial y financiera —asociada a la base misma— y los partidos políticos que, por pura y simple función de gobierno sin poder, se convirtieron en agentes represivos de las fuerzas que sustentan la pirámide.

Así como hay un engranaje internacional poderoso para impedir y silenciar los expedientes negros que denuncian la corrupción y los crímenes de las clases dominantes, hay también un engranaje



internacional dinámico para la solidaridad con los ofendidos, humillados y explotados: *Expediente negro* ha desenmascarado a un sistema fariseo que esconde crímenes horribles con un velo formal de leyes prostituidas y que perdió el respeto con el derecho elemental de la vida.

Y queda ante nuestro país y ante el mundo el expediente abierto de una causa que habrá de cerrar una justicia revolucionaria por la cual murió Alberto Lovera y por la cual han sido perseguidos, torturados, asesinados y “desaparecidos” tantos hombres y mujeres sobre la violencia geográfica de Venezuela. Ellos enlazan sus vértebras y juntan los ríos de su sangre con la sangre y las vértebras de los caídos por la liberación de otros pueblos sobre la faz de un mundo donde los oprimidos aprendieron y aprenderán, con dura lección, que la violencia de los explotadores sólo puede ser vencida por la violencia de los oprimidos.

## Para qué la violencia

*Déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor.*

ERNESTO CHÉ GUEVARA

La pacificación es la cuestión fundamental de Venezuela en el momento en que escribimos: todos los sectores del país, incluyendo el Gobierno y las fuerzas rebeldes, están de acuerdo en su perentoria necesidad. Las dificultades se presentan cuando, en la práctica, se confrontan las fórmulas y condiciones de esa pacificación porque, entonces, asoman sus agudas aristas las posiciones divergentes, contrastantes e irreconciliables que reflejan las contradicciones no resueltas en la base. La pacificación deja de ser un valor abstracto y toma partido en la contienda: hay una imagen oficial de la pacificación, hay una pacificación colonialista, hay una pacificación nacionalista, hay una concepción militar de la paz y hay un interés pacificador de los hombres de negocios. El problema no es, pues, entre la guerra y la paz como dilema universal sino entre una determinada guerra y una paz determinada, entre un género de violencia y un género de paz.

¿Cuál es el género de violencia que hoy estremece a la sociedad venezolana y cuál es el género de paz que esa violencia exige? Esta es una cuestión importante y, en rigor, constituye la razón de ser de este ensayo: en los capítulos anteriores hemos tratado de sentar las premisas para acercarnos a una respuesta seria. Creemos que el lector, si nos ha seguido hasta aquí, podría ayudarnos a deducir esa respuesta.

¿Qué sentido tiene que, para hablar de la violencia en Venezuela, hayamos acudido a la historia del problema agrario, al análisis del sector industrial, a la síntesis de la colonización económica del país mediante las inversiones de capital extranjero y, finalmente, a la disección de la burguesía venezolana, y a la caracterización de sus dos capas? Tales incursiones nos han llevado a fortalecer conclusiones muy precisas cuyo valor no reside en su novedad —casi todas enriquecen la cantera del combate diario— sino en su comprobación histórica y científica. Recordaremos, brevemente, las siguientes: el estudio de la cuestión agraria nos permitió seguir de cerca la formación del sistema latifundista, comprobar un proceso continuo de concentración de la propiedad en pocas manos y ver cómo dicho proceso entraba en conflicto con la existencia de grandes masas campesinas desposeídas y explotadas siempre dispuestas a seguir, hasta sus últimas consecuencias, toda acción capaz de despertar en ellas la esperanza de poseer la tierra y de participar en la riqueza social que las excluye. Este conflicto histórico ha sido una de las raíces de la violencia en Venezuela: su savia alimentó las guerras de emancipación e impulsó los incendios de la Guerra Federal.

Como conflicto no ha sido resuelto todavía y, en el tiempo presente, dos nuevos estímulos están fecundando aquellas viejas raíces. Por un lado el crecimiento de la población rural en términos absolutos y la presión que los contingentes cada vez más numerosos de ese campesinado ejercen en los linderos de la tierra monopolizada; y por el otro, el fracaso de una reforma agraria de la cual se han beneficiado terratenientes burócratas pero que ha dejado intacto el problema social y económico del agro, añadiendo así una frustración más a la cadena de esperanzas fallidas que forman la historia trágica del campesino venezolano.

Por su parte, el análisis del sector industrial nos muestra, objetivamente, a una industrialización importadora, aislada y mediatizada por

el capital extranjero, desligada del sector agrícola e incapaz de absorber más del 10% de la población activa del país. Una industrialización así conducida no resuelve el problema de la injusticia económica comprobada en el sector rural ya que deja afuera los excedentes con que toca a sus puertas la migración rural-urbana.

Sobre estos problemas de la agricultura y de la industria gravita, generándolos en forma sustancial, el sistema capitalista extranjero que explota los recursos básicos —petróleo, hierro— penetra todos y cada uno de los sectores restantes de la economía, invade y conforma a sus intereses la organización y funcionamiento institucional del país y transfiere al exterior los excedentes de una riqueza que es nacional y que es percedera. Queda, sin embargo, una parte minoritaria de aquellos beneficios como ingresos que retornan al país y que, según tesis de la “diversificación económica”, son de un monto suficiente para entender las necesidades del desarrollo y del cambio de la estructura monoprodutora.

Veamos cuánta dosis de verdad y cuánta de falsedad se encierran en esta generalización.

Los estudios de especialistas autorizados, algunos ya citados por nosotros, y el análisis breve que hicimos en el capítulo respectivo, nos demuestra que son tres los principales receptores del ingreso residual que el petróleo deja en Venezuela: los obreros, la burguesía y el Gobierno. Los obreros son 28 mil, hace quince años para una producción tres veces menor se utilizaban 50 mil, que constituyen el 1% de una población activa dentro de lo cual su proporción va decreciendo como consecuencia de los avances tecnológicos internos de la industria petrolera. Estos obreros ganan salarios comparativamente mayores que los del resto de los trabajadores del país pero que, sin embargo, no reflejan la creciente productividad del trabajo en la industria petrolera: al permanecer estancados mientras esta productividad aumenta

constituyen un capítulo más de la explotación y de la transferencia al exterior de nuestra riqueza. La burguesía parasitaria, que medra a la sombra del negocio petrolero y acumula capitales en el sector de la especulación comercial y financiera, no es un factor de estímulo sino de freno del desarrollo y como tiene conciencia lúcida de que su supervivencia está ligada y depende de la conservación de la estructura que la alimenta, lucha por el mantenimiento de este orden injusto y deformado con el denuedo de quien lucha por su propia vida. Y, finalmente, el Gobierno no es otra cosa que el reflejo de los intereses dominantes, en otras palabras, es la expresión política del poder económico (sistema capitalista extranjero y oligarquía interna) y está dirigido por representantes de los sectores dominantes o, como en el caso presente, por una combinación contradictoria de tales representantes y elementos de la pequeña burguesía que han dado la espalda a su compromiso con las clases populares. Este Gobierno, que es el mayor perceptor interno de aquel ingreso, lo administra de acuerdo a su naturaleza política de tal forma que no genere desarrollos peligrosos para la conservación de la fuente estructural que ese mismo Gobierno refleja.

Ni aquella burguesía ni este Gobierno pueden ser factores de un cambio de estructuras. Esto queda bien demostrado a lo largo de nuestro estudio. Por eso, cuando sus representantes utilizan esta expresión y prometen ese cambio, o están haciendo demagogia con gran cinismo, o, en el mejor de los casos, están confundiendo el cambio estructural con el simple reformismo.

La otra conclusión que se desprende de nuestro estudio, con una evidencia plena y con la fuerza de los acontecimientos en trance de parto, es la necesidad, la urgencia, la inevitabilidad de ese cambio de la estructura, expresión que recupera toda su frescura vital cuando la seguimos, como hemos hecho en este ensayo, desde sus raíces hasta sus floraciones.

¿Cuáles son las fuerzas que están emplazadas por el compromiso de realizar el cambio? Hemos visto que las fuerzas comprometidas a conservar la deformación estructural son las del capitalismo y el Gobierno que refleja los intereses de una y otra. Frente a ellas, están las clases directamente explotadas y víctimas de ese orden institucionalmente remachado. Son los campesinos y los obreros en primer término, son los sectores pauperizados de la pequeña burguesía, marginados por una riqueza concentrada en las alturas, son los estudiantes que constituyen vanguardia de la juventud venezolana y el símbolo histórico de la pureza, la gallardía y el coraje revolucionario, son los intelectuales y los artistas revolucionarios cuyo papel no se ha definido con claridad en Venezuela y cuyas fluctuaciones presentes tienen que dar pasos a la conciencia lúcida, al compromiso y a la combatividad y son también, dentro de sus limitaciones y de sus escorias fronterizas, los hombres de esa burguesía nacionalista que aún no se atreve a romper la cáscara de su enajenación, pero cuyo desenvolvimiento es cada día frenado por el triángulo dominante del poder económico.

En Venezuela están dadas las condiciones para el avance y la supremacía de estas fuerzas. Hemos comprobado, en la brevedad de este ensayo, la marcha acelerada de una crisis profunda que va a ahondar los desequilibrios económicos y los desajustes sociales. Esta crisis se pone de manifiesto, a veces, en expresiones coyunturales depresivas y se disimula otras bajo la apariencia de mejoramientos inestables que, en algunos casos como el que vivimos actualmente, son provocados por manipulaciones monetarias, por desviaciones improductivas del gasto público y por inyecciones cada vez más altas y frecuentes de préstamos internacionales que equivalen a un gasto adelantado, a una disminución real del ingreso futuro ya de por sí decreciente.

Tan apremiante es el cambio, tan evidente su necesidad y tan incontenible su realización que las propias fuerzas empeñadas en la

conservación de las viejas estructuras se han visto obligadas a cubrir su naturaleza reaccionaria con los velos de un lenguaje renovador. También esas fuerzas y las organizaciones que las representan hablan de cambio y aún añaden el calificativo de estructural. Con esto pretenden lograr dos objetivos: restarle a este lenguaje su exclusividad revolucionaria para crear confusión en las masas y cubrir la desnudez de un reformismo incapaz de resolver la crisis con la fábula de un propósito transformador. En el fondo de esta comedia fermenta la angustia de toda sociedad próxima a una conmoción histórica de sus cimientos, y ello es tan cierto que los representantes más avanzados y sagaces de las clases dominantes estarían dispuestos a ceder en sus privilegios más allá del límite normalmente tolerado, a fin de mantenerse a flote y dominando.

Llegados a este punto no podemos ni queremos rehuír ni aplazar la cuestión fundamental que toca la violencia y que se formula con la integración acerca de la vía para el cambio. De acuerdo al estilo directo con que hemos planteado los problemas: ¿Cuál ha de ser, cuál es el camino adecuado que deben transitar las fuerzas de la izquierda nacionalista para realizar, a cabalidad y a fondo, la sustitución de la estructura dual y neocolonialista de Venezuela por un sistema avanzado que asegure el desarrollo autónomo de la vida material y espiritual del país? ¿Debe ser un camino pacífico o un camino violento? ¿Han de utilizar esas fuerzas los recursos institucionales creados, para lograr su ascenso y control del poder político o han de conquistar este poder a sangre y fuego? La respuesta a esta pregunta es el punto de partida de serias divergencias entre los sectores nacionalistas cuya unidad obraría como el mejor estímulo para acelerar los dolores de parto en Venezuela. Debemos, por tanto, volcar en su respuesta toda la seriedad, toda la ponderación y toda la integridad del compromiso en que hemos empeñado nuestros actos, nuestras palabras y nuestra vida.

Si algún partido podemos sacar a todo lo escrito hasta aquí es el de estar seguros de que quien nos haya seguido en la lectura de los capítulos anteriores sabe que al hablar de un cambio estructural en Venezuela, estamos objetiva y científicamente hablando de revolución social y que ese cambio de una estructura por otra más avanzada implica la sustitución de unas relaciones de producción por otras y, asimismo, el ascenso de las clases populares y de sus legítimos representantes al nivel de la dirección económica y política del Estado. En el caso venezolano, para precisar el punto, el cambio estructural entraña un proceso complejo que se iría alcanzando mediante el dominio, administración y control (nacionalización) de los recursos naturales y materiales del país, lo cual significa la sustitución de la explotación extranjera del petróleo, del hierro y de otros recursos y servicios por la explotación nacional de los mismos. Pero aquí no termina sino que comienza la cadena de las implicaciones del cambio: la administración de un Gobierno nacionalista y popular determina una inmediata y progresiva redistribución del ingreso que elimine la concentración de la riqueza en pocas manos, lo cual significa un cambio radical en la política del gasto público, la derogación y modificación de las leyes y las instituciones creadas para garantizar los privilegios de las clases que detentan el poder económico y concentran la riqueza, y la creación de nuevas leyes y de nuevas instituciones que racionalicen y aseguren la política económica revolucionaria. De igual modo, revolución social (cambio de estructura) implica proscripción del latifundio, distribución de la tierra entre los campesinos y organización cooperativa y eficiente de los mismos. En el sector industrial, las implicaciones fundamentales se refieren al control estatal de las industrias básicas, a la eliminación de importaciones manufactureras con la producción agrícola y con las producciones básicas a fin de reducir al mínimo imprescindible la dependencia del abastecimiento externo de materias primas e insumos industriales.



De estos y otros cambios en las relaciones económicas se derivan cambios y sustituciones no menos importantes y radicales en el orden social, jurídico, político y cultural. Se trata, ya lo hemos dicho, de un proceso complejo y profundo que va a remover los cimientos de la sociedad venezolana. Es un proceso en el tiempo, con un período de transición en el cual se pondrán en juego y se aprovecharán al máximo las reservas científicas, técnicas, organizativas e intelectuales del país. Es un proceso que requiere la asimilación provechosa de las experiencias internacionales similares y que exige toda la madurez, prudencia, iniciativa y energía de los equipos dirigentes de vanguardia. Es una obra, en fin, para la cual vale la pena haber nacido y tener una vida que ofrecerle. Todo sacrificio es pequeño y toda muerte es jubilosa cuando se rinden en función de esta lucha liberadora que no se mide ni se ejecuta con el gasto espectacular, ni con la pose heroica, ni con la mentira romántica y vacía, sino con el esfuerzo permanente, con la humildad de la tarea concreta, con la conciencia lúcida de que ser hombre tiene sus limitaciones, pero con la serena firmeza y el orgullo indomable de quien sabe, con certidumbre, que donde quiera que esté —en la calle, en la fábrica, en el campo, en el aula o en la cárcel— está construyendo un mundo sobre las ruinas de otro y es dueño del futuro.

Nadie que ame de este modo la vida y el mundo hasta el punto de querer trasformarlo en algo mejor para todos puede ser un maniático, un asesino o un cultor de la violencia por la violencia misma. Muy al contrario, cuando se desea entrañablemente y se lucha por una realidad nueva se quiere conservar la vida para ver fructificar esa nueva realidad. Lo que no debemos olvidar, porque es una verdad sencilla como todas las grandes verdades, es que a tal punto se identifica en el ser revolucionario la voluntad y la decisión de transformar el mundo, que esa decisión y voluntad llenan su vida, se confunden con ella, le dan su primordial sentido y ya son indesligables hasta el punto de que

el verdadero revolucionario prefiere sin vacilaciones correr el riesgo de la muerte que aceptar la pérdida o admitir la renuncia de su condición de revolucionario.

Y eso, precisamente eso, es lo que ha pasado allí donde el conflicto entre explotadores y explotados ha originado movimientos de liberación cuando las fuerzas dominantes se han puesto desde sus posiciones de poder económico y de poder político al avance de las fuerzas renovadoras y han decretado su aniquilamiento lanzando sobre ellas todo el peso de sus instituciones y de sus armas, cerrándoles el paso con todos los medios que les permiten su poderío y reduciéndolas a la única alternativa válida en este caso, la alternativa violenta, el derecho a la rebelión siempre subyacente en la base misma de la soberanía popular y en la condición y dignidad del oprimido.

Estamos ahora en capacidad de volver a la cuestión planteada en relación con Venezuela y comenzar preguntando ¿Aceptarán pacíficamente las clases dominantes el ser sustituidas en la dirección económica y política del país? ¿Aceptará pacíficamente el capitalismo extranjero abandonar un negocio tan productivo como el petróleo? ¿Aceptará el poder imperialista pacífica y cortésmente, que Venezuela prescindiera de la tutela de Estados Unidos y explote y venda su petróleo a quien quiera comprarlo en el mercado internacional? ¿Aceptarán pacíficamente los latifundistas la eliminación del latifundio y el reparto de los campesinos? ¿Aceptará el comercio importador, sin resbalarse, la reducción de las importaciones superfluas y el aumento progresivo de los impuestos? ¿Aceptará, sin chistar, la burguesía estéril la sustitución de las leyes y de otras instituciones que consolidan sus privilegios, por instituciones y leyes que disminuyan sus ingresos y redistribuyan sus riquezas?

El evolucionismo democrático se fundamenta en la premisa de que las partes integrantes de la comunidad aceptan las reglas del juego democrático y se someten rigurosamente a él. El evolucionismo

democrático es, teóricamente, una alternativa pacífica hacia el cambio. ¿Aceptarían, en Venezuela, un juego democrático adverso a sus intereses las compañías petroleras? ¿Lo aceptaría la oligarquía? La historia prueba que no, y que todo reformismo que traspase los límites de tolerancia fijados por las clases dominantes, es desanimado y tronchado al nacer. En Venezuela, el evolucionismo democrático, dentro de la conformación social y política que domina al país, no puede ir más allá de este reformismo.

¿Significa esto que propugnamos la guerra? ¿Predicamos, acaso, la violencia como la alternativa exclusiva del cambio? Cualquiera, si se le ocurre, puede predicar irresponsablemente la violencia y ello no pasaría de ser una actitud individual anárquica, fácil de castigar y dominar. La violencia popular, la violencia colectiva no va a ser provocada por caprichos de alguien que, sin más, se ponga a recomendarla. La violencia arraiga allí donde hay raíces que la pueden nutrir y en Venezuela, ya lo hemos visto, hay raíces que alimentan la violencia.

No se trata, en este punto, de volver sobre los episodios iniciales de la violencia, ya comentados. Tales episodios tienen su verdadera importancia porque fueron los detonantes de una explosión en cadena que no ha podido ser detenida con la aplicación exclusiva de métodos policiales y militares. Pero nos interesa ahora, fundamentalmente, el desarrollo y situación actual de la violencia. En su origen tuvo mucho que ver la soberbia de un Gobierno intransigente, servil ante las clases dominantes y limosnador de su respaldo; decidido, precisamente por ello y como precio de un mantenimiento, a no emprender las reformas básicas a que estaba comprometido con las masas y a impedir, por la fuerza, toda forma de exteriorización del descontento popular (“las calles son de las fuerzas del orden público”).

Este factor estimulante de la violencia, por vertiente del poder político. Por la vertiente de las masas están obrando los estímulos históricos,

las raíces de la violencia en Venezuela y obra, también, un factor exógeno importante: el ejemplo triunfante de la revolución cubana, una demostración cercana, concreta, convincente y duradera de que en América Latina es posible liberarse del yugo imperialista y de las coyundas de una oligarquía asociada con gobiernos militaristas para la empresa de explotar a un pueblo.

Es tan arrollador, el ejemplo, tan estimulante la lección y tan imbatible el poder surgido de la entera identificación de un pueblo con su revolución, que su experiencia actúa sobre la conciencia de las masas populares de América Latina con mayor eficacia que todas las explicaciones, todos los discursos y todas las teorías.

Pero se equivocan quienes aprecian el surgimiento de la violencia en Venezuela como un fenómeno artificialmente engendrado por el ejemplo de la revolución cubana. Ello sería como decir que los movimientos de emancipación de otros países latinoamericanos fueron engendros miméticos de la guerra independentista de Venezuela. Una revolución no se copia ni se traslada como un bulto postal. Una revolución no prospera si carece de raíces profundas que estallen a flor de tierra impulsando el follaje de su violencia.

Si en Venezuela la violencia ha sido el fruto de cerebros calenturientos víctimas de un pasajero entusiasmo por la hazaña de Fidel Castro ¿Por qué, entonces, no se ha extinguido con la rapidez con que suelen esfumarse los espejismos sociales carentes de razón económica y de raíz histórica? ¿Por qué se ha prolongado, pese al despliegue de fuerzas y la intensidad represiva del Gobierno, un estado persistente de violencia que ya tramonta su segundo lustro? ¿Por qué se anuncia oficialmente el aniquilamiento de las guerrillas en una región y luego reaparecen en esa misma región? Estas preguntas no quedan satisfechas con las superficialidades con que suele responderlas la propaganda oficial porque no se puede explicar la vigencia

del hecho armado y su arraigo en zonas rurales acudiendo al expediente del “bandolerismo” o de los jovencitos engañados por una campaña subversiva. Nadie que tenga un adarme de sentido común, de sensibilidad política y de conciencia histórica se da por satisfecho con explicaciones tan torpes.

En Venezuela hay que romper el tabú que impide el debate sobre el significado de la lucha armada y de las guerrillas que han venido desarrollando una experiencia de guerra en las montañas de Falcón, de Lara, de Trujillo, de Miranda, de Monagas, en los llanos de Barinas y en otras regiones del país. El mismo celo, el tono amenazante y las vías penales que el Gobierno y ejército adoptan frente a quién se atreve a penetrar en el análisis de la violencia y de la represión con un lenguaje que no sea el permitido por la propaganda oficial es ya un indicador de que algo podrido anda en Venezuela.

Y ese algo podrido es la estructura monstruosa cuyo velo hemos descorrido para hacerla aparecer con toda la repugnancia de su cáncer avanzado. Las fuerza que, gracias a esa estructura, succionan y concentran la riqueza no están dispuestas a ceder sus privilegios, y si aceptan el juego democrático es sólo en la medida y hasta el límite en que no sean afectadas sus prerrogativas de dominio económico y político. La penetración de sindicatos y ligas campesinas, la división impuesta desde arriba, la ilegalización de las organizaciones políticas más radicales, la violación del fuero parlamentario, la utilización caprichosa de las leyes, la prostitución de la justicia, el cierre de periódicos, la prisión de obreros, campesinos intelectuales y estudiantes, la apertura de campos de concentración más atroces que la Guasina de Pérez Jiménez, las torturas, los fusilamientos y las “desapariciones” de dirigentes de izquierda, constituyen las pruebas más contundentes de que la paz que las clases dominantes quieren imponer en Venezuela corresponde al género de paz inaceptable para el ser revolucionario de los venezolanos porque es

la paz humillante de la explotación colonialista, de la injusticia económica y de la enajenación. No nos engañamos sobre esto ni cometamos la ingenuidad de creer que podemos engañar a las clases dominantes.

Decíamos que es necesario romper el tabú que circunda toda discusión del tema de la violencia, porque un país que durante siete años se ha visto estremecido por ella tiene que reflexionar sobre ella. La violencia no puede ser un tema exclusivo del Ministerio de Relaciones Interiores, ni la meditación sobre el tema puede ser el oligopolio de las organizaciones directamente implicadas en la contienda. Yo afirmo mi derecho a meditar públicamente sobre la gravedad del tema, tanto más cuanto sostengo, y no creo haberlo demostrado, que más allá y más acá de las contingencias y de las tácticas actuales de los partidos de izquierda existen deformaciones sociales y económicas profundas en la sociedad venezolana cuya situación crítica, agudizada por la torpeza de las clases dominantes, constituyen una fuente viva de violencia.

No he escrito este ensayo para predicar la violencia, ni para hacer propaganda de guerra, sino para examinar realistamente cuál es la alternativa menos costosa y sangrienta que se ofrece a la revolución venezolana. Esa alternativa tiene que ser analizada, sin embargo, a la escueta luz de la objetividad histórica, sin eufemismos disimulados y sin cobardía en los planteamientos. Sólo así tiene valor lo que ahora vamos a decir como conclusión de este libro.

El recorrido ambivalente de la violencia arroja un saldo sobrecogedor. Se ha descornado el velo de crímenes horrendos, se cuentan por centenares los adolescentes muertos y por miles las víctimas de uno y otro lado. Cada solemnidad oficial sirve al Presidente de la República, al ministro de la guerra y al de la policía para anunciar el aniquilamiento de los grupos guerrilleros dispersos que, como el ave Fénix, parecen resurgir de sus cenizas. Cada día se refina el arte de la tortura y del terror y cada día, sin embargo, la sociedad venezolana está más

envuelta y comprometida en el incendio efectivo o potencial de la violencia, una violencia que, en su expresión revolucionaria, no es otra cosa que el estallido germinal de aquellas raíces afincadas en la historia de nuestro país y fecundadas por las deformaciones de una estructura cuyo cambio radical es el camino segundo hacia la única paz que está dispuesto a aceptar un pueblo libre.

Pero ningún movimiento revolucionario, que lo sea legítimamente, escoge por propia y libre iniciativa el camino más sangriento y doloroso, sino que lo acepta y lo enfrenta cuando las circunstancias y la conducta de las clases dominantes se lo imponen. La guerra de los humildes ha sido siempre una guerra provocada por los soberbios. La violencia de los explotadores. Esta verdad histórica la demostraron los desposeídos y violentados que siguieron a Bolívar y a Zamora, a José Martí y a Emiliano Zapata y, en el mundo contemporáneo, lo demostró el pueblo que siguió a Fidel Castro, el que siguió a Ho Chi Minh contra la Francia colonial y que, ahora, en el Vietnam del Sur se bate con el imperio capitalista más poderoso del mundo y lo mantiene dando bandazos entre la desesperación, la impotencia y la soberbia.

En Venezuela no están cerrados los caminos de la paz. Hay caminos abiertos, pero a condición de que entendamos la verdadera lección de la violencia que, como todas las enseñanzas profundas, es bien sencilla y consiste en comprender, ahora mismo y por parte de quienes deben comprenderlo, que no se realizan transformaciones fundamentales, ni se cambian las estructuras deformadas de un país, ni se gobierna a un pueblo impaciente por una vida mejor sólo mediante la utilización de policías y militares. Y esto es, precisamente, lo que hizo el Gobierno de Rómulo Betancourt y de Rafael Caldera y está haciendo ahora el de Raúl Leoni y Jóvito Villalba<sup>69</sup>: gobernar con la Constitución en la boca y la ametralladora en las manos; gobernar sin principios, de espaldas a las masas populares; gobernar sin ideales, sin juventud y sin poder, porque el poder lo ejercen,

en esencia, el capital monopolista extranjero y la oligarquía asociada a ese capital. Gobernar, en fin, por el placer senil de gobernar.

En la Venezuela de hoy se han producido serios desajustes en el movimiento popular, pero la crisis es tan aguda y la conducción política del país ha sido tan torpe, que las aristas y resquebrajaduras entre los sectores revolucionarios anti-imperialistas tendrán forzosamente que limarse las primeras y soldarse las segundas, con vías a consolidar un pétreo movimiento de integración nacional para avanzar hacia el poder y hacia la revolución social.

En el momento en que escribo, esa imprescindible unidad no existe. Aún hay dispersiones, aún hay aristas que rozan y resquebrajaduras abiertas, pero la historia las está juntando con su dialéctica implacable. La juventud de ideas avanzadas, que por errada ubicación milita todavía en los partidos tradicionales, no tardará en desprenderse, se está desprendiendo ya, de la matriz podrida para acercarse y engrosar la cepa nueva. Crece el ejército de los desempleados y de los descontentos. Crece también la conciencia de liberación, y en la medida en que esta conciencia se imponga veremos que aquella aparente base sindical y campesina que Betancourt obsequió traidora y servilmente a las derechas de este país, valiéndose para ello de conductores corrompidos y a sueldo, encontrará nuevamente el cauce legítimo de su lucha en el seno de su clase.

Este movimiento no quiere la guerra por la guerra misma, ni tiene una vocación morbosa de violencia. Tiene la tranquilidad, la fuerza y el dinamismo de las determinaciones históricas. Todos los que en él estamos queremos vivir para realizar y contemplar el mundo que vamos a construir. El ejército de la fuerza y de la represión, sin embargo, más van a estimular que a arredrar el cumplimiento de aquel compromiso.

Venezuela continúa bajo el signo de la explotación imperialista, pero algo ha cambiado esencialmente después de lo que ha sucedido en estos



últimos siete años, y es que, cualquiera que haya sido, hasta hoy, el resultado en términos cuantitativos y cualesquiera que sean los errores en la lucha, un pueblo en ascenso camina con paso firme a la conquista de una paz creadora de hombres libres porque ya nunca más aceptará la paz de los explotadores.

Tal es la profunda lección de la violencia.

- (1) Al entrar en prensas este libro, ya el Dr. Villalba se había separado de su coalición gubernamental con Acción Democrática a fin de realizar una campaña electoral fuera del Gobierno, y hasta en la oposición. Sin discutir el fondo ético de estas decisiones, ni las razones políticas que los partidos tienen para estos movimientos, nosotros registramos el hecho de su prolongada asociación con Leoni porque ello entraña una responsabilidad histórica para el Dr. Villalba y para su partido

## Notas referenciales

[1]\_ Acompañaban a Betancourt, y tomaron la palabra en el acto, Raúl Leoni (presidente, entonces, del Congreso y hoy de la República), Rafael Caldera, jefe máximo del socialismo en el país; Jóvito Villalba, el otro líder de la coalición gubernamental; Ramón Quijada, presidente de la Federación Campesina de entonces y Víctor Giménez Landínez, ministro (socialcristiano) de agricultura y el teórico por excelencia de la Ley Agraria que se estaba firmando.

[2]\_ Instituto Agrario Nacional. (1964). *La Reforma Agraria Venezolana, 1959-1963*. Caracas.

[3]\_ Brito Figueroa, Federico. (1963). *La estructura económica de la Venezuela colonial*. (pp. 142, 143 y siguiente). Caracas: Universidad Central de Venezuela.

[4]\_ Liévano Aguirre, Indalecio. (s/f) *Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia*. (Vol. I, p. 43). Bogotá: Ediciones Nueva Prensa.

[5]\_ Véase: Brito Figueroa. *Ob. cit.* (pp. 198-200).

[6]\_ Germán Carrera Damas, en su revisión de frases hechas y “clisés” interpretativos, rechaza esta ligereza de empatar alegremente dos hechos históricos tan diferentes como son la Revolución Francesa y los movimientos emancipados de Hispanoamérica. Nuestro propósito, aceptando aquellas críticas, es solo el de señalar la utilización de un vocabulario importado y de un barniz ideológico que presta sus servicios (llena un vacío) hasta tanto los acontecimientos mismos vayan creando su propio estilo.

[7]\_ Para una visión esclarecedora de este problema y para una penetración a fondo en la materia, véase: Carrera Damas, Germán (1964). *Sobre el significado socio-económico de la acción histórica de Boves*. Caracas, Venezuela: Imprenta Universitaria.

[8]\_ Troconis Guerrero, Luis. (1962). *La cuestión agraria en la historia nacional*. Biblioteca de autores y temas tachirenses. (Nº 29, p. 73).

[9]\_ Troconis Guerrero, Luis. *Ob. cit.*, p.75.

[10]\_ Irazábal, Carlos. (s/f). *Hacia la democracia*. Caracas, Venezuela: Pensamiento Vivo, 2ª ed., p. 119.

[11]\_ Véase: Carrera Damas, Germán. (1960). “Significado político-social del centenario de la Guerra Federal”. *Crítica Histórica*. (pp. 71-110). Caracas, Venezuela: Cantaclaro.

[12]\_ Partido Comunista de Venezuela. (1960) *La cuestión agraria*. (pp. 18-19). Caracas, Venezuela: Cantaclaro.

[13]\_ Fernández y Fernández, Ramón. (1948). *Reforma Agraria en Venezuela*. (p. 17). Caracas, Venezuela: Novedades.

[14]\_ Al morir Gómez se hace del conocimiento público la extensión y cuantía de sus propiedades: extensos latifundios poseía en Aragua, Carabobo, Táchira, Guárico, Distrito Federal, Miranda, Apure, Bolívar, Cojedes, Monagas, Sucre, Yaracuy, Zulia y en la República de Colombia, en valores que excedían los 120 millones de bolívares.

[15]\_ Datos tomados del libro de Luis Troconis Guerrero, ya citado (pp. 130-137).

[16]\_ Para esta fecha, las compañías petroleras poseían 4 millones de hectáreas con fines de investigación y explotación del subsuelo. En 1947, Rockefeller firma un convenio con el Gobierno Nacional y crea la Corporación Venezolana de Economía Básica (Bs. 100 millones) para la fundación de empresas agrícolas de capital mixto. Hoy esa empresa, sin participación de capital nacional, es una de las monopolistas de la industria láctea en el país al tiempo que controla la ganadería lechera de Perijá en el Zulia (Véase: Chávez, L. F. *Geografía agraria de Venezuela*, Universidad Central, Caracas, 1963, p. 175).

[17]\_ Ver: Colegio de Economistas. (1964). *Diagnóstico de la economía venezolana*. (pp. 25-40). Caracas, Venezuela: Universidad Central de Venezuela.

[18]\_ Orta, Celio S. (1963). La agricultura y el desarrollo económico del país. *Perfiles de la economía venezolana* (varios autores). Boletín Bibliográfico de la Facultad de Economía (edición especial). Universidad Central de Venezuela. Caracas, julio-septiembre 1963, pp. 109-127. (texto citado p. 122). La situación de los no propietarios (arrendatarios, aparceros, ocupantes) es como sigue: “Los datos del censo de 1950

arrojan un total de 137.132 unidades bajo estas formas de tenencias, las cuales disponían para el cultivo de 3,7 millones de hectáreas. Para 1961, el número de unidades no propietarias se eleva a 177.865 con 4.1 millones de hectáreas...” (pp.122-123).

[19]\_ El capital existente, para esa fecha, es de 54.879 millones de bolívares de los cuales solo 1,3% corresponde al sector agrícola.

[20]\_ Y, aun en este caso se daría prioridad a las tierras del Estado que no cumplan su “función social”, es decir, a las improductividades por naturaleza o por situación.

[21]\_ Basta una ojeada a la lista de integrantes de la comisión que elaboró el anteproyecto de esa Ley para ver que dicha clase estaba mayoritariamente representada allí. Y es curioso comprobar cómo, legislando sobre reforma agraria, se hallaban allí varios descendientes de aquellos conquistadores y colonos que recibían “mercedes” y usurpaban tierras indígenas.

[22]\_ Basta una revisión de los informes, documentos y declaraciones públicas de los organismos de la agricultura (Fedeaagro, asociaciones y uniones de cultivadores y ganaderos) para medir el grado creciente de sus problemas económicos y técnicos y de sus quejas frente a un gobierno incapaz de resolverlos.

[23]\_ Nos referimos al año 1964 y utilizamos los datos del *Informe Económico del Banco Central de Venezuela* correspondiente a dicho año. Este documento es el más serio a nuestro alcance y, como es oficial, tiene la ventaja de ser insospechable de parcialización extremista.

[24]\_ Esta cifra ha venido disminuyendo hasta situarse, tres años más tarde, en 28 mil, lo cual rebaja aquel 1,2% de población activa ocupada en el sector, al 1%, demostrando, de paso, la dinámica del desempleo tecnológico.

[25]\_ El capital extranjero es escaso en la agricultura venezolana: las tierras en manos de las compañías petroleras no lo están en función agrícola y en cuanto a las inversiones de Rockefeller corresponden más al sector industrial que a lo agropecuario propiamente. En cuanto a las posesiones de la United Fruit en el Zulia, constituye solo un capítulo anecdótico dentro del monopolio de la tierra en Venezuela.

[26]\_ Informe económico del Banco Central de Venezuela, ya citado. La desocupación petrolera es seguida de cerca por la desocupación en la minería. Ambas son tec-

nológicas y han continuado en los años posteriores a la conclusión de este ensayo, hasta 1967 cuando se añade esta nota (véase los Informes económicos del Banco Central correspondientes a 1965 y 1966).

[27]\_ Ver cifras más adelante, al tratar del desempleo en el sector industrial.

[28]\_ Normas para orientar la concesión de créditos, de acuerdo con el decreto del Ejecutivo Federal y el programa para fomentar la producción nacional, en folleto de 14 páginas publicado sin fecha y sin referencia editorial (contiene Decreto, Reglamento y Programa de la Junta). Los miembros integrantes de esta junta —Eugenio Mendoza, Luis G. Marturet y otros— son los mismos empresarios que por aquella época fundan la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) que llegará a ser la institución máxima del capitalismo en Venezuela.

[29]\_ En 1947, la creación de empresas mixtas por asociaciones entre la CVF y un grupo de norteamericanos representado por Nelson Rockefeller, rompe, a pesar de las precauciones del convenio, el sentido genuinamente nacional del proceso.

[30]\_ Los salarios monetarios del sector petrolero y del sector público determinan el módulo de las remuneraciones en la construcción privada y en la industria manufacturera.

[31]\_ Las estadísticas son del Banco Central de Venezuela: Cuentas nacionales (separata de la *Memoria* de 1959), Formación de capital (pp. 26-69).

[32]\_ El comercio, que, en los datos de arriba, está excluido de los servicios, es el sector sobresaturado de empleo: mantiene invariable su relación con el capital existente (7,4%) en los diez años de análisis; en cambio, la población activa dentro del sector aumenta de 149.678 personas en 1950 (8,8%) a 249 mil (10%) en 1959. Esto explica, en parte, la proliferación de establecimientos comerciales y la superabundancia de intermediarios, con la consecuente desorganización que se aprecia en dicho sector.

[33]\_ Banco Central de Venezuela. Hemos dado a esta fuente la mayor confianza, pero tenemos razones para dudar de sus informaciones sobre el verdadero monto de la inversión extranjera en el sector, debido, fundamentalmente, a la dificultad en la consecución de datos fidedignos. Habrá que esperar la aparición del trabajo de Armando

Córdova sobre el tema general de la inversión extranjera en el país para disponer de datos más precisos y de una interpretación a fondo.

[34]\_ Tanto para estos como para los subsiguientes cálculos, salvo excepciones que iremos anotando en cada oportunidad, utilizamos las cifras de los Informes del Banco Central de Venezuela correspondientes a 1962 y 1963. Preferimos pasar de la *Memoria* de 1959 a la de estos años, para soslayar las contradicciones de ciertos datos en las Memorias de 1960 y 1961 corregidos posteriormente.

[35]\_ *Ob. cit.*, p. 385.

[36]\_ No se trata aquí de negar las ventajas de una política de fomento a la artesanía y pequeña industria, que puede ser en sí positiva, pero sostenemos que una tal política aislada, realizada sin acompañamiento de una política clara y firme en cuanto a la inversión extranjera en las esferas más productivas del sector industrial, cae de nuevo en el reformismo propio de las economías mediatizadas y contribuye al agrietamiento de las estructuras, no resuelve sino que disfraza el problema del desempleo, y al entretenerse en un nacionalismo de miniatura, permite y hasta impulsa la enajenación económica. Aquí, por ganar batalla, puede perderse una guerra.

[37]\_ Véase: Barre, Raymond. (1962) *El desarrollo económico*. México: FCE.; Córdova, Armando. (1963) *Consideraciones acerca del tipo de desarrollo alcanzado por la economía*. Año V, N° 2, Caracas: UCV: Maza Zavala, Domingo Felipe. (1964). *Venezuela, una economía dependiente*. Caracas: Instituto de Investigaciones, Facultad de Economía, Universidad Central de Venezuela.

[38]\_ Véase: Banco Central. (1964) *Informe económico*.

[39]\_ Cordiplan. *Plan de la industria manufacturera 1965-1968* (versión preliminar mimeografiada). (p. 30).

[40]\_ Banco Central, *Informe económico* 1964, cuadro 25-60 (p. 512). La suma del período 1960-1965 nos da 7.330 millones, que sumados a 10.250 totalizan 17.580 millones de bolívares, transferidos por importación de materias primas y bienes intermedios en 15 años (la cifra de 1965, en *Informe* 1965, cuadro A 10-21).

[41]\_ Este aspecto, en lo que atañe a petroquímica —con abundancia de pruebas—,

en lo que concierne al aluminio como hecho cumplido y a la siderúrgica como riesgo constante, ha sido desarrollado en mi ensayo *Operación Puerto Rico sobre Venezuela*. (1967). Caracas: Ediciones PRIN. El lector interesado hallará en este trabajo los detalles que no puedo ofrecer aquí debido al esquema diferente de este capítulo.

[42]\_ Autores: Adolfo Berle Jr. y Chester Boules. Véase *Operación Puerto Rico* (citado). (p. 80).

[43]\_ *Informe sobre el sistema fiscal venezolano*. (1960). Caracas: Ministerio de Hacienda.

[44]\_ Banco Central de Venezuela. (1964). *Informe económico*.

[45]\_ Pérez Alfonzo, Juan Pablo. (1961). *Petróleo, jugo de la tierra*. Caracas: Editorial Arte.

[46]\_ Uno de estos “jefes” ha elogiado públicamente a la Corporación Venezolana del Petróleo como empresa de un nacionalismo “sano” al que obstaculizan los fueros de la libre empresa.

[47]\_ Malavé Mata, Héctor. (1962). *Petróleo y desarrollo económico de Venezuela*. (Introducción). Caracas: Imprenta Universitaria.

[48]\_ Sobre ese punto, véase: Colegio de Economistas de Venezuela. (1964). *Diagnóstico de la economía venezolana*. (pp.47-82). Caracas: Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela.

[49]\_ Pedro Esteban Mejías ha demostrado la naturaleza monopolística de la industria petrolera y del mecanismo de los precios en su ensayo *Monopolio y precios del petróleo* (edición especial del *Boletín bibliográfico*. 1963. Caracas: Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía, Universidad Central de Venezuela).

[50]\_ Esta burguesía intermediaria considera que tiene derecho —y en la práctica lo ejerce— de vetar disposiciones de política económica que no armonicen con sus negocios. Últimamente ese veto ha sido ejercido con resultados prácticos en lo que atañe a la política petrolera sustitutiva de concesiones, a la reforma tributaria, al aumento del precio de la leche, la eliminación de medidas de protección industrial para favorecer los intereses del comercio importador, y así sucesivamente.

[51]\_ “Podemos decir —señala el Profesor Armando Córdova— que hasta ahora el desarrollo industrial venezolano es, en buena parte, una prolongación subsidiaria de la industria extranjera, poco integrada al resto de la economía nacional. En este sentido, la industria guarda algunas de las características del comercio importador y en ciertos casos se confunde con él.” (Córdova, Armando. “Consideraciones acerca del tipo de desarrollo alcanzado por la economía venezolana”. *Revista de Economía y Ciencias Sociales*, abril-junio de 1963, pp. 5-46, p. citada: 39).

[52]\_ Eleazar López Contreras: “Proceso político-social, 1928-36” (parcialmente reproducido por *El Nacional* del 17-12-65). En esta misma edición de *El Nacional*, Jóvito Villalba, el violento de ayer y el enemigo de la violencia revolucionaria de hoy, no vacila en dar la razón a López Contreras y hacerse la autocrítica por su conducta revolucionaria de entonces (la expulsión fue el “resultado fatal de errores cometidos no solo en el Gobierno sino también en la calle [...] los dirigentes [...] fuimos secretarios o ciegos”). Sobre estos aspectos y sobre la violencia actual, véase: Díaz Rangel, Eleazar. (1965). *Reportajes*. Caracas: Asociación Venezolana de Periodistas (AVP).

[53]\_ Sobre este punto, véase: Díaz Rangel, Eleazar. *Reportajes*. (pp. 61 y siguientes). (ya citado).

[54]\_ Acosta, Cecilio. (1909) “Cosas sabidas y cosas por saberse”. *Obras*. (Vol. 111, p. 267). Caracas: Edit. El Cojo.

[55]\_ Acosta, Cecilio: “El General Julián Trujillo y consideraciones sobre política general y de actualidad”, *Obras*, ya citadas. (pp. 299-300).

[56]\_ López Méndez, Luis. (1961) “Los partidos políticos” (Mosaico de político y literatura). *Doctrina Positivista*. (T. 11. p. 244). Caracas: Edic. del Sesquicentenario de la Independencia.

[57]\_ Zumeta, César. (1964). “El costo de nuestra política” en *Doctrina Positivista* (Tomo 11 ya citado, p. 244).

[58]\_ Pocaterra, José Rafael. (1956) “Memorias de un venezolano de la decadencia”. *Obras selectas*. (p. 1302). Madrid-Caracas: Edime.



[59]\_ Dos revolucionarios venezolanos —Gustavo Machado y Salvador de la Plaza—, compañeros de luchas y de exilios durante esta década, se ponen en contacto con el pensamiento y las organizaciones marxistas de Europa y de América Latina y comienzan a dilucidar científicamente aquel cambio. Corresponde a Salvador de la Plaza el haber enjuiciado en la primera edición del periódico *Libertad* por él dirigido (México, 1928) el sentido anticaudillista del movimiento cívicomilitar de 1918-1919 y el haber señalado, a renglón seguido, el nuevo contexto antiimperialista de la lucha.

[60]\_ Véase: Machado, Gustavo. (s/f) *El asalto de Curacao* (Prólogo de Miguel Otero Silva). Barcelona, España: Imprenta Myria. Y Flores, Carlos. ([1933] 1938). *El terror y el trabajo forzado en Venezuela*. 2a edición. Managua: Edit. Novedades. (La 1ª edición, Colombia, 1933).

[61]\_ Se trata de *En las huellas de la pezuña* (Prólogo de José Rafael Pocaterra), editado en Santo Domingo, 1929.

[62]\_ Obra citada, p. 15.

[63]\_ Obra citada, p. 19.

[64]\_ *Ibidem*, p. 21.

[65]\_ Estados Unidos de Venezuela, Servicios Secretos de Investigación. (1936). *La verdad de las actividades comunistas en Venezuela*. Caracas. En la portada, la siguiente leyenda: “Relación y aparte de la numerosa documentación que posee el Servicio Secreto de Investigaciones acerca de la realidad de la propaganda comunista en el país”.

[66]\_ *Venezuela bajo el signo del terror, 1948-1952*. (1952). México: Edit. Centauro.

[67]\_ Habría que añadir, en el plano literario, otras obras tales como *Ficción 67* que recoge relatos de Héctor Mujica, unidos por el tema de la violencia. Debemos, advertir, sin embargo, que no nos hemos propuesto una revisión completa de los contextos literarios de la violencia, lo cual exige por sí solo un ensayo aparte que tome en cuenta la diversidad de tratamiento ideológico y estético del tema. Hemos buscado contextos políticos testimoniales dentro de la literatura y los hemos encontrado, para la época de Pérez Jiménez, Betancourt-Caldera y Leoni-Villalba, en las novelas de Abreu, Otero Silva y González León.

[68]\_ Rangel, José Vicente. (1967). *Expediente negro*. Caracas: Edit. La Muralla.

[69]\_ Al entrar en prensa este libro, ya el Dr. Villalba se había separado de su coalición gubernamental con Acción Democrática a fin de realizar una campaña electoral fuera del gobierno, y hasta en la oposición. Sin discutir el fondo ético de estas decisiones, ni las razones políticas que los partidos tienen para estos movimientos, nosotros registramos el hecho de su prolongada asociación con Leoni porque ello entraña una responsabilidad histórica para el Dr. Villalba y para su partido. (N.E.)





**COLECCIÓN BICENTENARIO CARABOBO**

**COMISIÓN PRESIDENCIAL BICENTENARIA DE LA BATALLA Y LA VICTORIA DE CARABOBO**

**PREPrensa e Impresión**

Fundación Imprenta de la Cultura

**ISBN**

978-980-7301-92-3

**DEPÓSITO LEGAL**

DC2021000929

**CARACAS, VENEZUELA, JULIO DE 2021**



La presente edición de  
**VENEZUELA VIOLENTA**  
fue publicada  
durante el mes  
de julio de 2021,  
año bicentenario  
de la Batalla de Carabobo  
y de la Independencia  
de Venezuela

**EN CARABOBO NACIMOS** “Ayer se ha confirmado con una espléndida victoria el nacimiento político de la República de Colombia”. Con estas palabras Bolívar abre el parte de la Batalla de Carabobo y le anuncia a los países de la época que se ha consumado un hecho que replanteará para siempre lo que acertadamente él denominó “el equilibrio del universo”. Lo que acaba de nacer en esta tierra es mucho más que un nuevo Estado soberano; es una gran nación orientada por el ideal de la “mayor suma de felicidad posible”, de la “igualdad establecida y practicada” y de “moral y luces” para todas y todos; la República sin esclavizadas y esclavizados, sin castas ni reyes. Y es también el triunfo de la unidad nacional: a Carabobo fuimos todas y todos hechos pueblo y cohesionados en una sola fuerza insurgente. Fue, en definitiva, la consumación del proyecto del Libertador, que se consolida como líder supremo y deja atrás la república mantuana para abrirle paso a la construcción de una realidad distinta. Por eso, cuando a 200 años de Carabobo celebramos a Bolívar y nos celebramos como sus hijas e hijos, estamos afirmando una venezolanidad que nos reúne en el espíritu de unidad nacional, identidad cultural y la unión de Nuestra América.



**Venezuela violenta...** Desafiante ensayo donde se analiza desde una mirada política, histórica y cultural los orígenes y las causas que determinaron la tipología de la violencia dentro de nuestra psicología nacional. Una violencia que el autor esquematiza en dos planteamientos: “la violencia feudal y la violencia imperialista”. Si bien Araujo la ubica en un contexto histórico, el centro de este estudio no solo está enfocado en los sucesos que configuraron la década violenta (1960-1970), años que marcaron una serie de eventos políticos de relevancia en Venezuela y el mundo. Desde su aparición en 1968, este libro se ha convertido en una referencia obligada al momento de visitar la Venezuela contemporánea, sin embargo, acá se debe subrayar una precisión que el mismo autor advierte: no es un libro contra Pérez Jiménez ni Rómulo Betancourt ni Leoni, tampoco una apología a la guerrilla; su objetivo es revisar la situación de una burguesía dentro del contexto agrario, industrial y petrolero que conllevó una forma particular de fracaso social en nuestro país, combinado con una representación política que desde el poder utilizó acciones violentas para contrarrestar cualquier posibilidad de repensar lo social y la democracia.

COLECCIÓN BICENTENARIO CARABOBO

